

Libros de **Cátedra**

Argentina neodesarrollista

Debates sobre el modelo

Mariano Féliz (coordinador)

FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

S
sociales



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

ARGENTINA NEODESARROLLISTA

DEBATES SOBRE EL MODELO

Mariano Féliz

(coordinador)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



Índice

PRÓLOGO	6
I. Pensar la enseñanza de la economía política	
1.1. ¿Economía política o “ciencia económica”?	10
<i>Equipo de Economía Política, 23/5/2011</i>	
1.2. ¿Hasta cuándo enseñaremos/aprenderemos neoliberalismo en nuestras Universidades?	12
<i>Facundo Barrera, 6/5/2011</i>	
1.3. Crisis de identidad	14
<i>Leandro Bona, 2/8/2010</i>	
1.4. Oscurantismo neoclásico	16
<i>Mariano Félix, 19/1/2009</i>	
II. Del neoliberalismo al neodesarrollismo	
2.1. Diez años no es nada. Reflexiones sobre la crisis neoliberal una década más tarde	19
<i>Mariano Félix, 2/1/2012</i>	
2.2. Orígenes y futuro del proyecto neodesarrollista-posneoliberal	22
<i>Mariano Félix, 25/11/2011</i>	
2.3. La alternativa de la hora es... ¿capitalismo en serio o anarco-capitalismo?	24
<i>Mariano Félix, 11/11/2011</i>	
III. Barreras y límites del neodesarrollismo	
3.1. Las patas cortas de la sintonía fina	27
<i>Mariano Félix, 5/4/2012</i>	
3.2. Energía, trenes, minería. El agotamiento del modelo privatizador	30
<i>Mariano Félix, 24/2/2012</i>	
3.3. Regalías para pocos	32
<i>Matías García y Mariano Félix, 14/9/2012</i>	
3.4. Soberanía alimentaria en el país de la soja. Elementos para el debate.	35
<i>Mariano Félix y Matías García, 6/6/2011</i>	
3.5. Crisis habitacional. Dialécticas del modelo neodesarrollista	37
<i>Equipo de Economía Política y Equipo de Hábitat Popular, 29/12/2010</i>	
3.6. ¿YPF recuperada? Notas sobre la industria del petróleo en Argentina	40
<i>Mariano Félix, 28/5/2012</i>	

IV. ¿Liberación o dependencia?

- 4.1. Fetiche exportador _____ 44
Emiliano López, 30/11/2009
- 4.2. Pago de la deuda: ¿soberanía o dependencia? _____ 46
Equipo de Economía Política, 22/5/2010
- 4.3. Lo que se divisa _____ 49
Lisandro Fernández, 12/3/2012
- 4.4. Cacerolas de ayer, cacerolas de hoy _____ 51
Melina Deledicque y Mariano Félix, 11/6/2012

V. Finanzas públicas y presupuesto

- 5.1. La “reforma” que nunca llega. Una mirada sobre la estructura impositiva _____ 54
Mariano Félix, 21/7/2008
- 5.2. Rebajar el IVA _____ 58
Ismael Domian, 2/2/2009
- 5.3. Presupuesto 2011. ¿Cuáles son sus presupuestos? _____ 60
Equipo de Economía Política, 23/11/2010
- 5.4. Coparticipación: Falta una discusión previa _____ 63
Ismael Domian, 15/3/2010

VI. Dinero e inflación

- 6.1. El poder del capital como causa de la inflación _____ 66
Equipo de Economía Política, 12/4/2010
- 6.2. La inflación y su patrón clasista _____ 70
Mariano Félix, 25/4/2011
- 6.3. La Carta Orgánica y la “sintonía gruesa” _____ 72
Paula Belloni, 3/4/2012

VII. Las políticas sociales en debate

- 7.1. 82% móvil para jubilaciones. Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo _____ 75
Mariano Félix, 12/7/2010
- 7.2. La barrera neoliberal _____ 78
Emiliano López y Lisandro Fernández, 26/7/2010
- 7.3. Desigualdades de género en el mercado de trabajo argentino _____ 80
Pablo Ernesto Pérez, 11/04/2011
- 7.4. Argentina te precariza con la ayuda del Estado _____ 82
Mariano Félix, 4/1/2010
- 7.5. La condición ocupacional de los jóvenes en la Argentina. Condición de actividad de los jóvenes urbanos _____ 84
Pablo Ernesto Pérez, septiembre 2008

7.6. La Asignación por Hijo como derecho (primera parte). El carácter permanente de las demandas populares _____	91
<i>Facundo Barrera, 28/12/2009</i>	
7.7. La Asignación por Hijo como derecho (segunda parte). Defenderla para transformarla _____	93
<i>Facundo Barrera, 28/12/2009</i>	
xviii. Estructura social, estructura de clases	
8.1. Clase contra clase. Estructura de clases en Argentina. Parte 1 _____	96
<i>Equipo de Economía Política, 15/11/2010</i>	
8.2. Clase contra clase. Estructura de clases en Argentina. Parte 2 _____	99
<i>Equipo de Economía Política, 30/11/2010</i>	
ix. Crisis en el capitalismo	
9.1. Crisis en el centro...¿crisis en la periferia? _____	102
<i>Mariano Félix y Emiliano López, 8/11/2010</i>	
9.2. Corolario del neoliberalismo _____	104
<i>Mariano Félix, 16/3/2009</i>	
9.3. Riesgo de default _____	106
<i>Mariano Félix, 15/8/2011</i>	
x. Discutiendo alternativas al neodesarrollismo	
10.1. Socialismo del siglo XXI: contradicciones, barreras y posibilidades _____	109
<i>Mariano Félix y Melina Deledicque, 1/10/2012</i>	
10.2. Los límites del neodesarrollismo y el proyecto de país que podemos construir _____	111
<i>Equipo de Economía Política, 1/11/2012</i>	
10.3. La autogestión como práctica y proyecto _____	114
<i>Melina Deledicque y Mariano Félix, 2/11/2009</i>	
10.4. ¿Competitividad o cooperación? _____	116
<i>Mariano Félix, 31/8/2009</i>	
LOS AUTORES _____	118

Prólogo

Por muchos años, la enseñanza de la economía política en Argentina se ha reducido a la utilización de manuales importados, traducciones al español de los economistas académicos en los países centrales. Esos economistas y, por lo tanto, sus manuales son meras reproducciones del saber dominante en lo que se conoce simplemente como la *economía*. Esa definición que abjura del su compañera *política*, reduce a la economía política a una técnica, un instrumento para el análisis de “la distribución de bienes escasos frente a necesidades ilimitadas”. En esa acepción, la economía política aparece como una caja de herramientas aplicable a la esfera de los mercados, pero a su vez fácilmente extensible a todas las esferas de la actividad social: reemplazando peras por políticos o trabajadores/as, pasamos sin solución de continuidad del mercado de las peras al mercado político o el del trabajo sin dificultades. Ella sirve a los organismos internacionales de crédito y los gobiernos para tomar la caja de herramientas de la economía y aplicar las mismas recetas y políticas a todos los países y regiones en todo momento histórico. Por supuesto, el fracaso sistemático de esa práctica para resolver los problemas económicos (o cualquier otro) de nuestros países a favor del conjunto de los pueblos es analizado como una mera distancia entre una teoría acertada y una realidad que no deja de comportarse indebidamente.

Esta forma de entender y pensar lo económico ha sido largamente cuestionada. Es más, en sus comienzos la economía como disciplina se reconocía a sí misma como economía política, dando cuenta de la necesidad que la misma fuera pensada como una dimensión y análisis parcial en el marco más general de la reproducción ampliada de la sociedad. La economía es política en tanto por detrás de aquello evidentemente económico se encuentra siempre los distintos sectores, clases y fracciones en una disputa permanente por la dirección y sentido de la reproducción social. Es decir, lo económico no es más que una forma de manifestación de la lucha por determinar en qué tipo de sociedad vivimos y queremos vivir. La llamada economía nada tiene de objetivo y neutral, pues está siempre atravesada por los intereses, necesidades y proyectos de los distintos actores sociales. De esa forma, la economía política viene a desnudar la idea de economía como ciencia del capital. En sus versiones más conservadoras aparece como economía neoclásica o neoliberal pero también –en formas más sutiles y por tanto engañosas– como keynesiana o desarrollista. En ambos casos, produce y propone saberes aptos para intentar garantizar la reproducción del orden social vigente, el orden capitalista, la apropiación privada en manos de unos pocos del producto del trabajo social.

Pero aun la economía política en su acepción más clásica tiene, al menos, dos formas –a nuestro entender adecuadas y complementarias– de ser abordada. Por un lado, nos podemos encontrar con

el análisis profundo y sistemático de la dinámica efectiva de los procesos económicos, es decir, de los procesos de producción y reproducción material de la sociedad. Esta lectura es fundamental, pues permite comprender cabalmente la forma en la cual funciona efectivamente el patrón económico de reproducción social en el marco de las relaciones sociales que son dominantes: de las relaciones de producción capitalistas. Ese es el principal esfuerzo que fuera realizado –entre otros– por Karl Marx. Este último desarrolló una forma de leer la economía política en tanto conjunto de determinaciones que conducen a la generación ampliada del valor, a la crisis periódica y la reproducción sistemática de sus bases fundantes (en particular, la relación capital, que es lo mismo que la relación capital-trabajo). Ese esfuerzo analítico da cuenta de la forma en la que los sectores dominantes en el capitalismo intentan imponer (y lo han hecho tendencialmente hasta la actualidad) sus necesidades e intereses (su deber ser) al conjunto de la sociedad. Más importante aun es el hecho que esa perspectiva analítica evidencia la fragilidad del sistema de reproducción social, sus tendencias a la crisis y su historicidad, es decir, de la posibilidad de ser desplazado y reemplazado por otro.

Uno de los aportes fundamentales de esta mirada de la economía es develar sus secretos, descubrir los fundamentos reales de clase de su desenvolvimiento y quitarles el velo de objetividad: negar el carácter neutral que pretenden tener aquellas y demostrar que el movimiento de la sociedad capitalista está ligado sociedad indisolublemente a la lucha entre aquellas.

Por otra parte, Marx mismo propuso la necesidad de desarrollar otra economía política, una economía política del trabajo (de los trabajadores y las trabajadoras). Esa economía política del pueblo trabajador debe analizar, comprender y fundamentar las formas de producción y reproducción social que son impulsadas, defendidas y realizadas por las personas a través de su auto-organización. Ella debe explicitar los principios que se encuentran por detrás de las prácticas de organización autónoma de la clase trabajadora en defensa de sus intereses en el marco de la lucha por los derechos en el empleo, las prácticas de producción autogestivas, las propuestas de protección de la naturaleza y la Pachamama, las experiencias de producción, distribución y consumo (más allá de los mercados capitalistas), en la producción en común y de los comunes (espacios no privados).

Esas prácticas se apoyan en una serie de fundamentos que se oponen de manera irreconciliable con los de la economía política del capital: frente a la competencia sin límites propone la cooperación frente a la privatización de la vida plantea la alternativa de la construcción de los espacios comunes, la dictadura del capital presenta la autogestión democrática, la destrucción de la naturaleza para la expansión sin límites del valor busca integrar al ser humano como parte de la Madre Tierra. Esas perspectivas y fundamentos ilustran la posibilidad de construir otro mundo actualmente, y la economía política del trabajo puede aportar a esa construcción.

Este libro se nutre de esas dos perspectivas de la economía política crítica. Desde allí, desarrollamos estudios diversos sobre la economía argentina; las políticas públicas y la estructura social; el proyecto de desarrollo en el país y la región; y la dinámica del capitalismo a escala global. En todos los casos, el objetivo de los textos es analítico y pedagógico a la vez. Pretenden aportar a la comprensión de los diversos problemas, presentando elementos de una propuesta superadora partiendo de la crítica de la economía dominante y desde una lectura que se nutra de la economía

política del pueblo trabajador. Sin presentar análisis ni soluciones definitivas, los textos buscan abordar críticamente los problemas de nuestro tiempo.

En todos los casos, los textos surgen de los debates colectivos que los autores individuales realizaron en el marco de experiencias de trabajo conjunta, proyectos de investigación, extensión y actividad docente, así como en espacios de producción colectiva de saberes con organizaciones populares que integramos y/o con las cuales articulamos en una práctica de reflexión y praxis crítica con un horizonte de cambio social radical.

Mariano Féliz

La Plata, Mayo de 2015

I. Pensar la enseñanza de la economía política

1.1. ¿Economía política o “ciencia económica”?

*Equipo de Economía Política**

La formación en las carreras de Economía de las universidades públicas en nuestro país exige un debate. ¿Cuál ha sido el derrotero de las licenciaturas en Economía en los últimos 35 años? ¿Por qué ha sido así? ¿Las cosas cambiaron en los últimos diez años? ¿Van a cambiar? Como es sabido, el plan de la dictadura cívico-militar instaurado desde 1976 en Argentina abarcó un amplio abanico de objetivos entre los que se destacaban: la destrucción de la organización obrera, la instauración de un modelo económico liberal-rentista-financiero que abandonara la protección social estatal y la desaparición de los actores políticos que ponían en cuestionamiento el orden vigente. Las unidades académicas no fueron la excepción: numerosos profesores fueron expulsados, perseguidos, asesinados o desaparecidos, a la vez que los planes de estudios fueron violentamente modificados. Las otrora licenciaturas en Economía Política dejaron su lugar a las licenciaturas en Economía, a secas.

Desde ese momento, los planes de estudio fueron adaptándose al proyecto neoliberal eliminando progresivamente las asignaturas de carácter social y buscando la identificación de la Economía con una ciencia dura. Simultáneamente, se fueron suprimiendo las escuelas de pensamiento críticas a la visión neoliberal. Se escindió el estudio del pensamiento económico del resto de las materias *prácticas*, tales como Comercio, Desarrollo y Macroeconomía; de esta forma, las fructíferas discusiones a lo largo de la historia del pensamiento económico fueron una suerte de reducto heterodoxo, mientras la “verdadera economía” se estudiaba en las materias prácticas exclusivamente a partir del enfoque neoclásico.

En los años 90, el programa neoliberal sostenido ahora por un gobierno constitucional exigía la profundización académica de la ortodoxia económica. Fueron diez años de convertibilidad y, no casualmente, de recetas con sede en Washington. Para aumentar el empleo se flexibilizó el mercado de trabajo; con la finalidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos se privatizaron casi todas las empresas estatales. En el afán de sostener el 1 a 1 se generó un endeudamiento constante que solo podía solicitarse si se cumplía con los requerimientos del FMI de reducir el déficit, ajustando el gasto público (disminuyendo salarios y jubilaciones), etc. Estas medidas respondían al enfoque que nuestras universidades públicas se encargaban de enseñar y difundir, desligando sus nefastos resultados sociales de las insuficiencias teóricas que la teoría dominante (neoclásica) aun posee.

El 2001 marcó una bisagra. Después de 25 años, las políticas de ajuste colapsaron en nuestro país. A ese coletazo se le sumó en 2008-2009 la crisis capitalista mundial más grande desde la década del 30 del siglo pasado. Paradójicamente, la ortodoxia carece de un corpus teórico relevante

* Nota publicada en Página/12 el 23 de mayo de 2011.

y consistente para explicar la crisis, ya que supone que los mercados están en o tienden hacia el equilibrio. ¿Qué podrían decir estos modelos de nuestro país, uno de los laboratorios más fructíferos en materia de crisis a lo largo de sus doscientos años?

¿Qué deberíamos esperar en materia académica de los últimos diez años? Caída en desgracia a partir de la crisis, la teoría neoclásica ha cedido casilleros a enfoques alternativos en varios países del mundo, y particularmente en América Latina. Sin embargo, los planes de estudio de las carreras de Economía de las universidades más importantes del país (con las excepciones de carreras que han surgido en algunas universidades del Conurbano Bonaerense, como por ejemplo, Gral. Sarmiento) siguen respondiendo a las visiones neoclásicas tradicionales instauradas a sangre y fuego por la dictadura y reforzadas por el Consenso de Washington. En las carreras de Economía de universidades como La Plata, Córdoba, Rosario y Buenos Aires todavía se sigue aprendiendo –y enseñando– que la Argentina debe especializarse en la producción de materias primas e importar bienes industriales, siendo un imperativo privatizar las empresas públicas y flexibilizar el mercado de trabajo. Suena insólito.

Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata se dispone a modificar sus planes de estudio, incluido el de su Licenciatura en Economía. La propuesta consiste en reducir el número de materias (de 35 a 32), convertir en optativas a (casi) todas las asignaturas sociales (Historia del Pensamiento Económico, Historia Latinoamericana) y garantizar una trayectoria de asignaturas neoclásicas por definición (la llamada *Teoría de los Juegos* y todas las sucesivas microeconomías subsiguientes). Como se observa, se prevé una intensificación de la formación neoclásica entendida como la verdadera economía en desmedro de las múltiples visiones de las demás corrientes teóricas (keynesianismo, marxismo, regulacionismo, estructuralismo, etc.).

La crisis internacional y los desastres sociales causados por las recetas neoliberales en países como la Argentina y, más recientemente, Grecia y España, obligan a que este reducto académico, aun ligado a los preceptos que fueron furor hace 15 años, se modifique. Tanto por reparación histórica como por necesidad de formar profesionales que incorporen diversas visiones del mundo y de la Economía Política, las licenciaturas en Economía deben renegar de la actual enseñanza dogmática y proponerse avanzar en una formación que responda a las necesidades de su sociedad.

1.2. ¿Hasta cuándo enseñaremos/aprenderemos neoliberalismo en nuestras universidades?

*Facundo Barrera**

Los planes de estudio de las carreras de Economía de las Universidades Nacionales públicas del país no fueron neoclásicos desde siempre. Aunque sea soslayado por la ortodoxia, quien pareciera explicar la hegemonía reinante a partir de la evolución darwinista de la ciencia, el golpe de Estado cívico-militar de 1976 –y antes, la intervención de la Universidad en 1975–, marcaron un antes y un después en la enseñanza de economía. Durante los '60 y '70 existió una corriente importante de docentes, pero también de estudiantes, que bregó por el carácter no dogmático de la enseñanza y el aprendizaje crítico. Tal vez, el ejemplo más paradigmático se haya visto en la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde en el año 1971 una comisión de estudiantes y docentes elaboró un plan de estudios que buscaba “crear una nueva escuela, formar economistas creativos que puedan hacer aportes a la transformación social (no estar pendientes solo de que puedan insertarse en el mercado laboral o en programas de postgrado), y orientados especialmente al abordaje de los problemas del subdesarrollo”. Sin embargo, lo sucedido en la UNS no fue una experiencia aislada. En tiempos en los que los graduados de la carrera eran licenciados en Economía Política, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) existía una importante efervescencia de la economía heterodoxa. Las teorías *ricardianas* y *sraffianas* tuvieron amplia difusión en las materias que se ocupaban de tópicos de crecimiento o comercio internacional; y los contenidos marxistas, junto con aquellos correspondientes a la teoría de la dependencia, también se encontraban presentes en los programas de estudio. Situaciones similares se experimentaban en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la Universidad Nacional del Comahue o en la Universidad Nacional de La Plata. Las décadas siguientes a la intervención militar y, en particular, la reconfiguración de las políticas económicas y sociales bajo los lineamientos impulsados por el Consenso de Washington durante los '90, también repercutieron sobre las universidades. Con el auge del neoliberalismo, la UBA inició el proceso de reformas que dio como resultado el recorte de contenidos vinculados con lo social y una fuerte presencia de materias de corte ortodoxo y herramental matemático.

En La Plata, la historia no fue distinta, tendiendo a “mejorar la aplicabilidad de instrumentos para permitir un producto –egresado- más eficiente” según recita el documento de reforma de plan de estudios de 1992, excluyendo materias como Geografía Económica General y de América Latina y Argentina, e Investigación Operativa. Pero la historia parece no terminar allí. Luego de haber vivido

* Nota publicada en Buenos Aires Económico el 6 de mayo de 2011.

una de las crisis económicas más profundas desde la década del 30, y a pesar de los horrores económico-sociales que desencadenaron los sucesos de diciembre de 2001, las autoridades del Departamento de Economía de la UNLP se disponen en estos momentos a avanzar con una reforma que recorta los contenidos (de 35 se disminuye a 32 materias), convierte en optativas prácticamente todas las materias del campo de las Ciencias Sociales (y propone sean cursadas en otras facultades), mientras profundiza el carácter neoclásico y unilateral del plan, con materias como Teoría de los Juegos e Información, Finanzas Corporativas. Todo esto, sin la participación de la amplia mayoría de los involucrados/as, ya que solo fue discutido (aunque no en todos los casos) con los titulares de las actuales materias. Sin embargo, aunque las autoridades de económicas de la UNLP no lo registren, estas ideas son cada vez más impopulares en nuestra sociedad. No concebiremos la posibilidad de seguir reproduciendo la estrechez de visión y contenidos, formando graduados acríticos que piensen la carrera como el aprendizaje de técnicas de manejo de la cosa pública y del beneficio personal. Pretendemos una enseñanza que logre explicar las problemáticas de nuestra economía, los pesares de nuestro pueblo; queremos docentes, graduados/as y estudiantes comprometidos con la realidad.

1.3. Crisis de identidad

*Leandro Marcelo Bona**

El advenimiento de la crisis que atraviesa el mundo desde hace más de dos años ha ratificado las dificultades que enfrentan las teorías económicas más difundidas para abordar este concepto. Exponentes del neoliberalismo y el nekeynesianismo identificaron el problema en el sector financiero, hecho que se puso en discusión en la reciente cumbre del G-20.

La noción de *crisis* asume un carácter exógeno o de “desvío del equilibrio” para la ortodoxia. Esto se sintetiza en la llamada Teoría del Ciclo Real de Negocios, que entiende que las crisis surgen por efecto de shocks (siendo incapaces de describir la dinámica de los mismos) o bien en las denominadas Crisis de Primera, Segunda y Tercera generación, que hacen hincapié en ciertos condicionantes del sendero de crecimiento de una economía, y donde buena parte del cuerpo de sus argumentos está previamente esquematizado en heroicos supuestos de carácter irreal. La crisis, entonces, se define implícitamente como un fenómeno coyuntural posiblemente desconectado de las formas que encuentra el capital para recrearse y desarrollarse. De ahí que las posibles soluciones a las mismas se resuman, por ejemplo, en una nueva regulación de los mercados financieros para la crisis vigente.

A pesar de la sistematicidad de las crisis a lo largo y a lo ancho del mundo, y hacia delante y atrás en la historia de los últimos dos siglos, los exponentes de las líneas argumentales dominantes no ponen el acento en el posible carácter estructural o inherente a la lógica del capitalismo del surgimiento de las mismas. Para escuelas como la marxista, la estructuralista, la regulacionista y para algunos enfoques poskeynesianos, el concepto de crisis surge más bien como un *modus operandi* del capitalismo en su fase de reacomodamiento de ganancias y eliminación de competidores, implicando un proceso de concentración que no tarda en evidenciarse en la distribución del ingreso a escala planetaria.

Nuestro país ha sido un inmenso laboratorio de diversas y múltiples crisis durante toda su historia. Sin embargo, a pesar de estas innumerables experiencias, la formación en nuestros centros de estudios, y fundamentalmente universidades, continúa divorciada de las visiones heterodoxas previamente mencionadas. Se trata de una paradoja de mayúscula envergadura: en uno de los países de mayor volatilidad y crisis recurrentes, la formación de economistas está desvinculada de su historia y sustentada en una única e importada cosmovisión de la ciencia económica. Esta realidad

* Nota publicada en *Página/12* el 2 de agosto de 2010.

debe entenderse no solo como un fenómeno limitado al campo del análisis de las crisis, sino como una problemática universal del conjunto de fundamentos estudiados en las carreras de Economía en las distintas facultades del país.

En el escenario nacional, resulta difícil encontrar un cuerpo consistente de programas de estudios que se caractericen por su amplitud y pluralidad. ¿Cuáles son las razones? En el comunicado elaborado por el Encuentro Nacional de discusión sobre Planes de Estudios de las Carreras de Economía (formado por estudiantes, docentes y graduados que organizan las Jornadas de Economía Crítica) se destacaba, entre otras cosas:

- La prácticamente nula cantidad de docentes con formación plural.
- La suscripción a una lógica de abordaje de la ciencia económica de sentido común vinculada con la escuela neoclásica u ortodoxa.
- La formación está apoyada (casi) únicamente en manuales que edulcoran y tamizan discusiones visiblemente más ricas en las obras originales.
- El escaso vínculo con otras ciencias, especialmente de índole social. En este sentido, se asocia a la ciencia económica con el campo de las ciencias duras.

A estas problemáticas, que reflejan las falencias propias del conjunto de nuestras universidades, debe incorporarse una premisa fundamental que les da un sustento coherente: el rol político que tiene la formación de un profesional y, en este caso, un economista. La voluntad que han encontrado los exponentes de la heterodoxia para dotar de pluralidad a nuestras carreras más de una vez ha tropezado con los condicionantes políticos que promueven un modelo de formación sujeto a los intereses de ciertos sectores. Ejemplos de ello son el cierre de carreras de formación amplia, la expulsión y discriminación de profesores heterodoxos y la avanzada por reducir contenidos en el grado para llevarlos a los posgrados a lo largo de los últimos cuarenta años.

Una vez más, una crisis pone de relieve la discusión sobre la formación de nuestras carreras. Mientras no se prospere en este debate, en las facultades se seguirá aprendiendo que con una tenue regulación financiera blindaremos a la economía de las futuras crisis. Hasta que surja una nueva.

1.4. Oscurantismo neoclásico

*Mariano Félix**

El capitalismo atraviesa su mayor crisis en años. Si las consecuencias sociales del neoliberalismo desgastaron su legitimidad, el actual panorama de descalabro ha terminado de derrumbar el aura de que gozó la teoría económica neoclásica, en especial durante los años 90. La crisis de 2001 ya había minado el *prestigio* político de esa corriente de pensamiento, que sirvió de sustento teórico a las reformas neoliberales. Hoy, el rey está desnudo y no queda más que buscar en otras fuentes para dar cuenta de la realidad.

Siempre hay quienes se niegan a reconocer que han estado equivocados o, al menos, que sus aprendizajes y enseñanzas tienen un limitado poder analítico. No es novedad que las universidades privadas sean núcleos de difusión de lo más rancio del neoliberalismo. Sin embargo, es por lo menos paradójico que en la mayoría de las universidades públicas también perviven inmutables departamentos de Economía que reniegan de la necesidad de abrir los planes de estudio y los perfiles de la formación de los economistas. Ejemplos de esto son los departamentos de Economía de las Universidades Nacionales de Salta (UNSa), La Plata (UNLP) o Buenos Aires (UBA).

Lejos de reconocer las limitaciones de sus conceptos, enfoques e instrumentos, pretenden sostener y consolidar planes de estudio que en lugar de promover una formación integral, fortalecen una baja en los contenidos y la reducción de las carreras a tecnicaturas de hecho. Los estudiantes no pueden seguir siendo obligados a (de)formarse a partir de planes de estudio que profesan, cual dogma de fe, la llamada economía neoclásica.

Esos planes de estudio carecen del elemento básico de la actividad universitaria: el pluralismo de ideas. Profundizando una cerrazón teórica en torno del neoclasicismo, ubican en un lugar marginal o niegan por completo otras corrientes de pensamiento, como las marxistas o estructuralistas. Esta negación contribuye a formar profesionales incapaces de entender el mundo, privándolos de la posibilidad de conocer las opciones teóricas más importantes, sus fundamentos y límites.

Esto atenta contra el pluralismo básico en la construcción de una sociedad democrática y cuestiona el carácter científico de esa formación. ¿Qué puede decirse de una corriente conceptual que no se atreve a debatir con las otras? Una formación unilateral (neoclásica) solo puede favorecer el oscurantismo y una práctica profesional y científica que busca reproducirse antes que atreverse a enfrentar su negación. Los economistas son obligados a reproducir el *statu quo* de una profesión que necesita urgentemente abrirse al pensamiento crítico si quiere evitar reducirse a una mera creencia.

Las propuestas de reforma que impulsan hoy mismo en universidades nacionales tales como la de La Plata, avanzan en el recorte de contenidos, reduciendo el número de años de las carreras y, con

* Nota publicada en diario Página/12 del 19 de enero de 2009.

ello, eliminando materias como la sociología o la historia argentina y latinoamericana. ¿Qué busca un cambio que profundiza una formación abstracta, acentuando los contenidos técnicos y desplazando aquellos que la fundamentan teórica, histórica y conceptualmente? ¿Qué objetivo tienen estas reformas que se niegan a introducir no sólo otras corrientes de pensamiento sino aquellas materias que permitirían una reflexión crítica sobre la misma ciencia? Esas reformas avanzan en reducir al economista político (consciente de los límites de sus saberes y del posicionamiento político que asume en su práctica intelectual) a mero “técnico en economía neoclásica”: un hábil manipulador de datos y herramientas técnicas, pero incapaz de asumir las implicancias y consecuencias sociales y políticas de las respuestas que esas herramientas producen, e incompetente para cuestionarlas.

Es realmente incomprensible que frente a la crisis del paradigma neoclásico en todas sus vertientes, en muchas de las universidades se pretenda imponer por la fuerza (evitando el debate democrático y la participación amplia de la sociedad) reformas de los planes de estudio que antes que desarrollar la capacidad de reflexión crítica, plural, científica y ligada a la realidad y necesidades de nuestro pueblo, apuntalan una formación técnica, reduccionista y dogmática.

Estos intentos de sostener planes de estudio que niegan la realidad de un neoliberalismo que muestra sus límites prácticos (y en otros casos como en la UNLP, donde las autoridades quieren imponer verdaderas contrarreformas neoclásicas) están siendo enfrentados por un creciente número de docentes, estudiantes y graduados. En la UNLP, por ejemplo, se está impulsando una amplia campaña para conseguir una reforma de los planes de estudios que garantice la pluralidad teórica e ideológica.

Es cada vez más evidente que en una sociedad democrática con vocación de avanzar en la resolución de sus acuciantes problemas, no puede haber una verdadera formación universitaria sin planes de estudio articulados en el pensamiento pluralista y crítico.

II. Del neoliberalismo al *neodesarrollismo*

2.1. Diez años no es nada

Reflexiones sobre la crisis neoliberal una década más tarde

*Mariano Félix**

Hace una década comenzaba a cerrarse definitivamente el ciclo neoliberal en Argentina. Eso iniciaría una nueva fase de desarrollo capitalista de carácter *neodesarrollista* en el país.

El proyecto neoliberal en Argentina atravesó varias etapas. Comenzó en 1975 con el denominado *Rodrigazo*, se profundizó con el posterior golpe militar, continuó con el ciclo alfonsinista y concluyó con la fase de la convertibilidad. A lo largo de esos diferentes momentos, dentro de las clases dominantes, los sectores más transnacionalizados del capital (local y extranjero) fueron consolidando su posición hegemónica mientras los sectores populares sufrieron un ataque despiadado a sus condiciones materiales de vida y capacidad de organización.

En los '90, el ciclo de la convertibilidad marcó el punto más alto del neoliberalismo en Argentina. Dio cuenta a su vez de su avanzada triunfal y de su eventual derrota política. La crisis de la convertibilidad se convirtió en la crisis del programa neoliberal pero no en su fracaso.

Esta se produjo por la composición de una serie de elementos discordantes, superpuestos, estructurales, coyunturales, políticos y económicos.

Estructuralmente, la crisis del modelo convertible se vinculo con:

(a) el salto en la productividad laboral que creó las condiciones para –potencialmente– desvalorizar todas las mercancías producidas localmente. Este proceso fue resultado de la concentración, centralización y transnacionalización del capital local (nacional y extranjero).

(b) la creciente explotación laboral producto de la flexibilización de las relaciones laborales, la crisis de las estrategias tradicionales de organización sindical y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

(c) la imposibilidad de superar la condición periférica de la economía argentina y su profundización bajo la forma de una creciente orientación hacia el saqueo de las riquezas naturales (entre otras, el desarrollo de la producción de alimentos transgénicos y la minería a cielo abierto), sus manufacturas y la manufactura tipo “armaduría”.

(d) la destrucción del Estado de bienestar periférico a través de la privatización de la casi totalidad de las empresas públicas y bienes comunes, el avance en la privatización de la salud y la educación, y la consolidación de un esquema tributario regresivo.

* Nota publicada en <marcha.org.ar> el 2 de enero de 2012.

(e) la explosión del endeudamiento público y privado externo, que consolidó la dinámica iniciada en la dictadura.

Estos rasgos estructurales que condujeron a la crisis se combinaron con una serie de elementos coyunturales, que a mediados de los '90, la desataron aun si no fueron su fundamento:

(1) la desaceleración en el comercio internacional que puso un freno al aumento de las exportaciones.

(2) el ciclo de crisis en los países de la periferia que encareció el crédito internacional.

(3) el fin del proceso de privatizaciones y el agotamiento del ciclo de transferencia de activos del capital local al capital transnacional.

La combinación contingente de estos elementos con los procesos estructurales llevó al capitalismo argentino a un proceso de contracción, estancamiento y profunda crisis. Sin embargo, la transición hacia una crisis orgánica del proyecto neoliberal supuso la combinación del desarrollo de las contradicciones objetivas con la conformación de un nuevo ciclo de auge de las luchas populares.

En efecto, el complejo entrelazamiento del naciente movimiento piquetero con el movimiento estudiantil, organizaciones sociales y políticas de nuevo tipo, como así también fracciones de la clase trabajadora que recuperaba capacidad de respuesta, permitieron enfrentar con éxito relativo los intentos de desplazar a las contradicciones de la convertibilidad hacia al futuro a través de políticas de ajuste. La imposibilidad del gobierno de Menem y luego de De la Rúa de retomar la iniciativa política frente al ascenso de las luchas sociales (derrota del duhaldismo/menemismo en las urnas en 1999, freno al ajuste de López Murphy, plan de lucha para enfrentar el proyecto de "déficit cero" y explosión social post-corrallito) fueron la clave para comprender la desarticulación total de la hegemonía social del proyecto neoliberal.

La crisis orgánica se manifestó con claridad en la segunda mitad de 2001 con la creciente fuga de capitales, la multiplicación de monedas paralelas (públicas y privadas), la profundización de la recesión, el aumento en el voto nulo/blanco/ausentismo en las elecciones legislativas de 2001 y las protestas (cacerolazos, saqueos, movilizaciones masivas) en diciembre.

Sin embargo, la capacidad política de los sectores populares de enfrentar el ajuste fue proporcional a nuestra incapacidad para conducir la transición desde el neoliberalismo hacia un proyecto postcapitalista. En efecto, si bien pudimos condicionar la salida, no tuvimos capacidad organizativa para disputar a los sectores dominantes la conducción de la misma. Por eso la salida de la convertibilidad se transformó en una masiva desvalorización de las mercancías (en particular, de la fuerza de trabajo) y una gigantesca redistribución del ingreso en favor del capital. Las condiciones estructurales conformadas a lo largo del neoliberalismo fueron violentamente ratificadas.

La elección de Duhalde para conducir el proceso transicional dio cuenta del éxito estructural del neoliberalismo (y su última etapa, la convertibilidad): a 10 años de iniciado ese proceso se ha consolidado en Argentina un proyecto *neodesarrollista* ("capitalismo serio" como gusta decir la Presidenta) articulado en torno a las fracciones que se convirtieron en hegemónicas dentro de las clases dominantes a lo largo del ciclo neoliberal (el gran capital transnacionalizado, nacional y extranjero, con base en el saqueo de las riquezas naturales y la superexplotación laboral).

A una década del fin del ciclo neoliberal, los sectores populares nos encaminamos –en mejores condiciones que entonces– a la construcción de una alternativa social y política al proyecto de la burguesía. Solamente la lucha, la organización, la fuerza de nuestras convicciones y capacidad de aprovechar las circunstancias históricas podrán conducirnos al éxito.

2.2. Orígenes y futuro del proyecto neodesarrollista posneoliberal

*Mariano Félix**

El proyecto neodesarrollista nació como respuesta a la crisis orgánica del neoliberalismo en Argentina. Esta no marcó el fracaso del proyecto neoliberal sino su éxito.

En efecto, luego de 30 años el proyecto de las clases dominantes logró consolidar a la Argentina como plataforma para un programa de desarrollo capitalista basado en el saqueo de las riquezas naturales, el agronegocio y las manufacturas alimenticias, junto a un mercado de trabajo hiperprecarizado que garantizara condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo. Esas son las consecuencias estructurales del neoliberalismo y el fundamento del proyecto neodesarrollista subsecuente.

La crisis del neoliberalismo es consustancial con el origen de la actual etapa y por lo tanto (mal que les pese a sus defensores) el neodesarrollismo es hijo del ajuste. ¿Qué fueron la devaluación de la moneda, la pesificación asimétrica, y la estatización de la deuda privada a la salida de la convertibilidad sino una violenta redistribución de los ingresos y la riqueza a favor del capital? El ajuste posconvertibilidad creó las condiciones macroeconómicas para dar inicio al ciclo neodesarrollista. Un improbable kirchnerismo, es bueno reconocerlo, supo aprovechar esas condiciones para pasar de la mera gobernabilidad duhaldista a una hegemonía capitalista. Renegociando la deuda ilegítima, validando las privatizaciones y la (des)regulación neoliberal en las áreas estratégicas de la economía, aceptando abiertamente la transnacionalización de la economía y favoreciendo el saqueo de las riquezas naturales, el Gobierno nacional ha trabajado para consolidar la posición de Argentina como exportadora de nutrientes, minerales, agua y energía.

El kirchnerismo, como fuerza política, supo convertirse en la alternativa más útil a los intereses del conjunto de los sectores dominantes, más allá de la oposición y enfrentamiento circunstancial con ciertas fracciones. Por su parte, demostró capacidad de contener y canalizar los resultados más incómodos del neoliberalismo: una nueva fuerza social del pueblo trabajador, que encontró en la precarización –y a pesar de ella– nuevas formas de organización y lucha. El gobierno logró desarticular parcialmente esa resistencia, canalizando algunas de las demandas de determinadas fracciones del pueblo y neutralizando el potencial disruptivo de los sectores más críticos utilizando (o en muchos casos aceptando pasivamente) la represión por parte de sus más conspicuos aliados.

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 25 de noviembre de 2011.

¿Nada tiene que ver el Gobierno con la aprobación de las leyes anti-terroristas o la judicialización de miles de activistas? ¿Pueden aislarse los ataques al movimiento campesino de las políticas nacionales de *sojización* y monocultivo en el agro? ¿Nada tienen que ver las alianzas con sectores de la burocracia sindical con el asesinato de Mariano Ferreyra?

Detrás de una retórica nacional y popular se oculta un proyecto sin nación y con el pueblo como actor subordinado. El mítico capital nacional hoy no es más que un fantasma, siendo completamente dominado por el gran capital de orden transnacional. El Estado posneoliberal se constituye como promotor del desarrollo pero este ya no puede tener contenido nacional alguno. Por su parte, el pueblo es invocado pero sin potencia, solo reivindicado como actor pasivo. Siempre convocado para aplaudir, nunca para cuestionar o siquiera “marcarle la cancha” al gobierno. Mucho menos se espera –por supuesto– que el pueblo trabajador participe activamente en la construcción de un proyecto de país.

Esto no niega que amplios sectores del pueblo se sientan atraídos por el proyecto kirchnerista, su discurso, liturgia, aun por los avances democráticos conseguidos por las históricas luchas populares en esta etapa. Eso es construcción hegemónica. Solo nos cabe señalar que no evita dar cuenta de la voluntad del gobierno de controlar y verticalizar todas las voces disidentes a partir de un discurso binario que pone de un lado al modelo y del otro a todos los males (la denominada *derecha*).

Por supuesto, ciertos sectores del pueblo han experimentados mejoras objetivas frente a lo profundo de la crisis de 2001-2002. Sin embargo, el capitalismo con inclusión social ha sido incapaz de incorporar a una amplia masa de excluidos y carece de posibilidades de superar a la explotación del trabajo y la naturaleza como base de su propia reproducción. El capitalismo estabilizado solo nos conduce a una nueva etapa de dominación del dinero y el capital sobre el pueblo y no a un camino emancipador.

Este gobierno no es revolucionario. No puede serlo por opción ideológica y por concepción estratégica. Sin embargo, la construcción hegemónica exitosa del kirchnerismo no lo eximirá del juicio de la historia. En la lucha por la emancipación de los pueblos será recordado como el gobierno que, frente a la opción de iniciar el camino hacia una transición anticapitalista, decidió profundizar un patrón de acumulación capitalista dependiente. Quedará en los libros de historia como un proyecto de recomposición de la dominación del capital frente a un posible camino para la participación popular en la construcción de una alternativa anti-sistémica, en la línea de otros pueblos hermanos. En lugar de fortalecer la medialuna del cambio radical en Nuestra América (acompañando a Venezuela, Bolivia y Ecuador), optaron por caminar detrás del sub-imperialismo de Brasil y China, colocando a la Argentina como su furgón de cola.

2.3. La alternativa de la hora es... ¿capitalismo en serio o anarco-capitalismo?

*Mariano Félix**

La presidenta Cristina Fernández participó de la reunión del G20 en Francia hace unos pocos días. Allí dio un discurso frente a grandes empresarios de todo el mundo, explicando las bondades del capitalismo “en serio” comparándolo con los grandes problemas del novedoso “anarco-capitalismo”.

Cristina cree haber dado en la clave, resaltando las pretendidas bondades de un proyecto de desarrollo capitalista. Sin embargo, olvida algunas cuestiones.

En primer lugar, el modelo actual se construyó sobre los escombros de la crisis del neoliberalismo a fines del siglo pasado. Con algunos cambios, el proyecto del kirchnerismo se construye en profundizar lo peor de la herencia neoliberal. Por eso, podemos decir que el proyecto neodesarrollista es apenas superación dialéctica del neoliberalismo y no su radical oposición. Diez años después de la caída del neoliberalismo en América del Sur, los países del centro están enfrentando –como ya lo hemos hecho nosotros– una crisis terminal. El destino de esas naciones se halla en manos del pueblo trabajador. En nuestro país la caída del neoliberalismo tuvo su correlato en las luchas del pueblo. Las organizaciones populares no supimos o no pudimos canalizar esa crisis y fuerza social para construir otro proyecto de país. Si bien pudimos cancelar algunas alternativas, no fuimos capaces de desplazar a los sectores dominantes del poder.

El modelo que propone la presidenta se basa en la utilización de la plataforma construida por el proyecto neoliberal, para construir un capitalismo del siglo XXI, en el cual el consumo se concentra en el 20% de la población, pues convive con la precarización extendida del empleo. Recordemos que el 50% de los asalariados empleados en el sector privado tienen trabajo en negro. Una economía capitalista sin consumo de masas que orienta su producción a la exportación o el consumo suntuario. Los grandes capitales no quieren producir bienes de consumo popular porque es mucho más rentable producir soja, manufacturas alimenticias, automóviles o celulares. Mientras tanto, la pobreza se estanca en cifras que rondan el 20%.

Este proyecto de desarrollo capitalista “en serio” se conforma de manera tal que aumenta la dependencia y la posición periférica del país. Casi la mitad de las exportaciones dependen de las ventas a Brasil, China e India y son básicamente ligadas al complejo agro-minero o la armaduría (automóviles). Todo el proceso se apoya en la hegemonía indiscutida del gran capital trasnacional o

* Nota publicada en <marcha.org.ar> el 11 de noviembre de 2011.

sus socios argentinos. Casi una década de kirchnerismo ha dejado inalterada la extranjerización del control de la producción, la inversión y las exportaciones.

Cristina sugiere a los países centrales que sigan las “lecciones” de Argentina. ¿Pero qué lecciones son esas? Atravesar una profunda recesión, que concluye con la devaluación del dólar, pero sobre todo de los salarios y la precarización de las condiciones de trabajo. La recuperación posterior es limitada, desigual e insuficiente frente a los déficits sociales de nuestro país.

Argentina se muestra como ejemplo en el proceso de renegociación de su deuda externa. Sin embargo, esa renegociación solo sirvió para darle una palmadita a los acreedores a los cuales se les sigue pagando una deuda de origen espurio (ilegítima y en gran medida ilegal). El Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre citado como uno de los principales responsables de la crisis argentina, cobró toda su deuda (por adelantado). Europa se encamina –le guste o no– a imitar el camino trazado por nuestro país. No es el resultado de elegir una opción anarco-capitalista, que la mayoría han atravesado con gran daño para los pueblos. La crisis y el camino elegido es, en realidad, el costo impuesto a los pueblos cuando no pueden delinear alternativas políticas anti-capitalistas frente al neoliberalismo. Nosotros podemos dar cátedra al respecto.

III. Barreras y límites del neodesarrollismo

3.1. Las patas cortas de la sintonía fina

*Mariano Félix.**

En la apertura número 130 de las sesiones del Congreso Nacional, la presidenta Cristina Fernández pretendió hacer un balance objetivo sin “soberbia” presentando “simplemente los números y los datos de la realidad”. A través de una catarata de “datos duros” pretendió mostrar cómo todo es mejor, todo es más, todo es superior. Los problemas irresueltos son, claro está, producto de la pesada herencia de los gobiernos anteriores; no ya del suyo propio o el de Néstor Kirchner (quienes gobernaron los últimos 8 años) sino del gobierno de la Alianza u otros. En el caso de los ferrocarriles, se atrevió a señalar que la responsabilidad por la actual situación proviene del Plan Larkin... de los años 60! Luego de más de 3 horas de un discurso plagado de imprecisiones conceptuales, simplificaciones, chicanas y golpes bajos, si algo quedó en claro es que lo que sigue para los próximos años será más de lo mismo con sintonía fina.

BODEN 2012. Unos de los puntos señalados en más oportunidades fue que este año se pagará la última cuota del BODEN 2012. Estos son los bonos emitidos por el Estado en 2002 para que toda la población absorbiera el costo de la salida de la Convertibilidad. La presidenta remarcó varias veces todas las cosas que le hubiera gustado hacer con esos recursos. Sin embargo, decir que en los últimos 8 años se pagaron más de 19641 millones de dólares, no exime del hecho concreto de que el kirchnerismo forzó al conjunto del pueblo trabajador a pagar aquello que los bancos (privados y estatales) deberían haber devuelto. Esos bancos que desde 2003 han ganado miles de millones de dólares y siguen teniendo elevadas exenciones impositivas en sus ganancias financieras. ¿No es tiempo de gravar adecuadamente las ganancias financieras que provienen fundamentalmente de la especulación y el poder de mercado? La reforma de fondo a la legislación financiera (que en la actualidad combina resabios de la dictadura y del menemismo) para quitarle poder a los bancos, terminar con la concentración y condiciones usurarias para acceder al crédito, son acciones arto postergadas que –a juzgar por los dichos de la presidenta– seguirán esperando el sueño de los justos. La propuesta de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central –con todos sus puntos positivos– es una medida totalmente insuficiente.

Petróleo. La presidenta señaló que en la última década la producción de hidrocarburos se ha reducido sistemáticamente, llevando a un déficit multimillonario en el comercio de combustibles. Lo que no dijo, tal vez por obvio, es que fue durante su presidencia y la de Néstor Kirchner que esto sucedió. Nuevamente remitir a los ‘90, a la privatización/desnacionalización de YPF (que aunque la presidenta no lo recordó, los Kirchner apoyaron) y la provincialización de los recursos del subsuelo,

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 5 de abril de 2012.

no exime de responsabilidades a la fuerza política en el gobierno nacional durante casi una década. El kirchnerismo se convierte cada vez más en su propia pesada herencia. Ni que decir del pobre papel que ENARSA ha tenido en ese proceso. ¿Será hora de revisar el marco constitucional que descentralizó el control sobre los recursos del subsuelo, en el marco del proceso neoliberal de destrucción del Estado? ¿Será hora de pensar una estrategia energética integral que tome en cuenta tanto la producción de energía, en sus diferentes modalidades, como el uso racional de la misma? ¿Será hora de revisar todo el proceso de privatizaciones en el sistema de producción, transporte y distribución de energía?

Ferrocarriles. El discurso de Cristina Fernández remarcó el volumen de inversiones en el sistema ferroviario realizado durante la última década y señaló que en “2003 se estableció como política de Estado la reconstrucción del sistema ferroviario nacional”. La paradoja que surge es que en su discurso de pocos días antes proponía como una novedad “tenemos que volver a tener un sistema de ferrocarriles en la República Argentina”. La pregunta obligada es: ¿qué han estado haciendo desde 2003? ¿Qué pasó con la reconstrucción del sistema? ¿El SUBE es el punto más alto del “nuevo sistema de transporte ferroviario”? La respuesta es casi obvia a la luz de lo ocurrido en los últimos días: subsidiando a través de inversiones y recursos directos un modelo ferroviario –en el marco de un sistema de transporte de pasajeros y cargas– completamente inadecuado para las necesidades del pueblo. En sintonía con la línea argumentativa de la presidenta, ¿cuánto podría haberse hecho con los miles de millones de dólares en subsidios e inversiones dilapidados en 8 años en sostener ese sistema? El problema no era simplemente invertir más (en su discurso la presidenta vuelve a cargar las tintas sobre los BODEN 2012) sino invertir mejor, en el marco de un programa estratégico de cambio estructural, hoy totalmente ausente.

Docentes. La sintonía fina fue uno de los ejes del discurso. En lo que hace a los trabajadores y trabajadoras ello se expresó en la frase “creo que sinceramente de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país”, dirigida a los/as docentes pero extensible al conjunto del pueblo trabajador. En un cinismo absoluto, refirió a la Carpa Blanca como si la lucha docente por la educación pública se condensara en ese sólo momento: los trabajadores/as docentes han históricamente dado una lucha sin pausa por la educación de nuestros pibes. La presidenta señaló – en un vano intento de deslegitimar las demandas docentes– que el pedido de salarios iniciales por encima de los 3.000 pesos es un reclamo excesivo. Se nota que “no sabe” que la canasta familiar supera hoy los 6.000. Se nota que no sabe que los legisladores de su fuerza política duplicaron sus salarios, cobrando hoy en día más de 30.000 pesos por mes y que sus funcionarios cobran sueldos aun mayores. Por otra parte, las afirmaciones respecto a la tarea docente da cuenta de una ignorancia supina sobre la realidad del esfuerzo que estos/as hacen día a día para sacar la escuela pública adelante. Además, decir que el problema salarial docente es de las provincias simplemente significa reconocer que su gobierno no ha hecho nada en 8 años para desmontar el proyecto neoliberal en la educación, que tuvo como uno de sus puntos básicos la descentralización educativa y que se expresa en el creciente avance de las escuelas privadas sobre las públicas (proceso que se ha profundizado durante el kirchnerismo).

Jubilados/as. Al hablar de los/as jubilados/as, la presidenta tomó como un punto fuerte el que 80% de los/as mismos/as estén cobrando la jubilación o pensión mínima. ¿Le parece digno de celebrar? A pesar de los aumentos de los últimos años, las pensiones y jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza (media según la verdadera inflación). Por otra parte, si bien hoy 95% de las personas en edad de jubilarse tienen alguna prestación (un gran logro, sin dudas) qué pasará en los próximos años con tasas de informalidad laboral que rondan el 50% en el conjunto de los/as asalariados del sector privado, y niveles mayores entre quienes son cuentapropistas. Las bondades de la re-estatización del sistema de seguridad social son limitadas si se mantienen sus restricciones estructurales: la rebaja de aportes patronales de los años noventa y la precarización sistémica de las relaciones laborales. Precarización a la cual el propio Estado aporta en su rol de empleador: como muestra se puede mencionar que en el propio Ministerio de Trabajo de la Nación existen un 70% de trabajadoras y trabajadores que no están en planta permanente.

El discurso fue extenso y mucho más puede decirse y analizarse. Podría uno preguntarse por qué no se pretende avanzar en una reforma integral del sistema financiero y aparentemente se mantendrá la “autonomía” del Banco Central. Podríamos profundizar sobre las afirmaciones respecto a las características del modelo de desarrollo, de la señalada re-industrialización y la estrategia minera. Podríamos pensar porque ya no se habla más del *fifty-fifty* pero sí del coeficiente de Gini para medir la desigualdad. Eso quedará para otra vez. Por ahora, cerramos esta nota señalando que no siempre más es mejor, ni mucho es bueno. Que una catarata de números o frases altisonantes no hacen una estadista, ni algunas anécdotas (pautadas en el discurso) dan cuenta de un interés real en los problemas concretos del pueblo. Hoy más que nunca queda claro que los límites del gobierno kirchnerista no provienen de la falta de apoyo electoral, ni vendrán del Congreso o los gobernadores (mayoritariamente alineados con el gobierno nacional). Los límites son propios del proyecto estratégico neodesarrollista que el kirchnerismo impulsa, ahora en un marco internacional menos favorable.

3.2. Energía, trenes, minería

El agotamiento del modelo privatizador

*Mariano Félix.**

A 10 años de finalizado el proyecto neoliberal, continuamos sufriendo las consecuencias de un proyecto de país excluyente, ahora a través del kirchnerismo.

Energía, minería y ferrocarriles se yuxtaponen como problemas aparentemente aislados que no son más que el resultado de la continuidad de un patrón de acumulación que sostiene las ganancias empresarias sobre la base del saqueo, la entrega indiscriminada de subsidios y la muerte.

La cesión del uso y explotación de las riquezas hidrocarburíferas a las grandes corporaciones privadas continúa en la etapa. Con la creación de ENARSA en 2005 se pretendió legitimar la profundización del uso privado del subsuelo a través de la cooperación público-privada en la explotación de nuevos campos de petróleo y gas en la nueva frontera que incluye la plataforma continental. Parece que el Gobierno no encuentra ninguna contradicción entre la declamada preocupación por la explotación petrolera en Malvinas (y la potencial contaminación ambiental) y la falta de una política pública que garantice el abastecimiento de combustible, en condiciones medio-ambientales adecuadas y en el marco de una política de sustitución del consumo de hidrocarburos por energías más respetuosas de los equilibrios vitales del planeta. El Gobierno no es capaz de ver que el creciente déficit energético tiene sus causas en una matriz de producción y distribución de energía en manos privadas y en la ausencia de una política productiva orientada al ahorro de energía.

¿Cómo entender si no proyectos mineros que son altamente dependientes de la energía eléctrica, hasta el punto de ser los principales demandantes en algunas provincias, hoy llamadas mineras? Proyectos que, por otra parte, son alimentados por una combinación de la voracidad del capital transnacional que destruye el territorio, extrae los recursos minerales estratégicos, sin más motivo que financiar las arcas corruptas de las estructuras políticas de algunos socios conspicuos del Gobierno nacional (como el ex-menemista, ex-duhaldista, futuro ex-kirchnerista Gioja). ¿Quién puede entender que la política minera de saqueo del menemismo que fue prolongada por 30 años por la actual fuerza política en el Gobierno nacional pueda ser parte de un proyecto “nacional y popular”? Más bien parece la réplica de la política de enclaves mineros típica del antiguo imperialismo, hoy vestida de estrategia industrial favorable a nuevos socios imperiales (China y Brasil). ¿Puede el Gobierno seguir aceptando la represión abierta de las protestas anti-mineras, bajo la excusa de la

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 24 de febrero de 2012.

provincialización menemista de las riquezas del subsuelo? ¿No es hora de discutir a fondo la propiedad y el uso de esos recursos?

Finalmente, 9 años de una política de transporte de continuación del modelo neoliberal de gestión nos lleva hoy a la tragedia del 22 de Febrero de 2012 en la estación ferroviaria de Once. Casi una década lleva este gobierno de subsidios indiscriminados a empresas privadas que mantienen el sistema de ferrocarriles en pésimas condiciones. Casi una década de continuación de la política de privatización del sistema de transporte público que hoy produce decenas de muertes y centenas de heridos no por “accidente” sino por negligencia de la empresa (que, obviamente, sólo cuida su negocio) y del Gobierno (Secretaría de Transporte, entes reguladores, la propia Presidenta) que prolongan una propuesta de gestión del transporte de pasajeros (y de cargas, agregaríamos) que es insostenible social, económica y ecológicamente hablando.

Las muertes evitables (el incidente mencionado no fue accidente pues es un resultado lógico, esperable, de una política equivocada) y el saqueo insostenible de las riquezas naturales son caras de un proyecto que sostiene la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, privilegiando el interés de los grandes grupos económicos y las grandes transnacionales.

Es hora de terminar con un modelo de gestión que pone en el capital privado expectativas progresistas y transformadoras, mientras que el Estado lo subsidia. Pero, ante todo, es momento de reformular el modelo de uso de los bienes comunes y de los servicios públicos para sacar el control estratégico de manos de las transnacionales y, superando la mera estatización, entregar el control al conjunto del pueblo trabajador.

3.3. Regalías para pocos

*Matías García y Mariano Féliz.**

Cronológicamente, los hechos pueden iniciarse el 15 de Junio con la presidenta Cristina Kirchner en el Council de las Américas explayándose con orgullo acerca de la reunión que había mantenido con la empresa de agronegocios más grande del mundo (Monsanto), asegurando que la misma invertirá en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas 1600 millones de pesos para desarrollar una planta de tratamiento de semillas transgénicas de maíz. Continúa el 21 de Agosto, día en que Monsanto presenta la nueva soja "Intacta RR2 Pro" que promete incrementar los rendimientos hasta un 11% (alrededor de 5 millones de toneladas extra de soja). En dicho evento participó nada menos que el Ministro de Agricultura Norberto Yauhar, quien reivindicó con entusiasmo los derechos de propiedad de las empresas mejoradoras de semillas. Si no creyéramos en las casualidades y sí en las causalidades, no debería sorprender que en dicha presentación el funcionario nacional anunciara el envío al Congreso de un proyecto oficial para modificar la Ley de Semillas.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, llegamos a 1996, año en que se libera el último evento transgénico en autógamias: la soja RR (Resistente al *Roundup*, nombre comercial del glifosato), también propiedad de Monsanto. En aquel momento, Monsanto dejó deliberadamente el gen RR en el dominio público, pues no fue patentado en Argentina, aunque sí en otros países, como los europeos y Estados Unidos. Esto facilitó su fuerte difusión, con una ventaja importante para la empresa: ella vende también el herbicida (glifosato) al que la planta de soja RR resiste. De este modo, resultó una movida estratégica que le permitió beneficiarse con las ventas de sus semillas transgénicas y de los crecientes volúmenes de glifosato. Sin embargo, tras aceptar y beneficiarse de esa fórmula durante 10 años, Monsanto decidió que los agricultores deberían también pagar regalías a la empresa por el uso de la soja RR de hasta 15 dólares por tonelada. El gobierno de Néstor Kirchner en ese momento rechazó tal pretensión, existiendo como represalia la detención de barcos con harina de soja argentina en puertos europeos. El mismo gobierno inicia una demanda ante tribunales europeos, que terminan dándole la razón a la Argentina.

La estrategia adoptada esta vez por la multinacional para la semilla "intacta" es diferente que la decidida para la primera soja RR. Monsanto ya se aseguró la propiedad intelectual en el país, y la aceptación de la misma por parte de más de 8500 grandes empresarios sojeros (lo que representa el 60% del área de la soja), quienes rubricaron un acuerdo *ad-hoc*. Lo grave es la posibilidad del "acuerdo" público, por cuanto se limitaría derechos consagrados en la Ley de Semillas.

La Ley de Semillas (20.247) fue sancionada en el año 1973, y mantuvo ileso desde entonces la que fuera su tal vez más importante prerrogativa (artículo 27): el derecho que poseen los

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 14 de septiembre de 2012.

agricultores de poder reproducir sus propias semillas, aun cuando estas pudieron haber partido de una simiente que tuviera algún tipo de mejoramiento genético protegido. Vale decir que este derecho no tiene igual impacto en todos los cultivos. Las plantas alógamas (maíz, girasol) producen granos (semillas) que por su forma de polinización poseen una alta variabilidad genética en cada nueva generación, en cuyo caso los agricultores que usen híbridos indefectiblemente deben comprar las semillas todos los años. Diferente suerte corren las autógamias (soja, trigo), que por su mecanismo de autofecundación, posibilitan la reproducción ilimitada de las semillas prácticamente sin pérdida de la información genética.

En la práctica, eso posibilita que apenas el 20-25% de la semilla de soja sea adquirida en semilleras y pague regalías, mientras que el resto se divide en uso propio y la denominada “bolsa blanca”, que es la venta de la semilla por canales informales.

Por ello, lo que se pretende con la modificación de la ley no es el reconocimiento del derecho de propiedad de Monsanto, ni que se le pague regalías al comprarle la semilla (cosa que ocurre) o combatir la “bolsa blanca” (sería inconcebible que se cercenen derechos para evitar a los que delinquen). El propósito que no se oculta y que guarda directa relación con los hechos descriptos al principio de la nota es el de limitar el milenar derecho de los agricultores al Uso Propio de la semilla. De esta manera, guardar parte de la cosecha como semilla para la siguiente siembra se transformaría en ilegal.

La fuerte restricción de este derecho busca ser atenuado. Yauhar aclaró que la ley incluirá en un capítulo especial la “previsión necesaria para que los pequeños y medianos productores tengan el acceso a la tecnología como el resto”. Para ello, si bien el proyecto de ley mantiene este derecho del agricultor de uso propio de las semillas (artículo 30), se redactó una definición dura y restrictiva de este sujeto (artículo 7, inciso f), en la cual surgen dudas no solo en la interpretación sino que también en su cumplimiento.

Existe un discurso, en donde se afirma que la nueva ley (y Monsanto) pretende sólo cobrar regalías al 20% de los productores de soja, responsables del 80% de la producción. La pregunta obvia es ¿la manera de lograr ese objetivo es vulnerando un derecho no sólo para el restante 80% de los productores de soja, sino que principalmente también para la totalidad del resto de los productores, mayoritariamente pequeños? El riesgo es gigante.

Suena contradictorio que en un país en donde desde la primer magistratura se menoscabó al “yuyito”, ahora se avale políticamente a la mayor empresa impulsora de la soja. Resulta discordante que un país en donde parte del argumento de las retenciones a la soja tenía como propósito reducir el monocultivo, limitar su expansión y disminuir la vulnerabilidad que este modelo ocasiona, se aprueben eventos biotecnológicos que no hacen más que profundizar el mismo, además de incrementar el problema de degradación de bienes comunes, desaparición de productores y concentración de la producción, entre otros. Parece paradójico, que un gobierno que asegura defender y promocionar a la agricultura familiar, favorezca tan abiertamente a la principal empresa antagonista de dicha forma de producción, como así también avasalle paralelamente el derecho inmemorial de uso propio de semillas. Y por último, es indudablemente poco coherente, en un país en que se habla de la soberanía y de las políticas nacionales y populares, que se posibilita a las

multinacionales de los agronegocios no sólo incrementar aún más su rentabilidad, sino que además prevalezcan en una crucial disputa ideológica. Ya que la aceptación de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas no es mas que legitimar que continúe la privatización de la naturaleza, mas aun cuando las semillas agrícolas son el fruto de miles de años de búsqueda, descubrimiento, selección, crianza y paciente desarrollo llevado adelante por comunidades campesinas y pueblos originarios. Y con la legitimidad, aparece el formidable poder simbólico y real que brinda tener la propiedad legal de las semillas, origen de los alimentos.

3.4. Soberanía alimentaria en el país de la soja

Elementos para el debate

*Mariano Félix y Matías García.**

Vivimos en un país de 40 millones de habitantes que es capaz de producir alimentos para una población 7 veces superior. Sin embargo, en Argentina hay no menos de 4 millones de hambrientos. Vivimos en una tierra en la que históricamente los inmigrantes venían a producir. Sin embargo, cada vez menos gente vive en el campo, cada vez más propietarios de la tierra se convierten en arrendadores-rentistas, siendo los campesinos y pequeños productores expulsados por las grandes empresas capitalistas. Habitamos un territorio donde el pueblo históricamente ha trabajado para alimentarse y, sin embargo, hoy pierde día a día el control de su producción a manos de las transnacionales de la alimentación y los agronegocios. Multinacionales que hacen hasta dudar de la definición de productor, cuando estas le venden las semillas y los insumos, le imponen el cultivo y la tecnología con qué producir y finalmente le compran la producción y la exportan del país, junto a sus extraordinarias ganancias: ¿productores o empleados de las *multis*?

En este país, 8 años de proyecto neodesarrollista sólo han permitido acumular a la cúpula del sector vinculado a la producción agropecuaria no menos de 75 mil millones de dólares en rentas extraordinarias y al Estado Nacional alrededor de 55 mil millones de pesos en retenciones a las exportaciones, cuyo uso y destino no se condicen con los actuales indicadores socioeconómicos del país.

Habitamos un país con 33 millones de hectáreas de tierras fértiles para realizar cultivos extensivos, industriales, pasturas y fruti/horticultura. Sin embargo, en menos de dos décadas la producción de soja transgénica ha desplazado violentamente la producción de alimentos. En la actualidad la soja ocupa el 50% de la superficie sembrada del país y es responsable de la mitad del volumen de granos cosechados. Así, cada hectárea adicional que se destina a la producción de soja se traduce en miles de nuevos pobres como consecuencia del aumento en el precio de los alimentos.

El gobierno, si bien ha reconocido en términos discursivos los múltiples problemas que acarrea el monocultivo, en el campo de las políticas concretas poco y nada ha hecho. Por lo demás, continúa promoviendo los agronegocios e ignorando (y avalando en los hechos) la expulsión de los campesinos y productores más pobres y permitiendo que los *pools* de siembra, las transnacionales de la alimentación y las agroexportadoras sigan regulando la producción agropecuaria.

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 6 de junio de 2011 con el título "Mayor regulación".

El Estado continúa sosteniendo una retórica y una práctica que no se condice con la necesidad de avanzar en una política de reforma agraria integral que conduzca a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria sostenible.

Primero, habría que eliminar la intermediación de las grandes multinacionales en la comercialización internacional de la producción agropecuaria. Las retenciones a las exportaciones son necesarias pero insuficientes como mecanismo de regulación, como lo demuestra su incapacidad de frenar el proceso de sojización. La constitución de un ente público que incorpore a los pequeños productores y campesinos, a los trabajadores y consumidores, permitiría articular una política de promoción del desarrollo rural integral que garantice a la vez la sustentabilidad de las comunidades rurales y la producción suficiente, agroecológicamente sustentable y variada de alimentos accesibles para el conjunto de la población. En Argentina el hambre no es resultado de una insuficiente capacidad productiva o disponibilidad de alimentos sino consecuencia de que su acceso es restringido.

Segundo, es necesario avanzar en un programa de reforma de la propiedad de la tierra que permita a los actuales pequeños productores permanecer en sus territorios, mejorando sus niveles de ingreso modificando la distribución del ingreso a lo largo de la cadena agropecuaria, con tecnologías adecuadas para una producción sustentable en sus tierras. La tecnología actual producida y dominada por las grandes corporaciones está adaptada al saqueo de las riquezas del suelo y su apropiación capitalista en gran escala, sin considerar las necesidades de las poblaciones rurales (y urbanas) y los sujetos de la producción (productores y trabajadores).

Tercero, es necesaria una política de desarrollo de una nueva forma de urbanidad en el territorio rural. Esta política debe fortalecer la creación de las condiciones para la vida digna en el espacio rural, promoviendo la desconcentración de las áreas densamente pobladas del país.

Una política orientada en este sentido -que ataque el corazón del eje extractivista del proyecto neodesarrollista- permitirá un desarrollo urbano-rural más equilibrado que garantice simultáneamente la sustentabilidad ambiental y económica de la vida rural junto a la soberanía alimentaria para el conjunto del pueblo trabajador argentino.

3.5. Crisis habitacional

Dialécticas del modelo neodesarrollista

*Equipos de Economía Política y de Hábitat Popular
del Centro de Estudios para el Cambio Social.**

El derecho a la vivienda es uno de los derechos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 14bis. A fines de los años cuarenta las luchas del pueblo trabajador consiguieron imponer en la letra de la carta magna “el acceso a una vivienda digna” como un derecho fundamental para “todos los hombres [y las mujeres] del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” como reza su preámbulo. Sin embargo, treinta años de neoliberalismo han transformado en letra muerta ese particular derecho, básico para el desarrollo de la vida humana en sociedad. Las recientes tomas de tierras masivas en las inmediaciones de Lugano y Soldati en la ciudad de Buenos Aires no hacen sino dar cuenta de una deuda histórica de la democracia argentina. Deuda que no podrá ser resuelta sin la lucha de los excluidos y la superación del neodesarrollismo posneoliberal.

El problema es la vivienda... Déficit habitacional y políticas públicas.

La crisis habitacional que atraviesa a la sociedad argentina no es novedad para nadie: 2.170.000 hogares viven en asentamientos con viviendas de gran precariedad, con altos niveles de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos de agua potable y cloacas. El déficit habitacional es –según información oficial previa al Censo 2010– de más de 2 millones de viviendas en diferentes condiciones de precariedad (hacinamiento, baja calidad de materiales y/o construcción, etc.), incluyendo 660 mil viviendas que deberían construirse a nuevo. A pesar de ello y en el marco de una holgada situación fiscal y macroeconómica, las fuerzas políticas en el Estado (en sus distintos niveles) poco han hecho para avanzar en la resolución de esta problemática. Aun cuando en los últimos 5 años, por ejemplo en el Conurbano bonaerense, se han construido tantas “soluciones habitacionales” (construcciones nuevas, reparaciones, mejoras, etc.) como entre 1976 y 2003, el presupuesto anual (2011) de la Nación prevé tan solo poco más de 3.000 millones de pesos para programas de vivienda (12 veces menos que lo que en su momento se destinó, por ejemplo, al pago adelantado de la deuda con el FMI). Este presupuesto, que se ejecutará fundamentalmente a través de la mediación de los gobiernos provinciales y municipales, permitirá en teoría terminar unas 46 mil viviendas y unas 32 mil soluciones habitacionales, solamente 12% del déficit total.

Por otra parte, en muchos de los programas de construcción públicos exigen la conformación forzada de cooperativas de trabajo de parte de los propios beneficiarios, quienes se ven obligados a renunciar a sus actividades laborales habituales (o multiplicarla, extendiendo su

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 28 de diciembre de 2010.

jornada de trabajo) y a desarrollar trabajo precarizado para el Estado. Claro está, terminadas las obras, la cooperativa desaparece, en general sin saldos organizativos. Las excepciones suelen ser los casos en los que organizaciones sociales preexistentes pueden arrancar al Estado el control de los procesos de autoconstrucción.

Según la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después de 7 años de gobierno kirchnerista el déficit habitacional se ha reducido en nada más que un 8%. A este ritmo, la solución para las familias con necesidades imperiosas de vivienda social llegará en 90 años. En la actualidad, el principal límite objetivo a una política de viviendas populares masiva parece ser la potencial presión sobre la industria (privada y pública) de la construcción por una posible presión sobre la oferta de fuerza de trabajo barata y la abundancia de viviendas que podría hundir el precio de los inmuebles perjudicando la especulación. A esto habría que sumar la falta de terrenos libres para la construcción de nuevas viviendas: los municipios no tienen suelos, las provincias y la nación no los compran y los propietarios privados los retienen u ofertan muy caros (especulando con la valorización futura de los mismos a partir de la ejecución de los programas de viviendas). Con la redistribución de un pequeño porcentaje (menor al 5%) del consumo suntuario de las clases dominantes alcanzaría para multiplicar por 3 el presupuesto actual en vivienda y atacar en pocos años la crisis del hábitat urbano. Recordemos que este pequeño – pero poderoso – sector social (3% de la población del país) apropia para su consumo 8 veces más por persona que el conjunto del pueblo trabajador.

El problema no es la vivienda. Mercado de trabajo y neodesarrollismo.

Más allá de las fallas estructurales en la orientación de las políticas públicas, el origen de la crisis habitacional es la persistencia –a través del neodesarrollismo– de la precarización de las condiciones laborales.

A 8 años de un nuevo patrón de desarrollo capitalista, la prevalencia del trabajo irregular impide a una porción importante de población acceder a una vivienda propia a través de su empleo, generando a su vez para muchas familias crecientes dificultades de sostener el alquiler de una vivienda digna o la posibilidad de mantener en condiciones de habitabilidad mínima su propia casa. Con un 42% del pueblo trabajador con ingreso por debajo del salario mínimo es inviable sostener el pago de alquileres que superan los 1000 pesos para una pequeña vivienda para una familia de 2 adultos y 2 niños. Mientras que en relación a la canasta familiar los salarios promedio se encuentran hoy un 35% por debajo del promedio de los años noventa, en relación a los alquileres la caída ha sido de 21% en comparación con el promedio de la década menemista. En relación al precio de las viviendas, el deterioro ha sido brutal: la caída es de 39% en relación a los años noventa.

A esto se suma una matriz distributiva en la ciudad que es cada vez más desigual. Entre 2001 y 2006 de cada 10 nuevos habitantes en el Conurbano bonaerense, 6 se ubicaron en “asentamientos informales”. Por otro lado, en la región Metropolitana de Buenos Aires mientras en las “urbanizaciones cerradas” (barrios privados, countries) habitan menos del 2% de la población, ellos

consume el 10% del suelo urbanizado; por el contrario, el 10% de la población habita en asentamientos informales pero ocupando sólo el 2% del suelo urbano. Esto se vincula al fenomenal crecimiento de la industria de la construcción y el aumento que genera en el precio del suelo.

Ella explica la competencia de los sectores de altos ingresos por el territorio tradicionalmente asignado a los sectores populares (la periferia) y el ascenso de los desalojos de las áreas centrales. La creciente mercantilización de todos los intersticios del espacio urbano genera un efecto que tiende a limitar las posibilidades de acceso a la ciudad de los sectores populares. En este sentido, el actual proceso de crecimiento económico es concurrente con un proceso de crecimiento urbano que es espacialmente regresivo.

Si antes el problema de la vivienda era el problema de la pobreza, hoy el problema es que el acceso al mercado de trabajo no garantiza el acceso a la ciudad. Este es el problema de fondo: un modelo de valorización y acumulación capitalista que requiere de la precarización extendida del trabajo para garantizar la competitividad del capital y –aun expandiéndose fuertemente– niega posibilidades reales de trabajo y vida dignos a una parte sustancial del pueblo trabajador. Los principales perjudicados de este patrón de desarrollo neodesarrollista son aquellos/as que encuentran empleo en tareas de menor calificación y formalidad (trabajadoras de servicio doméstico, trabajadores en la construcción y el pequeño comercio). Estos trabajadores y trabajadoras son quienes sufren los mayores perjuicios de un desarrollo capitalista que los necesita y una clase dominante que los desea (para su consumo de privilegio) pero a su vez los margina, discrimina y super-explota.

3.6. ¿YPF recuperada?

Notas sobre la industria del petróleo en Argentina

Mariano Félix.

De la empresa pública a la privatización

YPF fue una empresa pública creada a comienzos del siglo XX para el desarrollo de la industria de hidrocarburos en un país que teniendo petróleo no es petrolero por excelencia (como si lo son Venezuela o Arabia Saudita, por ejemplo). En el marco del proyecto de desarrollo capitalista en Argentina, la empresa permitió en el tiempo avanzar en la industrialización sustitutiva a partir de los años 40 y contribuyó, a su vez, a promover un mayor desarrollo regional del país.

Progresivamente, la empresa se convirtió en coto de caza de los grandes grupos económicos locales que recibían subsidios diversos financiados por YPF. La persistencia de esta política condujo a una profunda crisis a la empresa pública, crisis que fue aprovechada en los años noventa para justificar y forzar su transformación -primero- en empresa de derecho privado (sociedad anónima) bajo control estatal, -segundo- la apertura de su capital accionario al mercado financiero y -por último- su privatización completa a manos de la empresa REPSOL en 1998 y 1999. Las transformaciones en YPF fueron acompañadas de la privatización de la exploración y explotación de hidrocarburos a través de la concesión de los campos petroleros al capital privado, nacional y extranjero, y la liberalización del comercio de combustibles. La reforma constitucional de 1994 creó un marco especialmente propicio para este proceso al ceder a los estados provinciales el derecho de gestión de los recursos del subsuelo.

El kirchnerismo y la profundización de un modelo

A partir de 2003, el kirchnerismo mantuvo el mismo esquema de gestión de la producción de hidrocarburos, prolongando y reforzando en el tiempo su privatización. En paralelo, sostuvo una política de precios que buscaba evitar el impacto inflacionario de la suba internacional de los precios del petróleo, que entre 2003 y 2010 fue de más de 250%. La combinación de esta estrategia de sostener la privatización de la industria de gas y petróleo junto a una política de precios bajos condujo a un proceso de desinversión generalizada. Desde el momento de la privatización completa de YPF la producción de gas y petróleo y las reservas disponibles cayeron sistemáticamente. Este proceso fue

liderado por REPSOL-YPF (la empresa más grande) pero acompañado por el conjunto de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Frente una situación insostenible, el gobierno avanzó con la creación de la empresa ENARSA a fines de 2004. En la práctica, la empresa se convirtió en un nuevo canal para la entrada del capital privado en la explotación de hidrocarburos y –fundamentalmente– se transformó en una importadora de combustibles. Esta estrategia produjo en el tiempo un creciente déficit en la balanza comercial energética y un paralelo incremento en el gasto fiscal para subsidiar la importación de combustibles. En 2011, el déficit en el comercio de combustibles llegó a 3.000 millones de dólares. En 2008, el gobierno decidió forzar la incorporación de capitales nacionales como socios en REPSOL-YPF. Consiguió que la familia Eskenazi se incorporar como accionista sin pagar un sólo peso, comprando las acciones con las ganancias futuras de YPF y con diversos préstamos. A pesar de la parcial "argentinización" de la empresa, continuó la tendencia a la caída en la producción y la exploración. El desarrollo de la crisis en el capitalismo en los países del centro, creó nuevas presiones para que REPSOL profundizara (avalada por los socios nacionales y por el propio estado argentino) su política de remitir las ganancias obtenidas en YPF a su casa matriz.

Contra-marcha: re-nacionalización de YPF, consecuencias y alternativas

A comienzos de este año, el gobierno argentino, sin reconocer su responsabilidad en la situación de la empresa y del conjunto de la industria hidrocarburífera, decide avanzar un paso más en la re-nacionalización de YPF. Esta decisión se cristalizó en la aprobación de un proyecto de ley que deja sujeta a expropiación el 51% de las acciones de YPF en manos de REPSOL, establece el objetivo de garantizar el autoabastecimiento de combustibles e incorpora a las provincias "petroleras" directamente en el negocio cediéndoles aproximadamente 1/4 del paquete accionario de la nueva empresa, en la cual REPSOL permanece como accionista minoritario.

En sí misma la medida es positiva pues recupera para el control del Estado un instrumento fundamental en la gestión de la política energética en el país, como es YPF. Sin embargo, la medida se queda corta pues no se enmarca en un proyecto de transformación social sino que se inserta en la mera profundización del modelo de "capitalismo serio" promovido por el kirchnerismo.

Primero, la nueva empresa bajo control estatal continúa siendo una sociedad anónima, cotizante en la bolsa de comercio de Buenos Aires y en los mercados de capitales de los países centrales. Con casi un 20% del capital accionario en manos del capital financiero internacional, YPF (propiedad estatal) continúa siendo presa de las demandas del capital internacional. La presidenta de la nación y el designado presidente de la compañía dejaron bien claro que la empresa funcionará como la más eficiente empresa privada. En este punto no es llamativa el pedido a los trabajadores de YPF a ponerse la "camiseta de la empresa" y moderar sus demandas de salarios y condiciones de trabajo.

Segundo, la nueva empresa de propiedad estatal sólo controla el 30% de la producción de petróleo y gas en Argentina. El resto de las explotaciones están bajo control de empresas privadas.

Esta YPF es mucho menos que la YPF histórica y cabe preguntarse qué capacidad tendrá la política pública de cambiar la orientación de la producción de hidrocarburos sin alterar el conjunto de la estructura de propiedad y control de la explotación de esos recursos.

Tercero, la estrategia oficial para la nueva empresa supone incorporar a nuevos socios en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. El gobierno está abocado a conseguir de esta manera los fondos necesarios para realizar las inversiones que se requieren para la exploración y explotación de las reservas de petróleo y gas "no convencional" (conocida como "shale"). Argentina posee importantes reservas de estos recursos y el gobierno pretende explotarlos lo antes posible, aun si el costo ambiental de esas producciones es sensiblemente mayor que el de las explotaciones tradicionales.

Por último, fuera de la discusión oficial está el poner en cuestión el modelo de generación y consumo de energía. Son ínfimas las inversiones en alternativas energéticas sustentables, al lado de la inversión y subsidios a las formas tradicionales de generación eléctrica. El debate sobre el modelo de consumo que supondría discutir la política de transporte, la producción sin límites de automóviles, etc., no se encuentra en el horizonte del discurso oficial.

No hay dudas de que el pasaje de YPF a propiedad del Estado es mejor que la situación anterior de privatización completa. En el futuro, un gobierno popular podrá hacer buen uso de ese instrumento (como la experiencia venezolana muestra). Sin embargo, lo limitado de la medida tomada y la estrategia del kirchnerismo en la política energética, conducen una medida acertada en general a convertirse en ladrillo más en la construcción de un modelo de desarrollo de "capitalismo serio", social, política y ambientalmente insostenible.

IV. ¿Liberación o dependencia?

4.1. Fetiche exportador

*Emiliano López.**

El conflicto que tuvo lugar días atrás entre los gobiernos de Argentina y Brasil plantea la necesidad de discutir de manera más acabada los fundamentos sobre los que se basa la liberalización del comercio exterior como estrategia de desarrollo capitalista. Más allá de las diferencias, pareciera haber un punto de contacto entre las posiciones ideológicas que promueven la liberalización del comercio exterior y algunas que pregonan una mayor intervención del Estado en esta materia: la inserción comercial es clave para impulsar el desarrollo económico.

Esta “paradójica” coincidencia es consecuencia de que ambos enfoques parten del principio de la ventaja comparativa, como fundamento del comercio exterior. Dicho principio, indiscutido por la teoría económica de raíz neoclásica y keynesiana, afirma que es posible obtener “ganancias para el país” si se logra especializar la producción en aquellos bienes que utilizan una mayor proporción de los insumos abundantes. El resto de los socios comerciales deben comportarse de igual manera, lo que conduce a una ganancia de intercambios para el mundo en su conjunto. Así, el comercio internacional se constituye como un juego en el cual todos pueden ganar.

Sin embargo, la historia de los países de nuestra América, nos plantea un profundo dilema sobre su inserción al mundo capitalista. La subordinación de esta región a los designios de la obtención de ganancias y acumulación de capital en los países centrales, impone límites de difícil superación para que el comercio exterior actúe como impulsor del desarrollo capitalista a nivel doméstico. Así, la periferia del mundo se encuentra fuertemente condicionada a producir determinado tipo de bienes, no en pos de aprovechar sus ventajas comparativas, sino para cumplir con su papel de proveedor de materias primas y alimentos que mejoren la rentabilidad en los centros del capitalismo mundial. El comercio exterior entre países centrales y periféricos es un juego en el cual los primeros se imponen sobre los segundos.

No está de más aclarar que la visión dominante sobre el comercio internacional olvida que las exportaciones son una forma de realizar el excedente económico producido en el país. Es decir, una parte del producto generado por la sociedad (y privadamente apropiado) se realiza como ganancia de las clases dominantes locales a través de las exportaciones. Por tanto, más que “ganancias para el país” las mayores exportaciones son ganancias para los sectores dominantes del país.

Una última cuestión que debemos tener presente es que la producción, la circulación y la distribución de bienes y servicios son aspectos interdependientes unos de otros. Tanto lo que se produce como su destino (consumo popular, exportaciones, etc.) y el proceso de distribución de los

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 30 de noviembre de 2009.

bienes producidos, se encuentra dominado por la lógica del capital. La utilización de tierras para la producción de soja y la explotación minera a cielo abierto, son dos ejemplos claros en los cuales, qué producir y para quién, no están guiados por principio alguno de satisfacción de necesidades, sino por los criterios de la rentabilidad del mercado mundial.

Como país periférico resulta imprescindible una discusión más profunda acerca del significado del “crecimiento liderado por las exportaciones”. Esto no significa que no existan matices en lo que respecta a la política comercial más concreta. Sin duda, los impuestos al comercio exterior (retenciones) gravan parte del excedente apropiado por las clases dominantes y, por tanto, son indiscutibles desde el punto de vista de un sistema tributario equitativo. Además, la liberalización demostró no cumplir sus promesas siquiera en términos de crecimiento económico. Sin embargo, no podemos dejar de destacar que la inquietud de los gobiernos al momento de negociar sus acuerdos comerciales es, principalmente, la de defender los intereses de sus clases dominantes.

En este sentido, la promoción de políticas de incremento de la “competitividad” no hace más que trasladar los costos del aumento de las exportaciones sobre los trabajadores de uno u otro país. ¿Qué alternativa podemos encontrar a esta lógica de la competencia? América latina nos ofrece hoy una experiencia muy rica. Los esfuerzos de los países del ALBA se concentran en las posibilidades de intercambios comerciales basados en la cooperación, en la complementariedad de necesidades sociales (priorizando la alimentación, la salud y la educación) y en la intervención del Estado y los sectores populares en la producción de los bienes intercambiados (complementando producción y comercio por fuera de los criterios de la rentabilidad). En esta situación, las potencialidades de avanzar en políticas comerciales más amplias, no son para nada utópicas. Sin embargo, para ello debe abandonarse el “fetichismo del crecimiento exportador” que orienta las políticas de varios países de la región.

4.2. Pago de la deuda: ¿soberanía o dependencia?

*Equipo de Economía Política.**

La discusión sobre deuda pública pareciera reducirse a encontrar la mejor forma de pago. El oficialismo defiende su política de canje y pago con reservas del Banco Central. La oposición por derecha al kirchnerismo, destaca permanentemente la necesidad de reducir el gasto público para pagar con “recursos genuinos”. A excepción de la posición de Proyecto Sur -minimizada por los medios masivos-, pareciera no existir alternativas en el debate: el pago de la deuda es indiscutiblemente positivo.

Deuda y dependencia: dos caras de una misma moneda. En primer lugar, debemos destacar el rol histórico que ha jugado la deuda pública externa como forma de subordinar la dinámica económica de los países del Tercer Mundo al desarrollo capitalista de los países centrales. A través de diversos mecanismos, las potencias imperiales –primero Inglaterra y más tarde Estados Unidos– han realizado préstamos a los países sub-desarrollados insertando a estos a la lógica del capital global. En cada período, los excesos de liquidez del centro se tradujeron en fondos prestables para las clases dominantes y los gobiernos de los países periféricos, con sus consecuencias en términos de condicionamientos para los Estados nacionales para llevar a cabo una política autónoma. Estos mecanismos de préstamos fueron particularmente importantes en la Segunda Posguerra, momento en el cual Estados Unidos toma el rol de potencia hegemónica y de representante del capitalismo global. Los diferentes organismos multilaterales –Banco Mundial, FMI, entre otros– creados en el acuerdo de Bretton Woods, no hicieron más que fortalecer la posición imperial del país del norte, otorgando una mayor legitimidad a sus acciones. En cada uno de estos organismos los países ricos poseen un derecho de voto muy superior al de los países atrasados, lo cual asegura su funcionamiento adecuado a los intereses de estos Estados y, por su intermedio, de sus clases dominantes. Aún en 2008, Estados Unidos contaba con el 18% del derecho a voto en el directorio del Banco Mundial y un 17% en el FMI, mientras que Japón –segunda potencia en el directorio- posee sólo un 6%. Estas posiciones desiguales en los organismos –encargados, supuestamente, de la regulación de las actividades financieras a nivel global–, junto con capacidades productivas diferenciales de los países centrales, tuvieron como consecuencia el incremento del endeudamiento de los países eufemísticamente llamados “en desarrollo”. Esto se hace muy claro especialmente luego del giro neoliberal de los ’70: el stock de deuda externa en los países del Tercer Mundo pasó de 540.000 millones de dólares en 1980 a 3.360.000 millones en 2007 –una variación del 522%). Otro tanto representan los servicios de esta deuda: pasaron de 86.000 millones de dólares en 1980 a 523.000 millones en 2007. Aproximadamente la mitad de esta deuda externa es pública, es decir

* Nota aparecida en dos partes en prensadefrente.org el 29 de abril y el 28 de mayo de 2010.

unos 1.680.000 millones de dólares en 2007. En los países centrales, por el contrario, en ese año la deuda externa pública sólo alcanzó los 105.700 millones de dólares. Conclusión: los países del sur poseen una deuda pública externa 16 veces superior a la de los países centrales. Del stock de deuda externa pública de los países del sur, Nuestra América poseía –en promedio– 79.000 millones en el año 2007. Argentina, a pesar de los diagnósticos positivos del oficialismo, se encontraba aún en 2007 en el quinto lugar de los países más endeudados a largo plazo detrás de México, Brasil, Turquía e Indonesia. Lo más interesante de la cuestión es que aún cuando no se tome nueva deuda, los intereses y servicios de la deuda previa, incrementan los montos adeudados. Cada vez que los diferentes gobiernos del sur refrendan los pagos de intereses –o renegocian los vencimientos de capital– en su presupuesto público, no hacen más que permitir que el capital excedente del centro se destine a una “inversión” confiable y duradera: el endeudamiento público de los países del sur. Así, a nuestros pueblos se les exige destinar parte del valor socialmente producido cada año a asegurar la rentabilidad de los flujos de capital que provienen del norte.

Sobre el mito del desendeudamiento popular

El primer gran incremento de deuda fue durante la última dictadura, cuando a través de la “bicicleta Financiera” y la estatización de deuda privada pasó de 9.700 a 45.100 millones de dólares entre 1976 y 1983. Durante los gobiernos constitucionales posteriores, el stock de deuda continuó incrementándose, sobre todo en el período de vigencia de la convertibilidad, en el cual se pasó de 57.000 millones de dólares en 1990 a 144.000 hacia fines de 2001.

Con la salida de la crisis de la convertibilidad, la deuda pública argentina aumentó todavía más en el período 2003-2009, a excepción de lo que ocurrió en el año 2005 con el pago al FMI. Entre 2002 y 2005 se incrementó un 68% y luego volvió a crecer, aún cuando no se tomó nuevo endeudamiento de manera masiva. Esto llevó a que hacia fines de 2009 la deuda pública del Estado Nacional trepara a los 147.000 millones de dólares, todavía mayor que los valores de 2001 y 44% superior al promedio de toda la etapa 1992-2001.

Evidentemente, los pagos y renegociaciones de la deuda pública no han permitido reducirla de manera significativa. Los mecanismos que la generaron siguen operando y recreando un amplio espacio para la valorización del capital financiero. Los títulos públicos continúan funcionando como formas de inversión de alta rentabilidad y relativo bajo riesgo.

Si bien en la etapa actual la proporción de endeudamiento en manos de “extranjeros” se redujo al igual que la proporción de deuda sobre el PBI, la deuda pública continúa siendo un condicionante de la política económica. A través del Estado, el capital financiero internacional se apropia de casi 10% de la riqueza total generada en el país. A pesar de haber pagado la deuda con el FMI, el peso global de la deuda pública en la economía nacional mantiene al capital financiero en condiciones de seguir direccionando –a favor del conjunto del capital– la orientación general de las políticas públicas.

De este estado de situación surge una pregunta central: ¿por qué la deuda sigue siendo un problema para la Argentina? Luego de años de alto crecimiento y tasas de rentabilidad elevadas para

el capital (superiores a las vigentes en los noventa), con una situación fiscal mucho más holgada que en otra épocas y un ingreso excedente de dólares para el conjunto de la economía. ¿Por qué el Estado Nacional decide hoy retomar la negociación con los acreedores (antes llamados “buitres”) y refrendar ese endeudamiento con el fin declarado de “volver a insertarse en el mundo” o de “tomar nueva deuda a menores tasas”?

En primer lugar, el canje planteado por el ministro de economía es una decisión que beneficia a aquellos acreedores que se auto-excluyeron del canje de 2005. Los bonistas y bancos de inversión que quedaron afuera apostaron a esperar que el gobierno argentino retomara el ciclo del endeudamiento. El canje de 2010 privilegia la rentabilidad de los bonistas, reconociendo una deuda de al menos 10.000 millones de dólares, que no existía por decisión soberana del Estado argentino. El reconocimiento por parte del gobierno de que los especuladores –paradigmas de lo más rancio del capital financiero– tienen razón en reclamar el pago de sus acreencias difícilmente pueda defenderse como un acto de soberanía popular.

En segundo lugar, existe un mejor destino para los ingresos fiscales que el pago que año a año se lleva la deuda pública. De acuerdo al presupuesto nacional, en 2010 se destinarán al pago de intereses un 9,7% del gasto público total planeado para este año. Si lo comparamos con el 3,7% que se destina a salud y el 7,2% que se asigna a educación y cultura queda en claro cuáles son las prioridades más allá de los discursos grandilocuentes. Si no se pagara este monto de intereses, se podría -por ejemplo- cuadruplicar la cantidad de viviendas construidas en el año.

Tercero, los salarios de las y los trabajadores del sector público se encuentran aún hoy muy por debajo de sus niveles de 2001. Sin embargo, el incremento salarial estipulado en el presupuesto no permite siquiera una recomposición por la inflación.

Cuarto, la necesidad de sostener y aumentar el endeudamiento para financiar la actividad del Estado es una opción política anti-popular, claramente inferior a otras alternativas. Con un sistema tributario regresivo como el actual, los/as trabajadores/as pagan con su esfuerzo a los más ricos acreedores del Estado.

Una política alternativa implicaría, al menos, tres medidas: (a) Constituir una Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública –tal como se ha hecho recientemente en Ecuador- que declare el endeudamiento ilegítimo e ilegal, (b) eliminar los subsidios al gran capital y (c) aumentar la carga impositiva sobre los sectores con mayor capacidad contributiva para terminar con la “necesidad” de hacer uso del endeudamiento.

4.3. Lo que se divisa

*Lisandro Fernández.**

El Gobierno nacional intenta garantizar los dólares necesarios para el crecimiento. En ese marco, se inscriben los controles a la compra, la “ventanilla única” para ciertas importaciones y el pedido para que las empresas corrijan su balanza comercial o sustituyan los insumos importados.

Estas medidas son complementarias de la devaluación progresiva del dólar y del establecimiento de techos salariales para contener el consumo. En ese contexto, la amenaza de volver al ciclo de endeudamiento de años previos, ante la desaceleración del superávit comercial, deja entrever un viejo problema que el modelo actual no resolvió: la dependencia externa. La misma se materializa en la disminución de la entrada de dólares y encuentra su origen en el alto grado de extranjerización de los capitales que operan localmente. El peso del capital extranjero en la economía local se asocia, entre otros elementos, a una fuerte dependencia técnica de bienes de capital e insumos importados, un creciente déficit comercial manufacturero, falta de competitividad, un incesante crecimiento de las remesas de utilidades por parte de las empresas transnacionales que operan en el país, un proceso sostenido de fuga de divisas y un significativo peso del consumo de bienes finales importados.

Entre los principales capitales que operan en el país -500 empresas no financieras ni agropecuarias más grandes- casi el 65% son extranjeros y generan en conjunto el 80% del valor de la producción del grupo. Estas empresas desarrollan estrategias de producción que utilizan tecnología avanzada pero importada desde sus países de origen. Debido a su peso en el conjunto de la economía, condicionan –a la vez– al resto de la economía. De hecho, el equipo durable de producción (“bienes de capital”) importado para el conjunto de la economía argentina representa, en promedio, un 56% del total de la inversión en maquinaria mientras que en la década pasada ese concepto representaba el 47% del total.

Este escenario exhibe el patrón dependiente y subordinado de la economía argentina. Si bien en este período la economía generó saldos comerciales positivos a partir de exportar fundamentalmente mercancías de origen primario, la producción requiere de equipos y materiales importados –y los dólares respectivos para su compra– para garantizar el crecimiento industrial. Esta situación puede ejercer presión sobre las posibilidades de acumulación futura dado que reduce los montos de ingresos del que disponen las empresas para invertir en maquinaria y equipo.

En este campo, el proyecto neodesarrollista actual no generó cambios cualitativos significativos. Si bien el crecimiento de la producción y ventas es innegable, a lo largo del período kirchnerista las manufacturas industriales (MOI) fueron deficitarias en su saldo de divisas –se importaron muchas

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 12 de marzo de 2012.

más manufacturas que las que se exportaron—, producto de su bajo nivel de competitividad relativa y de la mencionada dependencia tecnológica.

Por otra parte, el consumo también presenta un elevado componente de importaciones. En efecto, en comparación con los '90, hoy un porcentaje mayor del consumo total de bienes tiene origen importado. Esto no debe hacernos perder de vista un detalle de importancia: son los estratos de ingresos altos los que consumen en una mayor proporción mercancías con un elevado coeficiente de importaciones (importadas o con componentes importados). Es decir que la persistencia de un patrón de distribución regresivo de los ingresos también ejerce una fuerte presión sobre la balanza comercial.

En este escenario, la dependencia externa cristalizada en la necesidad de dólares para garantizar la acumulación —una de las características estructurales del capitalismo argentino y una estrategia de los capitales locales— reflota como una barrera potencial que amenaza con obstruir el crecimiento y frenar la recaudación. De allí la preocupación y la batería de iniciativas recientes por parte del oficialismo, que por el momento basó su principal herramienta industrial en el “dólar competitivo y estable”. Sin embargo, frente al análisis realizado, es claro que urge poner sobre la mesa la discusión acerca del tipo de desarrollo deseado, los actores sociales involucrados y los objetivos a perseguir.

4.4. Cacerolas de ayer, cacerolas de hoy

*Melina Deledicque y Mariano Féliz.**

Diciembre de 2001 fue el momento en que todas las contradicciones del proyecto neoliberal en Argentina colapsaron. La magnitud de la crisis era tal que ese mes hasta los sectores medios, tradicionalmente más conservadores y menos propensos a movilizarse colectivamente, salieron a las calles con sus cacerolas. En una suerte de catarsis colectiva, amplias fracciones de las clases medias urbanas de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades recuperaron el espacio público. Lo hicieron, primero, en función de un reclamo material muy específico, como era el manejo de sus depósitos bancarios que habían sido congelados por el corralito. Esa medida que hizo colapsar la circulación monetaria tuvo amplios efectos contractivos sobre el conjunto de la actividad productiva y en particular sobre la economía informal. De allí en más, la acentuación de la crisis y la convergencia con otras fracciones sociales –el recordado “piquete y cacerola”– impulsó un reclamo más amplio cuando en los días previos a la Navidad de 2001 decenas de miles se movilizaron contra el Estado de sitio decretado por el entonces presidente De la Rúa. Las efímeras pero significativas asambleas populares constituidas por cientos en esos días marcaron toda una novedad para la política argentina: las clases medias emulaban las formas de auto-organización de los sectores populares e intentaban recuperar la práctica de la política en primera persona.

Diez años después, retornaron las cacerolas, pero ahora una fracción ínfima de esa clase media vuelve a las calles. Esta vez, sin embargo, la naturaleza de su reclamo se devalúa por el contexto, el tiempo pasado y –sobre todo– por el sentido de la acción colectiva. El contexto es diferente, pues hoy el capitalismo argentino no atraviesa una crisis total como en 2001 sino que comienza a deslizarse por un sendero de desaceleración pero sin perspectivas catastróficas. El contraste con aquellos años es que hoy no está en cuestión la propia legitimidad del proceso político como si lo estaba en aquel momento con el “que se vayan todos”. El Estado ha recuperado su capacidad de condensar las exigencias de orden de las clases dominantes, y la protesta callejera de ciertas fracciones de los sectores medios tienen poca capacidad de impugnación de la recuperada hegemonía del capital.

Finalmente, la demanda de “derecho al atesoramiento de dólares” en el actual contexto aparece como poco razonable y nada generalizable, en el marco de una sociedad donde la capacidad de ahorro se reduce a un subsector muy reducido de la población. Por otra parte, en el marco de un “capitalismo serio”, la clase media atesoradora se convierte en un residuo (o peor aún en un factor negativo) frente a las fracciones medias rentistas que colocan sus excedentes líquidos en inversiones inmobiliarias u otras formas dinámicas de capital financiero. En un capitalismo donde la capacidad de

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 11 de junio de 2012.

producción de plusvalía no está puesta en cuestión, el atesorador es un personaje simpático pero para nada funcional.

En diciembre de 2001, el corralito como agravio –para usar el concepto de E. P. Thompson– golpeaba seriamente a una importante porción de los sectores medios, que iba más allá de quienes detentaban plazos fijos e incluía a los –mucho más numerosos– poseedores de cuentas corrientes y de ahorro en general, y tenía efectos expansivos al conjunto social en un marco de crisis orgánica. De allí, la dimensión y legitimidad de la acción emprendida por los participantes. Hoy, el agravio sólo atañe a una fracción de las clases medias que no pueden generalizar su visión del mundo pues material y simbólicamente no remite a las prácticas mayoritarias de su propia clase. Por otra parte, estas cacerolas no pueden interpelar al conjunto del pueblo trabajador (y no lo buscan) porque no cuestionan un proyecto capitalista en crisis.

La limitación a la compra de moneda extranjera es una medida torpemente implementada por el Gobierno y no ataca los problemas de fondo que se traducen en presiones devaluatorias. Las restricciones a la compra-venta de dólares no resuelven la crítica situación del balance de pagos que se vincula al síndrome de endeudamiento crónico de la Argentina, el peso creciente del capital transnacional (y su política de fuga de divisas) y la incapacidad sistémica de la industria argentina de competir internacionalmente sobre la base de la inversión. Las cacerolas se convirtieron en el chivo expiatorio (como en otro momento, Repsol, Clarín, los “fondos buitres” y otros) para que el Gobierno pragmáticamente accione con el fin de desplazar las barreras de su proyecto, ganando tiempo y creando nuevo espacio político de maniobra.

V. Finanzas públicas y presupuesto

5.1. La “reforma” que nunca llega

Una mirada sobre la estructura impositiva

*Mariano Félix.**

Muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años, entre el denominado modelo de valorización financiera y el actual modelo “neodesarrollista”. Sin embargo, muchas más cosas han permanecido iguales. Una de las principales continuidades se encuentra en el ámbito de la política tributaria.

Aún hoy, luego de 5 años de kirchnerismo y más allá de los discursos, nuestro país continúa sosteniendo un sistema de recaudación impositiva profundamente regresivo. En ese esquema los más pobres continúan aportando un porción de sus ingresos mucho mayor a la que destinan los sectores más ricos (y principales beneficiarios del actual modelo). De esa manera, en lugar de favorecer una mejor distribución de la riqueza, la estructura de recaudación de impuestos continúa acentuando y sosteniendo la desigualdad.

La recaudación de impuestos sigue teniendo su principal bastión en los impuestos al consumo. En 2007 casi el 42% de todos los ingresos del Estado (nacional y provinciales) provenían de la imposición a las diversas formas del consumo. En particular, el impuesto al valor agregado (IVA) se lleva las palmas aportando el 26,2% de la recaudación total.

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 21 de julio de 2008.

Tabla 1. Estructura de recaudación de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Argentina, 2007.

Tipo de impuesto	Porcentaje de la recaudación total
Impuestos al consumo	42,0
IVA	26,2
Ventas	10,0
Específicos	5,8
Impuesto a las ganancias	18,5
Personales	5,3
Corporativas	12,2
Impuestos a la propiedad (nación)	7,5
Impuesto al cheque	6,5
Impuesto a los bienes personales	1,0
Impuestos a la propiedad (provincias)	3,6
Impuesto inmobiliario	1,6
Impuesto a los sellos	2,0
Retenciones a la exportación	8,5
Impuestos a la importación	2,9
Contribuciones sociales	15,3
Aportes patronales	10,0
Aportes personales	2,9
Autónomos	2,3
Otros	1,7

Fuente: Estimación propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Es cierto que en 1998, por ejemplo, la participación de los impuestos al consumo llegaba al 53,3% del total. Sin embargo, ya sabemos que no ha habido una reforma tributaria en serio en Argentina. La mayor parte de las mercancías de consumo (cada vez más) están gravadas fuertemente con el IVA al 21% y otros impuestos.

Entonces, ¿qué puede explicar ese cambio? Básicamente, la fuerte reducción que el consumo (en particular, el consumo popular) ha tenido en el ingreso total. Efectivamente, en el actual modelo de acumulación el consumo representaba en 2007 solo el 71,5% del ingreso total, mientras que en 1998 era equivalente al 81,5%. Este es el resultado de la fuerte reducción que ha habido en el peso que tienen los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. El estancamiento en la participación de los salarios en el ingreso da cuenta tanto de la caída relativa en el consumo como de la reducción relativa en la recaudación de impuestos sobre el mismo.

Por el contrario, el impuesto a las ganancias representó en 2007, solo el 18,5% del total de lo recaudado y algo más que el 15,2 de 1998. De ese total, un porcentaje muy bajo (5,3 en 2007) se explica por el pago a las ganancias personales; en la Unión Europea, por ejemplo, esos impuestos explican el 26% del total recaudado. Esto significa que los más ricos en Argentina pagan poco y nada de impuestos.

Lo escandaloso de las cifras aumenta si tenemos en cuenta que, a la par de la caída en los salarios, se ha producido una fuerte expansión en la masa de ganancias. Entre 1998 y 2003, en las 500 empresas más grandes, las ganancias pasaron del 24 al 28% del valor agregado neto, llegando a 35 para 2004, última cifra disponible. La contracara ha sido que las ganancias que en 1998 representaban el 57,6 por ciento de la masa salarial (incluyendo contribuciones a la seguridad social) llegaron a representar en 2004, 150% de esa masa. En tal contexto, si bien los impuestos a las ganancias empresariales, entre 1998 y 2007, aumentaron un 29% la participación en la recaudación total, esas ganancias aumentaron un 50% o más en la etapa.

Estos elementos constituyen la esencia del sistema tributario argentino, representando cerca del 60% del total de la recaudación. Su estructura global y sus características particulares se mantienen sin modificaciones sustanciales, reforzando la regresividad del sistema de recaudación de impuestos.

Frente a la contundencia de las continuidades, el principal elemento que ha cambiado en la estructura de impuestos ha sido la re-creación del sistema de retenciones a las exportaciones. Su recaudación en 2007 alcanzó los 20.400 millones de pesos, es decir sólo el 8,5% de la recaudación. Este es un impuesto que tiene un sesgo progresivo, pero en un contexto de creciente aumento en los precios de los productos de exportación (59% entre 1998 y comienzos de 2008), apenas si ha moderado el aumento en la desigualdad social. Por eso, a pesar del incremento en las retenciones, los alimentos aumentaron en más de un 55% desde mayo de 2003.

Por otra parte, el sistema de retenciones se encuentra hoy concentrado solamente en las rentas extraordinarias del agro y parte de la producción petrolera, pero no hacen mella en las rentas de la producción y exportaciones de minerales. Unos 6.000 millones de dólares de exportaciones de la minería y sus manufacturas se encuentran así libres de tributos por las rentas extraordinarias, que provienen de la explotación de las riquezas naturales de nuestro suelo a bajos costos y sin consideración del daño socio-ambiental.

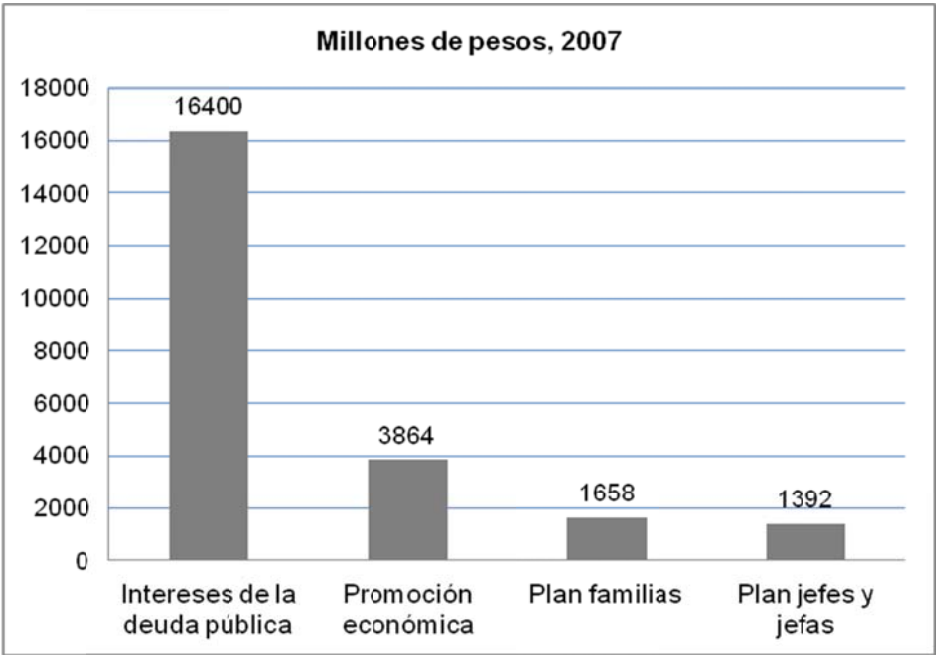
Luego cabe remarcar la creación en 2002 del impuesto al cheque que continúa teniendo un peso significativo en la recaudación. En 2007 representó el 6,5% de la misma. Si bien este impuesto grava algunas transacciones financieras, todavía hoy se encuentran exentas de tributación las ganancias por intereses (donde el Estado pierde unos 2800 millones de pesos al año), las ganancias de capital producto de la especulación financiera e inmobiliaria, y los ganancias resultantes de los fondos de inversión (de los cuales los pools de siembra son el ejemplo más evidente).

Un último elemento del sistema impositivo marca una severa continuidad estructural. El sistema de impuestos de Argentina se caracteriza por prácticamente no gravar la propiedad inmobiliaria. En efecto, mientras en 1998 la suma del impuesto a los bienes personales y el impuesto inmobiliario equivalía a 4,2% de la recaudación total, en 2007 ese guarismo se redujo a un ridículo 2,6%. Si este

hecho lo enmarcamos en el boom de precios de inmuebles y propiedades está claro el sesgo regresivo que supone.

Esta estructura tributaria regresiva se superpone a una esquema de gasto que privilegia los subsidios directos e indirectos al gran capital y el pago de la deuda pública, por sobre las necesidades inmediatas de los que menos tienen. Para ejemplo basta un botón: en 2007 el Estado argentino subsidió indirectamente al gran capital en unos 3.800 millones de pesos por regímenes de “promoción económica” y pagó 16.000 millones de pesos en intereses de la deuda pública. Sin embargo, el gasto en los planes Jefes y Jefas de Hogar y Plan Familias, que se supone deben atender a los hogares más necesitados, se mantiene congelado en torno a los 4.000 millones de pesos desde 2002. No parece ser esta una estructura tributaria popular, ni siquiera progresista.

Gráfico 1. Gasto en subsidios al capital y planes sociales, año 2007.



Fuente: Estimación propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

5.2. Rebajar el IVA

*Ismael Domian.**

Periódicamente vuelve a la agenda pública el debate sobre la necesidad de reformar el sistema tributario argentino con el fin de hacerlo más progresivo. Hoy en día, cuando es evidente que las políticas económicas son continuidad del modelo anterior y la pobreza estructural supera el 25% de la población, se torna urgente superar la etapa de discusión y comenzar a tomar medidas urgentes, que incluyen la política tributaria pero la exceden. Reconociendo la complejidad del tema, está claro que la realización de ciertos cambios puntuales que provoquen avances en la materia no requiere mucha discusión sino que sólo hace falta decisión política para llevarlos adelante.

Al analizar el impacto del sistema impositivo argentino en la distribución del ingreso resulta ineludible hacer mención a los dos tributos que más aportan a las cuentas públicas: el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el Impuesto a las Ganancias.

En relación con el primero, su carácter de regresivo (pagan más los que menos tienen) está dado por el hecho de que es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor, es decir que la carga tributaria es transferida a todas las personas que gastan sus ingresos para adquirir bienes y servicios. Cuando una familia trabajadora compra sus mercaderías básicas en el mercado del barrio paga un 21% de IVA. Si un empresario o un gerente compra productos electrónicos de alto costo en un comercio en un shopping, paga la misma alícuota. El IVA es un impuesto al consumo. El más pobre y el más rico pagan la misma tasa o alícuota.

Si bien no se puede pensar en la eliminación del IVA, al menos en el corto plazo, debido a que dicho impuesto representa cerca del 35% de los ingresos tributarios nacionales de acuerdo con las proyecciones del Presupuesto 2009, sí se pueden pensar en medidas que reduzcan la carga impositiva sobre los sectores de menores ingresos.

Por ejemplo, algunos estudios muestran que la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria permitiría bajar sus precios un 16%, es decir que los más pobres podrían consumir alrededor de un 20% más de productos de primera necesidad. Si bien tal medida no resolvería el problema de la pobreza y el hambre, sería un paso en esa dirección debido a que, de acuerdo con los datos del INDEC, más de 2 millones de personas dejarían de ser pobres (entre ellos 650.000 niños y niñas).

Pero si desde el Estado no se controla a las grandes empresas formadoras de precios y desde las organizaciones sociales no se ejerce presión directa sobre las empresas y el Estado, tal vez la rebaja del IVA no reduzca los precios sino que les permita a las empresas aumentar sus ganancias.

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 2 de febrero de 2009.

Teniendo en cuenta los datos del 2008, el costo de esta propuesta sería de entre 4.000 y 9.000 millones de pesos. Es decir, solamente el 4,5% de la recaudación total o el 1,1% de todo el ingreso generado en el país en un año.

En relación con el Impuesto a las Ganancias, su carácter progresivo (pagan más los que más tienen) está dado por el hecho de que es un impuesto directo que grava las ganancias generadas por empresas y las manifestaciones directas de riqueza de las personas. Una característica que hay que resaltar en la estructura tributaria actual es que los intereses de los depósitos bancarios, títulos públicos y obligaciones negociables no pagan impuesto a las ganancias. La eliminación de esa exención permitiría recaudar alrededor de 5000 millones de pesos, monto que se incrementaría ampliando dicha eliminación a la exención vigente en el impuesto a los bienes personales por depósitos bancarios y títulos públicos.

La eliminación del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria junto a la desaparición de las exenciones mencionadas en el Impuesto a las Ganancias implicarían modificaciones en el sistema impositivo argentino tendientes a reducir su carácter regresivo, sin generar un impacto presupuestario significativo. Es decir que la decisión de no avanzar en este sentido y sí, por ejemplo, de eliminar la “tablita de Machinea” (que “perjudicaba” al 5% más rico de los asalariados: funcionarios públicos, gerentes de empresas, etc.) es una decisión política que marca la orientación general de la política fiscal.

Por otra parte, mientras que las medidas fiscales que reducen la carga impositiva a los sectores medios-altos favorecen básicamente la compra de dólares, en la actual coyuntura las medidas mencionadas tendrían un impacto directo sobre el consumo popular. De esa manera, la rebaja del IVA a los productos de la canasta básica no sólo mejoraría la calidad de vida de millones de personas sino que tendría un impacto macroeconómicamente expansivo.

5.3. Presupuesto 2011 ¿cuáles son sus presupuestos?

*Equipo de Economía Política.**

El debate sobre el presupuesto del Estado nacional para 2011 ha estado teñido de sospechas e intrigas. Sin embargo, poco parece discutirse la sustancia del mismo, sus presupuestos y sus prioridades.

Si analizamos sucintamente algunos de los principales elementos de la proyección de gastos y recursos del Estado nacional para el próximo año (el presupuesto) veremos que más allá del teatro parlamentario, el Presupuesto 2011 profundiza un esquema de política económica que supone una serie de continuidades preocupantes:

1. Subestimar el crecimiento e inflación

El presupuesto para 2011 supone que el PBI aumentará 4,3% en comparación con 2010 y que la inflación minorista será del 8,4%. Es decir, el gobierno dice que la economía se frenará fuertemente pues en la actualidad el crecimiento es superior al 9% anual. El llamado efecto “arrastre” implica que aun si la economía dejara de crecer a partir de enero de 2011, el crecimiento promedio esperado entre 2011 y 2010 sería de 4,5%. La proyección de crecimiento es –entonces– claramente inverosímil y falta de realidad.

Por otra parte, la inflación estimada por el gobierno se mantiene dentro de los valores de los últimos años, según el cálculo del INDEC. Desde la intervención del organismo estadístico, esos números han entrado en cuestionamiento. Aún así, el propio INDEC señala que la inflación promedio es mucho más baja que la inflación en productos alimenticios: en 2010 fue de 11% contra 16%, respectivamente.

A los fines del gobierno, la subestimación de la inflación y el crecimiento sirve en al menos tres sentidos. Primero, la recaudación impositiva será mucho mayor que la proyectada en el presupuesto y la asignación de esos excedentes queda bajo el manejo plenamente discrecional del Poder Ejecutivo mediante el uso de las potestades delegadas por el Congreso. En segundo lugar, la inflación más baja le permite mantener artificialmente bajo el peso de la deuda pública atada a la inflación. Si bien es positivo en términos de que disminuye los pagos de deuda, esta situación le permite al gobierno evitar poner en discusión la necesidad de suspender los pagos, investigar el origen de la misma y anular la porción fraudulenta, ilegal e ilegítima. Tercero, esta baja inflación

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 23 de noviembre de 2010.

proyectada le permite al gobierno mostrar aumentos de gasto en términos reales cuando en realidad en muchos rubros sensibles (como los salarios, jubilaciones y pensiones) los aumentos presupuestados implican fuertes reducciones en el poder de compra.

2. Continuar privilegiando el pago de la deuda externa

Más allá de que desde 2002 la deuda pública ha reducido su peso en el gasto total, no deja de ser cierto de que para 2011 el gobierno plantea pagar intereses por más de 36 mil millones de pesos y deberá buscar financiamiento por unos 30 mil millones de dólares para cubrir una porción equivalente de deuda que se vence durante el año próximo. La realidad es que el estado argentino gasta un 9,8% de su presupuesto en pagar intereses de la deuda pública, un monto equivalente a 1998. Ese monto es 2 veces más que el presupuestado para educación, 5 veces el presupuestado para salud o 3 veces el presupuesto de la AUH y el Plan Argentina Trabaja juntos. Se continúa privilegiando los intereses de los acreedores.

3. Mantener bajos los salarios de los/as trabajadores/as estatales

El aumento proyectado para la masa de salarios del estado nacional es igual a 14%. Es decir, suponiendo que el número de trabajadores/as no varíe durante 2011, ese aumento significa que los/as trabajadores/as del sector público nacional pueden esperar un aumento en sus salarios no mayor a ese 14%. Por supuesto, es probable que la planta del Estado nacional se incremente y que la inflación sea superior al 9% proyectado. Con una inflación del 9% anual, el 14% de aumento en los salarios significan un aumento del 5% en el poder de compra de los ingresos. Ahora bien, si la inflación real es mayor al 14% (la inflación oficial de alimentos es superior a eso en la actualidad) el aumento presupuestado en la masa de remuneraciones del sector público nacional implica una reducción en el salario real de los/as trabajadores/as.

4. Continuar subsidiando al gran capital

El presupuesto 2011 contempla un incremento de 22,4% en las exenciones impositivas (gastos tributarios): en particular, los regímenes de promoción económica que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones supondrán subsidios indirectos que aumentarían en 2011 el 30,2%, llegando a 8462 millones de pesos. Por otra parte, los gastos en el rubro servicios económicos aumentarían 10,2% y representarán 16,4% del gasto total. Estas erogaciones suponen 61 mil millones de pesos en subsidios directos e indirectos a empresas del sector transporte, energía, constructoras, etc., en su mayor parte grandes empresas. Un monto seis veces mayor que los gastos en construcción de vivienda, de servicios de agua potable y cloacas.

5. Continuar sin universalizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y sin pagar el 82% para los trabajadores jubilados que reciben la mínima

La proyección para 2011 es que los recursos destinados a la AUH aumentarán un 20,5%, es decir por debajo del aumento en los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública (28,1%). El aumento propuesto apenas si cubrirá la desvalorización provocada por la inflación real (no la oficial). Por otro lado, la cobertura que ha llegado a 3,8 millones de niños/as se extenderá a sólo 200 mil niños/as más en 2011, quedando muy corto aún de la urgente necesidad de universalizar el beneficio: incluyendo las asignaciones familiares por hijo/a para asalariados formales, el conjunto de las asignaciones por hijo/a deja sin cobertura incondicional al 29,5% (3,1 millones) de los/as niños/as del país.

En relación a las Jubilaciones y Pensiones, sigue sin considerarse una propuesta de acercamiento progresivo de los beneficios mínimos al 82% del salario mínimo que es una medida claramente posible a corto plazo. Por otra parte, la proyección de aumento en este rubro se encuentra en el 22,7% para todo el año próximo, algo por encima de la inflación real esperada, pero claramente por debajo de los requerimientos para alcanzar la reivindicación histórica de los/as trabajadores/as jubilados/as.

6. Mantener la regresividad tributaria: pagan más los que menos tienen

Luego de 8 años, el gobierno insiste en sostener un esquema tributario basado en la imposición sobre el consumo popular. El impuesto al valor agregado (IVA) continúa representando la mayor porción de la recaudación (37% de los ingresos tributarios). Por el lado del impuesto "a las ganancias" (24,4% de los ingresos tributarios), sin cambios en sus estructura, se mantendrá la tendencia a la reducción en la participación de los pagos de corporaciones y grandes empresas (en 2009, las empresas aportaron sólo el 60% del impuesto, mientras que en 2003 esa proporción era del 74%). Por último, se mantienen las reducciones en los aportes patronales vigentes desde los años noventa y sigue sin gravarse las ganancias del capital financiero (por intereses y valorización de activos) o las exportaciones de minerales, ambas fuentes de rentas extraordinarias.

5.4. Coparticipación: falta una discusión previa

*Ismael Domian.**

En nuestro país esporádicamente se reitera la discusión pública sobre una reforma en el régimen de coparticipación de impuestos, es decir, cómo se reparte la recaudación entre la Nación y las provincias. Sin embargo, el debate parece reducirse a argumentos que justifican un mayor porcentaje de recursos para la Nación o para las provincias (o para alguna de ellas en particular). En este contexto se enmarca la actual discusión por coparticipar o no el ciento por ciento del impuesto al cheque, con el único objetivo de agrandar la “caja” que maneja uno u otro nivel de gobierno. Planteado en estos términos, la disputa presenta dos inconvenientes: el primero y más obvio es que difícilmente se acuerde un nuevo régimen de reparto, debido a que ninguna jurisdicción estaría dispuesta a perder recursos. El segundo, y más importante, es que no se realiza una discusión previa y más profunda, donde se evalúe qué recursos se están distribuyendo (el sistema tributario que los origina) y cómo se estructuran las políticas públicas que se financian con esos recursos.

Comenzando por los impuestos que nutren la coparticipación, se debe recordar una vez más que el sistema tributario argentino es fuertemente regresivo. El Presupuesto nacional 2010 proyecta que cerca del 37% de los recursos tributarios provengan del IVA, impuesto que pagan en mayor proporción las familias de menos recursos. Por otra parte, siguen vigentes exenciones en el impuesto a las ganancias y bienes personales por rentas financieras. El mismo presupuesto las calcula en torno de los 5.000 millones de pesos, monto que equivale a más del 64% de los gastos nacionales destinados a promoción y asistencia social previstos para el año en curso. A ello habría que agregarles la baja imposición y las desgravaciones impositivas que tienen actividades extractivas de recursos naturales, entre las que se destaca la minería. Otro punto a avanzar en la reforma tributaria está vinculado con la creación de un impuesto a las transacciones financieras. De acuerdo con el volumen de operaciones del año 2008 en dichos mercados, una alícuota del 1 por ciento permitiría recaudar alrededor de 20.000 millones de pesos, es decir, el doble de lo asignado para la Asignación Universal a la Niñez.

A su vez, se debe tener en cuenta la importante reducción de las contribuciones patronales establecida en la década del 90. A pesar de dicha reducción, en el 2009 se recaudaron cerca de 40.900 millones de pesos por este concepto, de manera que una recomposición de su nivel en las grandes empresas aportaría una suma significativa de recursos.

Si bien la función de recaudación está concentrada a nivel nacional, la necesidad de una reforma tributaria no sólo se reduce a su ámbito, ya que los sistemas tributarios provinciales presentan características más regresivas aún. Alrededor del 70% de la recaudación de las jurisdicciones

* Nota aparecida en el diario *Página/12* el 15 de marzo de 2010.

subnacionales proviene del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, otro tributo que tiene más impacto en el consumo de los más pobres. Un dato escalofriante es que el Impuesto Inmobiliario Rural en las provincias de la región pampeana, donde se desarrollan las actividades agrícolas más rentables, aportó menos del 5% del total de la recaudación de dichas jurisdicciones en el año 2009.

Respecto de la prestación de servicios públicos, más allá de que el tema es más amplio, está claro que en las últimas décadas han sufrido un deterioro profundo en la calidad de sus prestaciones. Centrando el análisis en la educación por su peso presupuestario (representa alrededor del 25% del gasto de las provincias), podemos decir que existen problemas de fondo a resolver, los cuales no se solucionan sólo con más recursos para uno u otro nivel de gobierno. Actualmente estos servicios están concentrados en la órbita provincial, aunque claramente dichas jurisdicciones se encuentran desbordadas en las funciones correspondientes. La renacionalización de la inversión en educación podría contribuir a equiparar parte de las diferencias regionales y jerarquizaría la política del sector.

Por otro lado, la degradación de la escuela pública provocó que quienes tienen recursos se volcaran a la educación privada, acentuando las diferencias entre ricos y pobres. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que en algunas provincias las transferencias desde el Estado a los colegios privados equivalen a cerca del 10 por ciento del gasto en salarios docentes. Estos son algunos de los ejemplos que sirven para graficar que existen discusiones previas al reparto de recursos y tienen que ver con la reforma del sistema tributario y la reestructuración de los servicios básicos. La manera en que se definan dichos cambios es la que debe guiar el debate sobre una nueva distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno.

VI. Dinero e inflación

6.1. El poder del capital como causa de la inflación

*Equipo de Economía Política.**

La inflación resurgió como problema a partir de la salida de la convertibilidad. En los últimos años su efecto ha sido lisa y llanamente devaluar fuertemente los salarios de las trabajadoras y trabajadores. La política económica ha enfrentado el problema pero no sus fundamentos dando –por lo tanto– pobres resultados. ¿Será que no existen alternativas al ajuste para frenar la inflación?

La salida de la convertibilidad trajo de vuelta un viejo conocido del pueblo trabajador: la inflación. Desde 2002 y hasta 2009 el aumento acumulado del conjunto de los precios de los bienes y servicios de consumo aumentó un 139,6%. Durante el primer gobierno kirchnerista (2003-2007) la inflación fue –en promedio– del 8,1% anual; durante el 2do gobierno (2008-2009) fue de 7,5% anual. Estos fueron los aumentos que reconoció el INDEC, organismo oficial que tiene como tarea medir la evolución de la inflación. Sabido es –claro está– que desde su intervención en 2007, las estimaciones del INDEC han sido fuertemente cuestionadas; se estima que la inflación real durante estos últimos 3 años ha sido –al menos– 40,9% más alta de lo que indican las estadísticas. En los últimos meses la inflación ha vuelto a retomar un lugar en la agenda de la mano de una aceleración en el aumento en los precios de ciertos productos básicos: alimentos y bebidas (en particular, la carne) y alquileres, entre otros. Con aumentos superiores al 40% en algunos productos durante los primeros meses de 2010, de sostenerse la tendencia la inflación promedio estaría superando el 30% anual.

¿Qué es lo que impulsa la “inflación del modelo”?

Para entender el proceso actual no puede dejarse de lado el impacto que ha tenido la devaluación del peso en enero de 2002. El impacto del cambio en el precio del dólar fue muy significativo, en particular en los precios del conjunto de productos que compiten con importaciones (o son importados) y, fundamentalmente, aquellos productos que se exportan. Es decir, la devaluación permitió a las empresas productoras de alimentos, combustibles y productos de la industria manufacturera, aumentar sus precios. El resultado neto de ese proceso fue –luego de los primeros 12 meses– un aumento en el dólar de 248,1%, un salto en los precios de los alimentos de 57,9%, una caída en el poder de compra de los salarios de 23,7% (para el conjunto de los/as trabajadores/as) y un aumento del 122% en la participación de las ganancias empresariales respecto al ingreso total.

* Nota aparecida en dos partes en prensadefrente.org el 1 de abril y el 11 de abril de 2010.

Frente al crecimiento de la inflación a partir de 2002, los/as trabajadores/as lograron –a través de su lucha y organización– en una primera etapa recuperar parcialmente las pérdidas salariales. En efecto, entre 2002 y 2006 los salarios de los/as trabajadores/as aumentaron 88,6% en términos nominales y en promedio. Esto significó un incremento de 17% en términos reales. Si bien este aumento sólo les permitió recuperar algo de lo perdido desde la devaluación, las subas salariales aparecieron como el chivo expiatorio siendo acusados/as los/as trabajadores/as de ser los causantes de la inflación y exigiéndoseles –con más fuerza a partir de 2006– “moderación”.

Este argumento (que los salarios causan la inflación) desconoce algunos elementos importantes para señalar. La devaluación pulverizó el costo laboral y redujo el peso de los salarios en la estructura de costos de las empresas. En 2002 el costo laboral cayó 18%. Junto con el aumento significativo del resto de los costos, los precios y las ganancias, los salarios pasaron a representar sólo el 8,6% del valor bruto de producción (VBP) en las grandes empresas, como promedio del período 2002-2007. En esas condiciones, un aumento de 25% en los salarios nominales sólo aumenta 2,5% los costos totales; si las ganancias empresariales y el resto de los costos no varían, ese aumento en “costos salariales” podría traducirse en un aumento en los precios de la misma proporción. Entre 2002-2007, los costos laborales aumentaron sólo 1,7% en relación al VBP.

Claro está, esto implica algo obvio pero usualmente dejado de lado: son las empresas –y no los/as trabajadores/as– quienes fijan los precios. En particular, son las grandes empresas productoras las “formadoras de precios”. Esto no quiere decir que esos grandes capitales pueden decidir unilateralmente los precios pero sí que ellas deciden a que precios venderán sus productos. Ellas pueden hacer esto porque poseen un poder significativo en sus respectivas ramas de producción.

El poder de estas empresas para fijar sus precios y –en el camino– sostener sus mega-ganancias, se ha incrementado en las últimas décadas. Esto se debe a la creciente concentración, centralización e internacionalización (extranjerización) del gran capital local. En 2007, el 20% de las empresas más grandes se apropiaron de más del 75% de las ganancias de la cúpula capitalista (500 empresas de mayores ventas) y más del 80% eran empresas extranjeras.

Este proceso les ha permitido incrementar fuertemente la rentabilidad estructural: en los noventa (1995-1998) tenían una tasa de ganancia del 13,2% sobre su capital circulante, mientras que en la etapa actual (2002-2007) la tasa de ganancia es en promedio 19%. Ese poder les ha permitido a los grandes capitales mantener firme su rentabilidad desde 2002 y una masa de ganancias siempre creciente hasta 2007 (y seguramente en los últimos dos años). Esto solo significa una cosa: la inflación es causada por la presión de los grandes sectores del capital para sostener sus niveles de rentabilidad.

La etapa actual: inflación y deuda externa

La etapa actual se caracteriza por un recrudecimiento de la inflación, que ha sido reconocido por el INDEC. La inflación real ha promediado el 21% anual en los últimos tres años. La tendencia de los primeros meses de 2010 marca un salto adicional. La eficacia de la política de contención salarial –

mediada por las burocracias sindicales— resultó en el fin de la recuperación de los salarios reales. En 2008 y 2009 los trabajadores/as vieron estancarse el poder de compra de sus salarios. Los salarios nominales promedio crecieron apenas por encima de la inflación real de la etapa; los salarios de los/as trabajadores/as estatales lo hicieron muy por debajo.

Habiendo perdido cualquier sustento la hipótesis dominante de la inflación por presión salarial (que ya habíamos descartado), comienza a tomar preeminencia la visión de que la misma es causada por el descontrol de los gastos públicos y la emisión de dinero. Esto último es negado rápidamente con un solo dato: la cantidad de dinero ha crecido en los últimos años menos que el PBI, reduciendo su relación de 13,43% en 2007 a sólo 13,05% en 2009. En lo que respecta al gasto público, vemos que si bien aumentó, en relación con el PBI nominal el gasto del sector público nacional fue en 2007-2008 más bajo que en los años anteriores (2002-2006). Vista la evidencia, es clara la intención de los sectores dominantes y sus representantes: acotar los márgenes de libertad del Estado (control del Banco Central) y realizar un ajuste de gastos que permita pagar los crecientes pagos de intereses y capital de la deuda externa, que en 2010 son el rubro del gasto presupuestado que más crece.

Dicho esto ¿qué explica el recrudecimiento de la inflación?

Un primer elemento es la recuperación en el precio de algunos productos de exportación significativos para la Argentina. La el poroto de soja aumentó 32% desde comienzos de 2007, el aceite de girasol 64%, carne bovina 16% (25% en el último año), el petróleo 37%. Esto presiona sobre los costos y los grandes capitales —con su voluntad de ganar a toda costa— los trasladan a los precios. Aprovechan para esto el “colchón” que les provee la devaluación del peso que desde 2006 superó el 24%. El segundo elemento parece ser la voluntad de los grandes capitales de recuperar la pérdida de competitividad que enfrentan desde 2003. En efecto, su propia estrategia de protección de sus ganancias por medio de la inflación ha deteriorado el tipo de cambio real porque el dólar ha aumentado mucho menos que los precios internos. En esta etapa de crisis económica, la presión sobre la rentabilidad se incrementa. Frente a la necesidad de acelerar la acumulación de capital, las grandes empresas recuperan la “iniciativa” buscando devaluar los salarios a través de la inflación para aumentar sus ganancias.

¿Qué hacer? ¿Cómo frenar la inflación?

Lejos de atacar las causas fundantes de la inflación —que como mostramos deben rastrearse en las características del propio modelo de acumulación actual— el gobierno kirchnerista ha privilegiado su alianza con los sectores dominantes. En ese marco el problema inflacionario ha sido abordado con 4 instrumentos fundamentales:

- Una política de subsidios a las empresas de servicios públicos. Si bien esto ha contenido la inflación en esas ramas, lo ha hecho a costa de subsidiar las ganancias empresarias sin políticas de inversión ni control de la calidad de los servicios.

- Acuerdos de precios con las grandes cadenas de distribución y cámaras sectoriales, pero sin abordar directamente el problema clave de la concentración y el poder que poseen las grandes empresas productoras de las mercancías.

- La mencionada política de contención salarial (“techos salariales”), en complicidad con las burocracias sindicales.

- Intervención del INDEC para “dibujar” las estadísticas inflacionarias con los costos que implica la pérdida de credibilidad del conjunto de los datos estadísticos oficiales.

En función de la evaluación presentada ¿qué podría hacerse para enfrentar la inflación? Sin ser exhaustivos, en esta coyuntura existen acciones concretas que se pueden implementar inmediatamente para enfrentar la inflación:

- Estatización del comercio exterior (exportaciones e importaciones), lo que permitiría controlar eficazmente los precios internos de la producción nacional.

- Creación de instancias democráticas de evaluación y control de los costos empresariales en las principales industrias, buscando transparentar la fijación de precios en los lugares de producción, con la aplicación de sanciones adecuadas.

- Abandono de la política de subsidios indiscriminados para pasar a ejercer un seguimiento y control (en instancias de participación popular) de las inversiones realizadas por las empresas de servicios públicos.

- Implementación de una política de ingresos que priorice la recuperación del poder de compra de los ingresos de los/as trabajadores/as para alcanzar en lo inmediato un salario igual a la canasta familiar que hoy supera los 4400 pesos por mes.

Todas estas son medidas factibles a corto plazo que sólo pueden hacerse efectivas –sin embargo– sobre la base de la participación popular, algo que desde las fuerzas políticas de las clases dominantes, incluyendo al kichnerismo, no están dispuestos a aceptar pues alteraría el actual equilibrio de fuerzas sociales que favorece hoy al gran capital.

6.2. La inflación y su patrón clasista

*Mariano Félix.**

El debate sobre la inflación se asienta sobre el supuesto de que es un problema que “afecta a la sociedad”, que genera un impacto parejo a toda “la gente”. Como suele ocurrir, esta forma de ver la cuestión deja de lado el hecho de que la sociedad está compuesta de diferentes estratos, sectores y clases sociales y que la inflación –como cualquier otro proceso de naturaleza económico-social– no los involucra de igual manera.

La inflación es primero y ante todo la manifestación del conflicto de clases por el control social del proceso de producción y apropiación de la riqueza. Esa disputa entre el conjunto del pueblo trabajador y las clases dominantes puede manifestarse en determinadas condiciones en una dinámica de precios crecientes. Por esto queda claro que la inflación es un fenómeno estrictamente ligado a las decisiones empresariales de incrementar sistemática y sostenidamente sus precios y pone a las empresas formadoras de precios –las más grandes y concentradas en rama– como las primeras responsables y beneficiarias de la misma. Subir los precios de sus mercancías les permite bajar la participación de los salarios en el valor creado y diluir parte de sus costos. Este es, además, un mecanismo privilegiado para financiar sus inversiones al bajo costo de depreciar la fuerza de trabajo en lugar de –por ejemplo– contraer el consumo suntuario de propietarios y gerentes del capital.

Lo anterior significa que los trabajadores son los primeros perjudicados por la inflación. Ahora bien, dentro del pueblo trabajador no todos están en la misma posición a la hora de desplazar el impacto de este fenómeno. Por un lado, los trabajadores del sector privado con empleo formal y fuerte organización sindical son quienes mejor equipados están para trasladar el efecto real de la inflación sobre sus ingresos. Esto no quiere decir que siempre lo logren, pero al menos están en mejores condiciones objetivas de hacerlo. Por otro lado, quienes se encuentran empleados en condiciones más precarias son claramente más afectados por la inflación que el primer grupo. Sus posibilidades de negociar recuperaciones en su poder de compra frente al aumento de los precios son mucho menores y tardías.

Por último, los principales perjudicados por la inflación son un conjunto fuertemente heterogéneo en términos de clases, lo cual configura una situación paradójica. Quienes reciben beneficios sociales fijos y quienes tienen activos financieros son los principales afectados por el crecimiento en los precios. Mientras los primeros enfrentan al Estado que paga esos beneficios sin ajuste o indexación, los otros son propietarios de activos de precio fijo que pierden valor sistemáticamente con el aumento

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 25 de Abril de 2011 con el título “Un análisis clasista”.

general de los precios. El economista polaco Kalecki señalaba la singular contradicción latente que existía entre el tándem capital productivo-trabajo (formal) y los sectores rentistas (capital financiero).

En este contexto, se entiende por qué el conjunto de los sectores capitalistas pueden acordar en sus demandas por contener las exigencias salariales. Un freno al aumento de los salarios facilitaría la generación no inflacionaria de fondos para inversión productiva garantizando simultáneamente la valorización del capital en su forma financiera. Esta es la salida con más consenso entre las clases dominantes pues las otras opciones los enfrentan diametralmente. Por un lado, la estrategia de apreciación del tipo de cambio privilegiada por los sectores financieros ataca la inflación cargando el peso del ajuste sobre las empresas que exportan o compiten con las importaciones, quienes deberán a su turno encarar una disputa abierta contra las demandas de sus trabajadores. La alternativa del ajuste del gasto público asume que la inflación es provocada por el exceso de demanda, en particular provocado por una política fiscal sobre expansiva. En tal sentido, los sectores financieros exigirán contener el gasto público en aquellos rubros no financieros, mientras los sectores del capital productivo privilegiarán la caída del gasto social o el gasto en salarios de los trabajadores estatales frente a otros gastos que los benefician directa o indirectamente (como subsidios u obra pública). Este podrá ser el punto de acuerdo –parcial– entre ambas formas del capital: atacar el gasto social o en salarios públicos como formas de cargar sobre una parte del pueblo trabajador el efecto inflacionario de la incapacidad empresarial de sostener la inversión sin depresión salarial.

Frente a la disyuntiva planteada por las clases dominantes las alternativas son varias, pero entre ellas se destacan algunas. Primero, atar los beneficios sociales a las negociaciones salariales de manera de evitar su desvalorización. Segundo, poner en discusión el peso del consumo suntuario y su rol improductivo. Tercero, avanzar en el control social de la producción de forma de poner en manos del conjunto del pueblo la información y los instrumentos para la orientación de la inversión y el consumo.

6.3. La Carta Orgánica y la “sintonía gruesa”

*Paula Belloni.**

La promulgación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) amplía los objetivos y funciones del organismo, pretendiendo poner fin a la institucionalización de las ideas neoliberales sobre la autonomía del BCRA vigentes desde 1992.

La reforma realizada a través de la nueva ley extiende los objetivos del BCRA incorporando al antiguo y único objetivo de estabilidad monetaria otros vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. En línea con los nuevos objetivos incorporados, se establecen tres grandes modificaciones en el funcionamiento del Banco Central. Por un lado, se elimina la obligación de mantener una relación entre la base monetaria (dinero y los depósitos de la economía) y las reservas internacionales, estableciendo un nuevo límite a partir del cual las reservas de libre disponibilidad podrán utilizarse; por el otro, se amplían las posibilidades de financiamiento del BCRA al gobierno y, finalmente se dispone que el Banco podrá regular y orientar el crédito fijando las condiciones de los préstamos.

Ante estos hechos, economistas conservadores, apelando a viejos preceptos monetaristas, plantean que la nueva ley permitirá financiar al sector público con emisión monetaria. El resultado que se escondería detrás de la reforma es, para estos economistas, fuertes presiones inflacionarias, por ello surge la necesidad de realizar un severo ajuste y para ello es necesario volver a la “autonomía” del BCRA.

Sin embargo, en un contexto de deterioro del resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que finalizó el año 2011 con un saldo casi nulo de tan sólo US\$ 17 millones) y déficit de la cuenta capital y financiera (que han dado lugar a una caída de las reservas internacionales), de tendencia hacia el déficit fiscal (que ha cerrado el 2011 con un resultado de tan solo \$4.921, un 80,4% inferior al año anterior) y de proximidad a nuevos vencimientos de deuda, la nueva ley forma parte de un conjunto de medidas de política económica que se han venido implementando para frenar la salida de divisas y mantener las necesarias para “sostener” el crecimiento (diversos controles a la compra de dólares y a las importaciones y ciertas trabas para el giro de utilidades al exterior, etc.)

Lo que ha impulsado la tan apresurada reforma de la Carta Orgánica del BCRA es, entonces, el agotamiento de las reservas de libre disponibilidad presente desde fines del 2011 junto a los propios límites estructurales del “modelo”, en particular aquellos que conducen al déficit fiscal y comercial manufacturero, con sus repercusiones en la balanza de pagos.

En este contexto, aun cuando un banco central dependiente del gobierno nacional es importante para recuperar la soberanía de las políticas económicas, cabe preguntarse con qué objetivo desea

* Nota aparecida en marcha.org.ar el 3 de abril de 2012.

aplicar el gobierno argentino esta política monetaria. Si la misma se reduce a que las reservas de libre disponibilidad que surjan de la nueva disposición se orienten al pago de vencimiento de deuda con organismos multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial) y/o para cancelar las deudas contraídas con otros países, como aquellos que se agrupan el Club de París difícilmente se avance en “el desarrollo con inclusión”.

En el mismo sentido, las modificaciones introducidas para regular y reorientar el crédito bajo la nueva ley no son suficientes como para recomponer la inversión productiva de largo plazo como se propone el gobierno, la matriz neoliberal financiera y, en especial, sus repercusiones en el modelo productivo permanecerán vigentes ante la falta de decisión política para reformar la actual Ley 21.526 de Entidades Financieras, creada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar.

En definitiva, la reforma parece atender más a las urgencias coyunturales que a las tensiones estructurales que muestra el neodesarrollismo. Tensiones que parecen requerir de una “sintonía mucho más gruesa”.

VII. Las políticas sociales en debate

7.1. 82% móvil para jubilaciones

Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo

*Mariano Félix.**

En las últimas semanas, el gobierno y parte de la oposición vienen sosteniendo un debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Bandera justa en manos en su mayoría cuestionables, la discusión enfrenta a muchos que rebajaron el 13% a los jubilados y a todo el gasto social en 2001 y a otros que, ahora en el gobierno, dicen que esta reivindicación histórica –un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas– es una medida “irresponsable”.

Historia de un sistema en crisis permanente. En su origen, los sistemas de previsión social (jubilaciones, pensiones) surgieron como respuesta de los propios trabajadores y trabajadoras. Sindicatos, mutuales y otras formas de auto-organización obrera conformaron las primeras “cajas de previsión” en los albores del siglo XX. Con el ascenso del movimiento obrero, en los primeros años del peronismo, el sistema mutó hacia una forma estatal y crecientemente centralizada. En sus inicios, los pagos del sistema fueron financiados por aportes que los propios trabajadores y trabajadoras hacían de sus salarios, más los aportes que los empresarios fueron forzados a realizar por las luchas obreras. Con la estatización de la política de seguridad social, este régimen de financiamiento continuó y poco a poco se consolidó. El 82% móvil para las jubilaciones se estableció como criterio de base en el marco de esta consolidación. Progresivamente, el sistema de seguridad social fue incorporando otros beneficios bajo su órbita, como las asignaciones familiares -para los trabajadores y trabajadoras con empleo formal- y recientemente, los beneficiarios de las asignaciones “universales” por hijo/a (AUH).

Hasta mediados de los años '70, el sistema de previsión funcionó sobre esta base, aunque crecían sus contradicciones. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y con la dictadura de 1976 se profundizó una tendencia de deterioro en los niveles de salarios. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales, provenientes de otros impuestos, para financiar las jubilaciones y pensiones.

En los '90, la creación del sistema de AFJPs, la reducción de los aportes patronales y el elevado empleo en negro aumentaron la presión sobre las finanzas del sistema de previsión social (en cabeza

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 12 de julio de 2010.

del ANSES). La re-estatización total del sistema en 2008 compensó sólo parcialmente el problema; sin embargo permanecen aún hoy vigentes dos cuestiones clave de los noventa: el impacto del empleo en negro (cercano al 40%) y la reducción de los aportes patronales. En los últimos años, la expansión en la base de beneficiarios no contributivos y de la AUH aumentaron las erogaciones sin incorporar nuevas fuentes de financiamiento.

El resultado de este proceso de largo alcance fue que las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios (aún cuando los salarios han caído también fuertemente en estos últimos 35 años). Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio, mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos (equivalentes al 31% del salario promedio: menos de novecientos pesos). Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos ingresos los mantienen al límite de la pobreza.

¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse? La demanda histórica del 82% móvil para las jubilaciones se basa en el criterio de garantizar que el nivel de vida de las personas no se reduzca con el fin de su vida activa en el mercado laboral. En la situación actual, la primera medida para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Si bien históricamente ha estado en crisis financiera, hoy el ANSES tiene superávit cercano a los 10 mil millones de pesos sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. Esos recursos permitirían aumentar un 20% de manera inmediata los beneficios para jubilados y pensionados.

En segundo lugar, la recaudación del ANSES en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. Como mencionamos antes, para 4 de cada 10 trabajadores/as los patrones no realizan aportes a la seguridad social. La inclusión de estos trabajadores y trabajadoras al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso promedio para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja de los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo su aumento para el conjunto de las empresas más grandes, cuyas ganancias en los últimos años han superado ampliamente las que obtuvieron en los noventa.

Sólo estas dos medidas permitirían en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo. Sería un buen primer paso. A partir de allí pueden empezar a pensarse medidas adicionales de recaudación de impuestos y eliminación de subsidios para recomponer los ingresos del sistema de seguridad social y configurarlo como un sistema universal de garantía de ingresos.

En este sentido, un primer paso sería afectar un porcentaje de la recaudación en concepto de retenciones a la seguridad social. Actualmente casi la mitad de los pagos de jubilaciones se realiza con la recaudación de impuestos (IVA, Ganancias, Impuestos personales y al cheque, entre otros), pero las retenciones a las exportaciones (que representan un ingreso de 33 mil millones de pesos) no se utilizan con este fin. Si, por ejemplo, se destinara un 25% de estos ingresos a financiar los aumentos de las jubilaciones mínimas se lograría cubrir el 82% móvil para la mitad de los jubilados.

Además, podrían empezarse a imponer retenciones a las exportaciones mineras, incrementar las alícuotas del impuesto a las ganancias de las grandes empresas y grandes propietarios, la reimposición del impuesto a la herencia y a las ganancias financieras y el ajuste progresivo en los impuestos a la propiedad inmobiliaria.

El problema de la seguridad social hoy no es –como señalan los sectores más conservadores- que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni –como sostiene el kirchnerismo– la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.

7.2. La barrera neoliberal

*Emiliano López y Lisandro Fernández.**

Desde la crisis de la convertibilidad, la economía argentina ha mostrado una senda de crecimiento económico sostenido. La crisis de las economías del centro no parece haber impactado significativamente en la evolución del producto. La devaluación del peso y el tipo de cambio competitivo –que implicaron la redistribución de ingresos a favor del capital– pusieron fin a los años de recesión dando comienzo a un ciclo de valorización del capital exitoso. Un crecimiento acumulado el PBI del 68% desde 2002 hasta el cuarto trimestre de 2009, una balanza comercial superavitaria y la fortaleza de las cuentas fiscales son algunas de las características de la nueva modalidad de desarrollo capitalista en Argentina. La pregunta que se nos plantea aquí es cuáles han sido los efectos de este nuevo escenario macroeconómico sobre los niveles de empleo y si es suficiente con el crecimiento económico para mejorar la inclusión social.

En primer lugar, el nivel de empleo creció entre 2002-2008 un 25%. Si comparamos los períodos de expansión de la convertibilidad y de la posconvertibilidad, es claro que el incremento del empleo total luego durante esta última es sustancialmente superior. Entre 1995 y 1998 –período de mayor crecimiento de los noventa– el aumento del número de trabajadores empleados no superó el 10%. No obstante, el crecimiento económico no asegura por sí solo creación suficiente de puestos de trabajo. El aumento del empleo asalariado en relación con el incremento del PBI se hizo cada vez menor entre 2003-2009. Así, las tasas de desempleo no lograron reducirse por debajo del 8% de la población trabajadora.

Si nos quedamos con las variables macroeconómicas, olvidamos que el modelo actual presenta características que arrastra de la década pasada y que reflejan importantes barreras a la solución de fondo a los problemas estructurales del desarrollo del país. Los recortes a las contribuciones patronales que redujeron el costo salarial –sobre todo para el gran capital– y la flexibilización laboral que introdujo la informalidad y precarización del empleo a través de la tercerización, subcontratación del personal o la deslocalización de tareas, continúan operando en la realidad más de allá las reformas de la legislación laboral implementadas por el Estado desde 2003.

La precariedad e informalidad laboral se han impuesto como un rasgo distintivo del proceso de acumulación en la economía argentina y constituyen una estrategia del gran capital para abaratar el costo laboral, lo cual permite mejorar su competitividad. Datos recientes indican que, si bien el “empleo en negro” viene descendiendo desde el pico de 2002, todavía tenemos niveles similares a los de la década pasada. Hacia fines de 2009 el 36% de los asalariados no poseía descuento jubilatorio. Estos números resultan más preocupantes si consideramos únicamente los trabajadores

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 26 de julio de 2010.

del sector privado: un 45% se encuentra hoy en esta condición de contratación precaria. Por supuesto, esta situación tiene impactos a nivel de los ingresos de los trabajadores. Aun reconociendo el avance que significa la reapertura de las paritarias y negociaciones colectivas, las diferencias salariales entre trabajadores formales, no formales y del sector público son significativas.

En efecto, los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 12% encima del nivel de 2001 y este crecimiento es superior a los incrementos que recibieron los trabajadores no registrados y los del sector público, cuyos aumentos fueron inferiores en 16 y 36%, respectivamente.

La virtuosa dinámica del producto y sus impactos sobre el empleo no han logrado revertir la precariedad e informalidad laboral que parecen estar asociadas a la reestructuración capitalista de la economía argentina que vino de la mano del programa neoliberal. Este proceso de reestructuración de actividades productivas –con preponderancia de las industrias extractivas y primarias– y fuertemente marcado por la influencia de los grandes capitales transnacionales, no se ha modificado sustancialmente y es aquí donde deben buscarse las explicaciones de los altos niveles de precariedad laboral, como así también de los límites cíclicos del crecimiento del empleo.

Por supuesto, estos problemas no constituyen límites infranqueables para el accionar estatal. El Estado debe avanzar en modificar este patrón de acumulación, que implica más que el reconocimiento de ingresos universales mínimos –en línea con el Banco Mundial– para los excluidos del empleo formal que no permiten traspasar la barrera de una modalidad de desarrollo capitalista excluyente. En definitiva, las reformas estructurales del neoliberalismo parecen duraderas y es allí donde radican las barreras y los límites de la integración social a través del empleo.

7.3. Desigualdades de género en el mercado de trabajo argentino

*Pablo Ernesto Pérez**

La reciente sanción en Diputados del proyecto que tiende a equiparar los derechos de quienes trabajan en casas de familia –casi exclusivamente mujeres– con los que establece la Ley de Contrato de Trabajo nos invita a discutir la situación más general de las mujeres en el mercado de trabajo. La abundante producción académica de los últimos años permite conocer que las desigualdades entre varones y mujeres en el ámbito laboral se manifiestan mediante distintas oportunidades de acceso al mercado de trabajo, diferentes posibilidades de obtener un empleo remunerado y desiguales condiciones laborales.

En todos estos aspectos, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja respecto de los varones. Primero, debido a las obligaciones familiares –socialmente impuestas– tienen mayores dificultades para buscar un empleo. Segundo, aun cuando no tengan limitaciones para buscar un empleo, sus posibilidades de obtenerlo son menores. Tercero, cuando obtienen un empleo, la calidad suele ser menor a la de un varón con similares calificaciones. Así, la presencia femenina es amplia en puestos en la base de la escala jerárquica –lo que se denomina “piso pegajoso”– caracterizados por su precariedad, menor remuneración, bajos requerimientos educativos y escasas posibilidades de movilidad. A su vez, pocas pueden acceder a empleos de altos niveles jerárquicos, fenómeno denominado “techo de cristal”, pues simboliza las barreras invisibles que les imposibilitan acceder a cargos directivos. Esta situación de discriminación hacia las mujeres en el mercado de trabajo tiene su correlato en las coberturas sociales: solo contarán con una obra social en caso de haber accedido a un empleo remunerado formal o en tanto esposa o hija de un trabajador en estas condiciones.

El análisis empírico referente a la inserción laboral de las mujeres durante los últimos años nos muestra una situación de ambigüedad. Por un lado, se destaca una mejoría en algunos indicadores relativos a esa inserción y avances hacia una igualdad de géneros en el plano jurídico-legal. Pero, en la práctica, persisten los mecanismos que tienden hacia una reproducción de las desigualdades y continúa siendo importante el rol de los estereotipos de género que tienden a desvalorizar a la mujer como trabajadora. Esta ambigüedad también se evidencia en el espacio de las políticas públicas, que si bien suelen manifestar la igualdad de géneros y contemplar los derechos de las mujeres, proponen políticas familiares que las circunscriben a un rol de cuidadora de la familia.

Parte de las desigualdades se explica por la discriminación que realizan las empresas –en base a los estereotipos mencionados– al momento de la contratación. Así se construyen mitos –sin un fuerte

* Nota publicada originalmente en el diario Página 12 el 11/04/2011, con el título “Todavía lejos de la equidad”.

correlato empírico— tales como los que asocian a las mujeres a un mayor costo laboral (por las licencias por maternidad), mayor ausentismo (vinculado con el cuidado de los hijos o familiares) o menor flexibilidad para cambiar turnos.

No obstante, muchas desigualdades no se originan en el mercado de trabajo sino en otros espacios de la vida social y, por lo tanto, preexisten al momento de la inserción laboral. La socialización diferencial que tienen varones y mujeres delinea la visión que tienen de sí mismos, de sus posibilidades de acceder al mundo del trabajo, de qué tipo de empleos pueden incluir dentro de sus expectativas y cuáles son inalcanzables. Existe una división sexual del trabajo que conduce a que mientras los jóvenes se preparan para ejercer un trabajo productivo, gran parte de las jóvenes son educadas para asumir el trabajo doméstico o de la reproducción.

Muchas mujeres —casi sin excepción, aquellas con menores credenciales educativas— obtienen trabajos signados por la precariedad en sus múltiples dimensiones: inestabilidad laboral, no registro, bajos salarios, jornada parcial, etc. En parte, esta cuestión es explicada por la doble jornada a la que están socialmente obligadas, el trabajo reproductivo en el hogar y el productivo en el mercado laboral. Aunque algunos varones se han involucrado en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, la responsabilidad por las tareas reproductivas sigue recayendo en las mujeres. Así, la inflexibilidad de la división del trabajo doméstico frena la igualdad de géneros en el acceso al mercado laboral. A su vez, la ausencia de una política del Estado destinada al cuidado infantil condiciona la actividad laboral de las mujeres, principalmente la de quienes más lo necesitan, las de menores recursos.

La persistencia de patrones socioculturales que reproducen las dualidades señaladas refuerzan la continuidad de las desigualdades entre varones y mujeres en el mercado de trabajo. Modificar estas estructuras de género es un primer paso para favorecer una sociedad más equitativa.

7.4. Argentina te precariza con la ayuda del Estado

*Mariano Feliz.**

El mercado de trabajo no opera aislado de la modalidad de producción social dominante. Una economía capitalista periférica, dependiente y regionalmente subordinada, como la Argentina, conforma un mercado laboral precarizado. Así la búsqueda de competitividad se centra en la super-explotación de los trabajadores y trabajadoras.

Esto se manifiesta en modalidades de precarización del empleo que permiten bajar costos (laborales) de producción gracias a la flexibilización del trabajo, a la extensión de las jornadas laborales y a la eliminación de beneficios sociales por medio de formas precarias de contratación. Esas formas –que debilitan la posición de los trabajadores- permiten explicar que la mayoría de las familias trabajadoras tengan ingresos menores a la canasta familiar (de 4.700 pesos, pues el 50% de los ocupados reciben ingresos menores a 1.500 pesos), que la desigualdad de ingresos permanezca elevada (los ingresos individuales promedio del 10% más rico son 26 veces mayores que los del 10% más pobre de la población) y que las jornadas de trabajo superen ampliamente las 9 hs diarias para la mayoría.

Este mecanismo –como medio primordial para competir y sobrevivir– es utilizado por las PyMES, perjudicadas por la política de competitividad a cualquier costo. En ellas el trabajo “en negro” (la forma más evidente de la precarización pero no la única) supera el 68% de los empleados.

También las grandes empresas hacen uso de la precarización laboral pero como forma de obtener ganancias extras. Muchas veces emplean trabajadores “en negro” pero también contratan trabajadores de manera precaria a través de empresas tercerizadas, falsas cooperativas o sub-contratistas. Estas últimas aparecen como trabajando “para” las grandes firmas cuando en realidad son formas de ocultar una relación de subordinación real (una relación laboral disfrazada como una relación comercial de empresas). Esto queda claro cuando se aprecia que en general esas sub-contratistas sólo “trabajan” para una gran empresa realizando tareas que antes hacían trabajadores de planta de la misma (limpieza, mantenimiento, etc.). Más del 18% de los asalariados en grandes empresas están “en negro”, situación que persiste aun cuando sus niveles de rentabilidad son los más altos en dos décadas.

Los trabajadores precarizados no sólo trabajan en pobres condiciones sino que son los más golpeados en la crisis. Están primeros en la fila para ser despedidos o suspendidos, cuando las empresas deciden bajar salarios o cuando se rescinden los contratos con las empresas tercerizadas. Además, los programas estatales anti-crisis (como el REPRO) no los toman en cuenta.

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 4 de enero de 2010 en forma reducida y con el título “Un fenómeno político”.

De lo dicho pareciera que la precarización del empleo es un fenómeno “económico”. Sin embargo, es un fenómeno profundamente político. El propio Estado actúa como principal promotor de la precarización, reproduciéndola en todos sus niveles. En lugar de “empezar por casa”, el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene numerosos trabajadores precarizados en cooperativas de limpieza o asalariados contratados bajo la forma de contratos de locación de obra que ocultan una relación laboral permanente. El propio CONICET (en el que muchos estudian las relaciones laborales y condiciones de trabajo) contrata personal bajo la modalidad de “planta temporaria” para realizar tareas de carácter permanente o “becarios” a los cuales no se reconoce como empleados, violentando el derecho laboral.

A nivel provincial, como en Buenos Aires, la precarización está extendida en todo el Estado bajo la forma de becas, contratos y otras modalidades que no reconocen la relación de dependencia de hecho existente. Los municipios en todo el país usan contratos que se renuevan cada 3 meses o “cooperativas de trabajo” para la realización de tareas permanentes del gobierno local (como el cuidado de plazas) evadiendo de manera flagrante y a los ojos de todos la legislación del trabajo. Por ej., en la capital de la pcia. de Buenos Aires, La Plata, cerca del 80% de los trabajadores del municipio están precarizados. La propia Justicia usa y abusa de las figuras del “meritorio”, haciendo letra muerta de los derechos consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cerca de 12% de los trabajadores en todos los niveles del Estado en el conjunto del país son contratados como pasantes, becarios, a prueba o formas similares; en el sector privado llegan a 16%.

De esta manera, la combinación de una modalidad de capitalismo periférico –que no crea pero exagera las peores tendencias del capitalismo en la actualidad– con un Estado que (por acción u omisión) multiplica la precarización laboral nos enfrenta a una disyuntiva. Quedarse en el discurso de la lucha contra la precarización (por ej., la campaña publicitaria estatal de Don Carlos “Tudu Bon, Tudu Legal”) o avanzar contra la precarización laboral en el Estado y atacar simultáneamente las fuentes estructurales de la misma: una inserción internacional capitalista periférica y dependiente.

7.5. La situación ocupacional de los jóvenes en la Argentina. Condición de actividad de los jóvenes urbanos

*Pablo Ernesto Pérez**

Pese a las considerables mejoras en la situación ocupacional, la situación de los jóvenes continúa siendo una de las más vulnerables frente a la desocupación. A comienzos de 2007, la tasa de desempleo de los jóvenes excede el doble de la tasa general y supera 3 veces la correspondiente a los trabajadores adultos (cf. cuadro 1).

Cuadro 1. Condición de actividad de jóvenes y adultos. Primer trimestre 2007.

	Actividad	Empleo	Desocupación
15-24 años	46,70%	35,60%	23,90%
25-59 años	78,90%	73,40%	6,90%
Total	46,30%	41,70%	9,80%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares.

Estas diferencias entre grupos etarios son aún mayores que las correspondientes al período previo a la crisis, caracterizado por un elevado desempleo. La explicación radica en que cuando el desempleo es masivo alcanza a todos los grupos de edad (achicando las diferencias), mientras que cuando desciende se destacan en mayor medida las dificultades de los jóvenes. Por su parte, las tasas de actividad y empleo son considerablemente menores que las correspondientes a sus colegas adultos, esencialmente debido a que gran parte de los jóvenes aún se encuentran en el sistema educativo y no buscan trabajar.

Claramente, no todos los jóvenes poseen iguales oportunidades de acceso al mercado de trabajo. La situación es heterogénea para diferentes grupos de jóvenes. En primer lugar es central distinguir entre jóvenes que son jefes de hogar de aquellos que no lo son. Las tasas de actividad (70.2%) y de empleo (59.7%) de los jóvenes jefes de hogar son considerablemente mayores que para el promedio de los jóvenes (ver cuadro 1) mientras que la correspondiente a la desocupación es significativamente menor (15%).

* Artículo publicado en "Calificaciones y Empleo", n° 59, septiembre 2008.

Su condición misma de jefes, de ser el principal receptor de ingresos del hogar, los obliga a maximizar su participación y reducir su tiempo de búsqueda de un empleo. De esta manera, los mayores problemas del desempleo parece circunscribirse a aquellos jóvenes que viven con sus padres, no a los que son jefes de hogar. Sin embargo, la proporción de jóvenes jefes de hogar es mínima, ronda el 6% del total de jóvenes para el periodo post crisis, por lo cual se generaliza la situación de los “no jefes”.

Este mayor desempleo de los jóvenes que no son jefes de hogar parece vincularse al hecho de que al vivir en un hogar en el cual no son la principal fuente de ingresos, la presión por conseguir un empleo es menor, de manera que tienen mayores posibilidades de buscar un empleo que mejor satisfaga sus expectativas.

También encontramos fuertes contrastes según el sexo. Las mujeres jóvenes se encuentran doblemente condicionadas –por ser jóvenes y mujeres– y representan el grupo social con mayor exposición al desempleo.

A las desventajas particulares asociadas al hecho de ser jóvenes, su condición de mujeres genera que los empleadores las releguen en su búsqueda de trabajadores argumentando que los embarazos y la crianza de los hijos aumenta el ausentismo (dado que la mayor parte de las “obligaciones domésticas” vinculadas a los hijos recaen sobre ellas) y eleva su costo de contratación en relación a los varones. Esta situación de discriminación deriva en que las mujeres jóvenes presenten menores tasas de actividad y empleo respecto de los varones. Respecto a la tasa de actividad, las diferencias de género también deben buscarse en la división sexual del trabajo, que conduce a que mientras los jóvenes se preparan para ejercer un trabajo productivo, gran parte de las jóvenes son educadas para asumir el trabajo doméstico o de la reproducción.

De forma similar, diferentes grupos de edad –usualmente se diferencia entre adolescentes (15-19 años) y jóvenes plenos (20-24)– presentan comportamientos disímiles, esencialmente relacionado al hecho que mientras los primeros asisten mayoritariamente al sistema educativo (con escasas tasas de actividad), los segundos ya participan intensamente en el mercado de trabajo. Igualmente, aquellos adolescentes que sí participan en el mercado de trabajo tienen menores posibilidades de conseguir un empleo, tal como lo acredita la mayor tasa de desocupación relativa (cf. cuadro 2).

Cuadro 2. Condición de actividad de jóvenes urbanos de acuerdo a posición en el hogar, sexo y edad.

Total de aglomerados urbanos. Primer trimestre 2007.

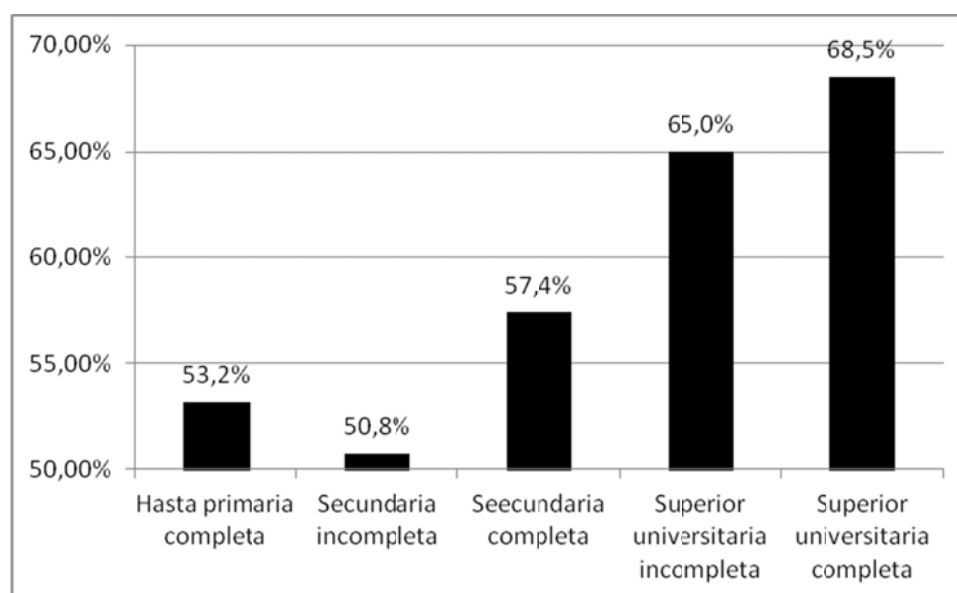
	Actividad	Empleo	Desocupación
Jefes de hogar	70,2%	59,7%	15,0%
No jefes	45,2%	34,0%	24,8%
Varones	54,9%	44,2%	19,6%
Mujeres	38,7%	27,2%	29,9%
15-19 años	28,6%	20,1%	29,8%
20-24 años	65,5%	51,6%	21,2%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares.

Detrás de la diferencia de edad se encuentran diferencias en credenciales educativas obtenidas y en la experiencia laboral que tienen los jóvenes. No tiene las mismas posibilidades un joven de 15 años, que aún no tiene edad para finalizar el colegio secundario y “debuta” en la búsqueda de un empleo y un joven de 24, quien potencialmente podría haber terminado la universidad y puede tener, además, una rica experiencia laboral previa.

El nivel de instrucción se destaca como una variable explicativa fundamental de las posibilidades de inserción de los jóvenes. Aunque a nivel agregado los mayores niveles de educación que presentan los jóvenes (respecto de los adultos) no parecieran garantizarles mejores perspectivas de inserción laboral, a nivel individual mayores niveles de educación están asociados a una mayor probabilidad de obtener un empleo (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Tasa de empleo de jóvenes que ya no asisten al sistema educativo según nivel de instrucción formal. Año 2007.



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares.

No obstante este hecho, es posible preguntarse ¿Qué determina el nivel educativo del joven? ¿Se trata de una elección costo-beneficio en función de sus futuros salarios o probabilidades de inserción? ¿Cada joven realmente “elige” hasta qué momento permanecer en el sistema educativo? ¿O su situación frente a la educación está condicionada por su origen social, por la posición que ocupa su hogar dentro de la estructura social? De ser así, ¿Bastaría analizar el nivel educativo alcanzado por los jóvenes? ¿O el origen social se exterioriza como una variable explicativa independiente del nivel educativo? Veamos.

El sistema educativo y el origen social de los jóvenes como condicionantes de sus posibilidades de inserción

Un primer análisis nos permite advertir que a medida que aumentan los ingresos del hogar las tasas de empleo de los jóvenes aumentan mientras que las de desocupación disminuyen¹.

La desocupación de jóvenes que habitan hogares de bajos ingresos es 2.75 veces superior a la correspondiente a jóvenes que habitan hogares de ingresos elevados (cf. cuadro 3).

Cuadro 3. Condición de actividad de jóvenes según estrato de ingresos (per cápita familiar).

Total de aglomerados urbanos. Primer trimestre 2007.

	Actividad	Empleo	Desocupación
Estrato bajo (deciles 1 a 4)	42,0%	30,0%	28,6%
Estrato medio (deciles 5 a 8)	51,4%	41,3%	19,8%
Estrato alto (deciles 9 y 10)	48,3%	43,3%	10,4%
General	46,7%	35,6%	23,9%

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

Respecto de la tasa de participación (actividad), la misma presenta valores máximos para los jóvenes que habitan hogares de ingresos medios. Los jóvenes pertenecientes a hogares de bajos ingresos presentan una menor actividad debido a que gran parte de ellos se encuentran desalentados, es decir que cansados de buscar trabajo y no encontrarlo, desistirían de participar en el mercado de trabajo pasando a formar parte de la población inactiva. En el caso de los jóvenes pertenecientes a hogares de mayores ingresos, la tasa de actividad decae debido a que gran parte de ellos se encuentran en el sistema educativo y no están por el momento interesados en buscar un empleo.

El origen social suele afectar al menos de dos formas las posibilidades de los jóvenes de acceder a un puesto de trabajo. Primero, a igual nivel de formación, no todos los jóvenes acceden a iguales posiciones en el mercado de trabajo, dado que las posibilidades de aquellos de origen social humilde de valorizar su formación son menores que las de jóvenes de origen social más acaudalado. No obstante, según Eckert (2002), es antes de la entrada en la vida activa, cuando se juega la entrada a los diferentes niveles de formación, que el origen social interviene más contundentemente y produce las mayores desigualdades.

En Argentina, la masificación del nivel medio acontecida en los noventa produjo el ingreso de jóvenes que tradicionalmente estaban excluidos, hijos de los grupos sociales subordinados, que ante una oferta de educación escolar tradicional, mostraron dificultades de integración en las instituciones,

¹ Otros autores eligen como indicadores de "origen social" variables que señalan el nivel cultural del hogar (nivel educativo del jefe de hogar, o del jefe y conyugue) en lugar de variables socioeconómicas asociadas al nivel de vida como las elegidas en el presente texto. No obstante, ambos indicadores se hallan fuertemente correlacionados y suelen combinarse para influenciar sobre el desempeño escolar de los jóvenes.

fracaso escolar, deserción, y una “ausencia de sentido de la experiencia escolar”, producto de la confrontación de dos culturas, la de los jóvenes y la que es propia de la tradición escolar (Tenti Fanfani, 2000).

Si consideramos el nivel educativo alcanzado por los jóvenes al momento de abandonar el sistema escolar, diferenciado según el nivel de ingresos del hogar, corroboramos que los jóvenes de clases sociales bajas no tienen las mismas posibilidades de acceder y permanecer en el sistema educativo que los jóvenes provenientes de familias de mayores ingresos.

Entre seis y siete de cada diez jóvenes de bajos ingresos abandonan el sistema educativo antes de completar el colegio secundario, mientras que dicho porcentaje disminuye al 23.5% para aquellos jóvenes que habitan hogares con ingresos elevados. El deterioro de los ingresos de los hogares, en muchos casos producto del desempleo del jefe de hogar, obliga a adelantar la salida del joven al mercado de trabajo -aun antes de completar su formación- y modifica también los roles al interior del hogar, al transformar el ingreso del joven en parte sustancial del ingresos de la familia (cf. cuadro 4).

Cuadro 4. Nivel de instrucción formal de los jóvenes a la salida del sistema educativo según estrato de ingresos per cápita familiar¹. Primer trimestre 2007.

	Hasta secundario incompleto	Estudios secundarios completos	Alcanza estudios universitarios
Estrato bajo (deciles 1 a 4)	65,4%	29,9%	4,6%
Estrato medio (deciles 5 a 8)	36,8%	47,0%	15,9%
Estrato alto (deciles 9 y 10)	23,5%	42,4%	34,1%
General	51,7%	37,9%	10,2%

1. Se incluyeron sólo aquellos jóvenes de entre 15 y 24 años que ya no asisten al sistema educativo.

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

Este análisis nos lleva a avalar la postura que señala que lo que la escuela tiende a señalar como desigual capacidad intelectual o interés frente al conocimiento, son en realidad consecuencias de las asimetrías sociales (Sidicaro, 2003).

Posibilidades de valorizar la educación

Al analizar la condición de actividad para los jóvenes que han completado el nivel secundario –es el nivel que usualmente demandan los empleadores para prácticamente cualquier empleo– se destaca que las diferencias por estrato de ingresos familiares persisten aun considerando jóvenes

con el mismo nivel de instrucción formal. Mientras las tasas de actividad y empleo aumentan con el nivel de ingresos del hogar, la de desocupación disminuye considerablemente. La desocupación de jóvenes que viven en hogares de bajos ingresos es seis veces mayor a la de los jóvenes del estrato alto de ingresos, mientras que la tasa de empleo es prácticamente la mitad (cf. cuadro 5).

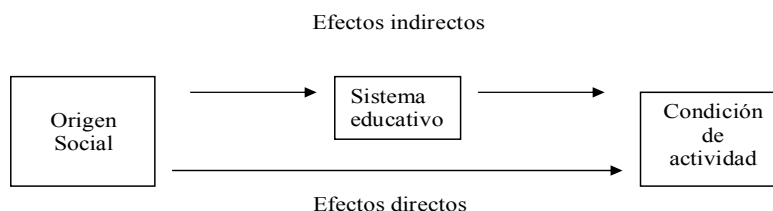
Cuadro 5. Condición de actividad de jóvenes con nivel secundario completo.
Total de aglomerados urbanos. Primer trimestre 2007.

	Actividad	Empleo	Desocupación
Estrato bajo (deciles 1 a 4)	63,7%	45,4%	28,8%
Estrato medio (deciles 5 a 8)	80,8%	68,1%	15,7%
Estrato alto (deciles 9 y 10)	91,2%	87,0%	4,6%
General	73,4%	57,4%	21,8%

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

Estas diferencias nos permiten comprobar que el origen social tiene efectos directos e indirectos sobre la condición de actividad del joven. Los indirectos se manifestarían por intermedio de la posibilidad de acceder a la educación, ya que, como vimos, si bien formalmente todos los jóvenes pueden acceder a ella, en la práctica existen marcadas diferencias según el origen social del joven. A su vez, el hecho de acceder a diferentes instancias educativas, ya sea por los conocimientos adquiridos o por el diploma acreditado, otorga mayores posibilidades de obtener un empleo. Los directos pueden recuperarse del cuadro anterior, donde se aprecia que a igual nivel educativo, jóvenes de diferente origen social tienen diferentes tasas de empleo y desocupación, expresando así diferentes posibilidades de valorizar sus diplomas (ver gráfico 2).

Gráfico 2.



¿Qué variables pueden explicar estos efectos directos? Podrían ser importantes el lugar de residencia, la discriminación por parte de los empleadores, y las relaciones sociales (amistades, parientes, vecinos, contactos en general) de los jóvenes y las de su familia, las cuales les permitirían

“valorizar” la educación que han adquirido². El análisis de estas últimas y su relación con la posibilidad de buscar y encontrar un empleo son temas pendientes que serán abordados en futuras investigaciones.

Reflexiones finales

El ciclo económico expansivo contribuyó a mejorar los indicadores laborales y sociales. La continuidad en el tiempo de este proceso revela la existencia de problemas en el mercado de trabajo que trascienden las derivadas de variaciones en el nivel de actividad económica.

De esta manera, se develan grupos sociales que presentan realidades laborales particularmente adversas, entre ellos se destaca los jóvenes. Al hablar de los jóvenes nos referimos a un grupo poblacional marcadamente heterogéneo. Una parte de ellos, aquellos con mayor cantidad y calidad de credenciales educativas, probablemente no tenga problemas significativos para insertarse laboralmente, mientras que contrariamente, quienes abandonaron prematuramente el sistema educativo van a mostrar mayores dificultades para obtener un empleo.

La educación es central para determinar las posibilidades de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Sin embargo, mirando un poco más atrás se percibe que no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de ingresar y permanecer en el sistema educativo. Los jóvenes que viven en hogares de bajos ingresos tienen la necesidad de participar más tempranamente en el mercado de trabajo, lo que los obliga a abandonar el sistema educativo prematuramente y dadas sus escasas credenciales educativas los puestos que consiguen son forzosamente de baja calidad. De esta manera, entendemos que el origen social es una variable trascendental para definir las chances de acceder a la educación y consecuentemente al mercado de trabajo.

Bibliografía:

- Sidicaro, R. (2003). La sociología según Pierre Bourdieu. En *Los herederos: Los estudiantes y la cultura*. Bourdieu, P. y Passeron, J.C. Siglo XXI editores, Argentina.
- Tenti Fanfani, E. (2000). Prólogo a *La experiencia escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en la escuela media en Buenos Aires* (G. Kessler). IIFE-UNESCO.
- Eckert, H. (2002). La place des jeunes entre mobilité et reproduction sociales. En *Quand les jeunes entrent dans l'emploi* (M.Arliaud et H.Eckert coord.). Ed. La Dispute.

² Otra variable central es la calidad de la educación recibida, o la señal (buena o mala reputación) emitida por el establecimiento al cual concurrió el/la joven. De esta manera puede ser que dos jóvenes con igual credencial educativa presenten importantes diferencias en cuanto a sus capacidades, destreza, habilidades, no captadas por el diploma.

7.6. La Asignación Universal por Hijo como derecho (primera parte).

El carácter permanente de las demandas populares

*Facundo Barrera.**

A fines del año 2009, el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), respondiendo a una demanda impulsada por diversos sectores de la sociedad, desde hace más de una década. El consenso acerca de los resultados positivos de la medida, impone la necesidad de discutir su consagración como derecho, más allá de los gobiernos por venir. El presente artículo se dividirá en dos partes, en primer lugar nos proponemos evaluar críticamente los fundamentos que existen detrás de la Asignación. En la segunda parte, debatiremos cuestiones específicas de su implementación, de cara a su sostenimiento en el tiempo.

El Decreto que promulgó la AUH, sostiene que la solución estructural de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de “trabajo decente”. De esta manera, la Asignación se entiende como una medida temporaria, hasta tanto tasas sostenidas de crecimiento resuelvan de manera concluyente las condiciones de pobreza y precariedad en la que vive buena parte de la sociedad. En definitiva, se vuelve necesario discutir los postulados que existen detrás de la implementación de la medida, los cuales precisan un determinado funcionamiento del mercado de trabajo en particular, y de la economía en general.

La economía política de la asignación por hijo

La lectura keynesiana del funcionamiento económico (afín al diagnóstico gubernamental), sostiene la existencia de un problema de demanda efectiva insuficiente, es decir, insuficientes niveles de consumo e inversión pública o privada, y/o exportaciones, implican exiguas oportunidades de empleo y, a su vez, generación de empleos de baja calidad.

Siguiendo esta línea argumental, la actual política económica se serviría de un equilibrio macroeconómico orientado básicamente a la resolución del problema del desempleo: un tipo de cambio real elevado y estable permitiría aumentar la inversión y el empleo en las actividades comercializables internacionalmente (transables), lo cual mejoraría la distribución del ingreso y disminuiría los niveles de pobreza. De esta manera, la ampliación de la demanda de trabajo de la

* Nota aparecida el 28 de diciembre de 2009 en el diario Página/12.

economía (reducción del desempleo), implicaría iniciar una trayectoria con “trabajo decente”, es decir, empleos registrados y bien remunerados.

La pregunta que aquí se plantea tiene que ver con los plazos necesarios para que se produzca este proceso auspicioso del devenir económico. Habiendo transitado el proceso de valorización del capital más exitoso de la historia económica reciente (2003-2008), con tasas de crecimiento promedio del producto mayores al 8% anual, ¿cómo se entienden los sostenidos niveles de desocupación y subocupación que mantienen al 20% de la población económicamente activa con problemas laborales? ¿Cuándo podrán resolverse las condiciones de desprotección, inseguridad y abuso con las que convive uno de cada dos trabajadores producto de su ocupación informal? En definitiva, nos cuestionamos cuáles son los niveles de crecimiento necesarios, y durante cuánto tiempo, para que se cumpla el mencionado postulado gubernamental.

A nuestro entender, la imposibilidad parte de las características productivas de la economía capitalista periférica. En una economía dominada por el capital, tanto la dinámica del empleo de la fuerza de trabajo como las condiciones de contratación estarán ligadas a su “deber ser”: la generación de un excedente económico (plusvalor) por medio de la apropiación privada de una porción del valor socialmente creado.

En la etapa de auge del ciclo económico, el incremento del capital implicará aumentos en el empleo (masa de trabajo vivo) aplicado al proceso de producción. A medida que el trabajo se vuelve escaso, se hace cada vez más difícil extraer plusvalor a los trabajadores/as. Por tanto, el ritmo de crecimiento del producto y del empleo caerá, mientras que mediante tendencias opuestas como incrementos en la productividad de la fuerza de trabajo, precarización laboral e incluso despidos de trabajadores/as, se restablecerá una relación “adecuada” entre el capital y la población relativamente sobrante.

En consecuencia, el desempleo y la precarización de la vida -ampliada sustancialmente durante la década pasada y estructuralmente presente en la actualidad-, son funcionales al proceso de acumulación ya que actúan como instrumentos disciplinadores de la fuerza de trabajo, claves en la generación de plusvalor y, por tanto, ganancia.

El capitalismo, sin embargo, da lugar a una serie de tendencias antagónicas. Aunque las clases dominantes busquen aumentar los niveles de explotación hasta sus límites históricos y sociales, las clases subalternas resistirán esos intentos al punto de dar pelea contra las condiciones sociales que hacen necesaria esa lucha. La pugna por una asignación universal de carácter permanente, consagrada como derecho, se inscribirá como una reivindicación más de los sectores populares organizados, en el marco de un objetivo más amplio que involucra la recomposición de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

7.7. La Asignación Universal por Hijo como derecho (segunda parte).

Defenderla para transformarla

*Facundo Barrera.**

Un primer elemento para debatir es el carácter “universal” de la medida. Nos parece relevante dejar claro que aunque es un plan de amplia cobertura, identifica una población “objetivo”, es decir, hace un recorte donde estarán en condiciones de recibir el subsidio los hijos de desocupados, trabajadores informales que cobren menos del salario mínimo, vital y móvil (que en la actualidad es de \$1.500) y monotributistas sociales. Los planes sociales focalizados se multiplicaron durante la década de los noventa, ya que forman parte del cuerpo teórico de la teoría neoliberal donde los perdedores del modelo económico deben ser socorridos a partir de la política social, quedando (la mayor parte de las veces) al margen de las consideraciones de la política económica. Entendemos que esta es una tendencia a revertir para aspirar a la consolidación de la AUH como un derecho de todos los niños y niñas menores de 18 años más allá del sector social al que pertenezcan y dejar de entenderla como un auxilio para los sectores sociales excluidos.

Muchas veces la discusión de la universalización viene atada al “congelamiento” de la distribución del ingreso y a la problemática fiscal. En primer lugar, es el sistema tributario (claramente regresivo) el que debe entrar en la discusión de la desigualdad del ingreso, por sus posibilidades para corregirla y por ser un elemento primordial para discutir la problemática fiscal. Los economistas que señalan que una asignación universal significa congelar la distribución del ingreso están haciendo una omisión no menor: dejan fuera del análisis que en el cobro de los impuestos destinados a financiarla pagan relativamente más los que menos tienen. Si, por ejemplo, se pensara en afectar un impuesto de carácter progresivo al pago de la asignación, entonces se obtendría una mejora neta en la distribución del ingreso.

En segundo lugar, no se ha dicho todo acerca del costo fiscal de la AUH. El gobierno afectó originalmente \$9.965 millones de pesos al financiamiento del plan. Sin embargo, un requisito no menor para acceder al mismo, es no cobrar otro plan social. Si analizamos exclusivamente los planes de empleo (Plan Jefes y Jefas de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo, y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, entre otros) encontramos resultados concluyentes. En octubre del año pasado, existían 1.056.866 planes de empleo; a partir de allí se da una importante y veloz reducción, al punto que en marzo pasado sólo quedaban 556.642 (según datos del Ministerio de Trabajo). Esta caída implica un ahorro para el Estado estimado en \$3.000 millones (de acuerdo a la Consultora SEL), es

* Nota aparecida el 5 de julio de 2010 en prensadefrente.org.

decir, una tercera parte de lo previsto para la medida. Por lo tanto, el reemplazo de planes que poseen un monto de beneficio menor por la AUH, implicaría nuevas posibilidades para garantizar la real universalización.

En tercer lugar, la Asignación ha visto reducido su efecto positivo a medida que la inflación ha disminuido el poder de consumo de la misma. No es noticia el incremento de precios en nuestro país y tampoco es menos conocido que el impacto se da fuertemente sobre alimentos. Si suponemos que el consumo adicional de los sectores populares producto de la asignación, mayoritariamente recae en este rubro, encontramos que la desvalorización (a octubre de este año) será probablemente superior al 30%. Es decir, en los próximos tres meses, ya no se podrá consumir una tercera parte de lo que se compraba adicionalmente al comienzo del plan.

Esta problemática requiere, nuevamente, una doble discusión. Por un lado, consideramos que deben instrumentarse métodos automáticos de actualización del poder adquisitivo que eviten el carácter discrecional. En la actualidad, es el Poder Ejecutivo Nacional quien tiene la potestad de actualizar el monto de la AUH y por lo tanto, seguirá los vaivenes del ciclo electoral. Una reglamentación del decreto que establezca la actualización de la AUH mediante un índice que contemple la inflación en alimentos, permitiría dar un paso más hacia su institucionalización y, por tanto, su consagración como derecho. Por otro lado, el monto a actualizar debe partir como mínimo de la mejora adicional que implicó la medida: no olvidemos que para una familia tipo con dos hijos, la AUH (\$360) llegó a cubrir un 37% de la Canasta Básica de Alimentos (\$963, de acuerdo a datos de la Consultora SEL). Entendemos que este porcentaje de cobertura es un piso que no se puede vencer.

Los párrafos anteriores pretenden incorporar al debate algunos puntos que consideramos relevantes a la hora de discutir cómo profundizar (y en algunos casos mantener) los impactos positivos de la medida. Desde nuestro lugar, entendemos que esta medida -reclamo de los sectores populares desde hace más de una década-, debe defenderse para luego, transformarse.

VIII. Estructura social, estructura de clases

8.1. Clase contra clase

Estructura de clases en Argentina. Parte 1

*Equipo de Economía Política.**

Suele analizarse la estructura social de la Argentina sobre la base de la dicotomía pobres y ricos. Sin embargo, dado que vivimos en una sociedad capitalista, es necesario partir del concepto de clase social pues ella remite a la relación antagónica y fundamental que existe entre el capital y el trabajo, entre explotadores y explotados.

A partir de esa relación básica, es posible luego avanzar en un mayor nivel de complejidad caracterizando distintas fracciones dentro de las clases, analizando sus relaciones y formas de manifestación. En una serie de notas abordaremos una caracterización de la estructura de clases en la sociedad Argentina en la etapa actual. Primero, analizaremos en dos notas la estructura socioeconómica de la clase trabajadora y en una nota posterior buscaremos dar cuenta del perfil de la clase capitalista.

El análisis en esta primera nota abarcará al conjunto de los ocupados y desocupados y sus hogares, relevados en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por cuestiones metodológicas, no se toman en cuenta a los trabajadores jubilados o pensionados y a quienes habitan en ciudades no relevadas por el INDEC o viven en el espacio rural.

La estructura de la clase trabajadora

En una primera aproximación empírica excluimos del conjunto de la clase trabajadora a los propietarios de los medios de producción más concentrados y al conjunto de los gerentes y directivos en esas empresas. Son aquellos que tienen bajo su control y dirección la orientación general (política) del proceso de valorización y acumulación de capital. Si bien estos últimos (directivos y gerentes) pueden aparecer como “asalariados/as” ocupan claramente funciones ligadas a la producción y reproducción de las condiciones concretas de explotación y dominación sobre el conjunto del pueblo trabajador. Este grupo de personas ocupa de conjunto lo que suele denominarse Gran Burguesía. Cabe señalar que la EPH sólo registra muy parcialmente las características de este sector social minoritario pero poderoso. Fundamentalmente, la EPH no es un instrumento suficiente para el registro adecuado de los ingresos, condiciones de vida y acceso a medios de poder social (medios de producción y reproducción social). Por ello, recién en la siguiente nota podremos analizar y discutir más adecuadamente al conjunto de la Gran Burguesía o en términos más abstractos, la clase capitalista.

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 15 de noviembre de 2010.

El conjunto de la población que se encuentra por fuera de la clase capitalista puede ubicarse de manera general dentro de lo que podríamos denominar el pueblo trabajador (o clase trabajadora, en un sentido más abstracto). Sin embargo, no todos los miembros del conjunto del pueblo trabajador ocupan idénticas posiciones. Por un lado, podemos encontrar a quienes están en posiciones contradictorias de clase, como los Jefes y Profesionales independientes (o autónomos). Los Jefes tienden a ubicarse en una posición social que los lleva a representar los intereses del capital aún siendo, en principio, miembros de la clase trabajadora. Los profesionales independientes, por otro lado, suelen aparecer (y suelen verse) en una posición de “exterioridad” frente al conjunto del pueblo trabajador, en tanto no se encuentran subordinados directamente al poder del capital. Por otra parte, está la pequeña burguesía, que involucra a propietarios de pequeñas empresas y trabajadores autónomos con medios de producción. Su principal diferencia con la burguesía es que su actividad productiva está ligada esencialmente a una lógica de reproducción antes que de valorización, de manera tal que –a diferencia de aquella– estos pequeños productores viven de su propio trabajo. Finalmente, está el conjunto de los/as trabajadores/as: asalariados/as no jefes ni directivos, trabajadores/as autónomos sin medios de producción y quienes desarrollan tareas de servicio doméstico.

Esta primera aproximación nos permite construir un esquema de la estructura de clases en Argentina (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estructura de clases. Argentina. 4to. Trimestre, 2009.

Clase	Fracción	Proporción
Capitalista	Gran burguesía	2,98%
	Propietarios de Grandes Empresas	1,80%
	Directivos de Grandes Empresas	1,18%
Trabajadora	Posiciones contradictorias	4,40%
	Jefes Asalariados	2,72%
	Profesionales Autónomos	1,68%
	Pequeña burguesía	20,26%
	Propietarios de PyMES	4,41%
	Autónomos con medios de producción	15,84%
	Trabajadores/as	72,36%
	Profesionales Asalariados	3,50%
	Técnicos Asalariados	8,81%
	Asalariados Operativos	38,42%
	Asalariados Poco Calificados	12,10%
	Autónomos sin medios de producción	5,15%
	Trabajadores/as en Servicio Doméstico	4,38%
	Total	100,00%

Fuente: Estimación propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares. La estructura incluye sólo a quienes pertenecen a hogares con jefes de hogar ocupados o desocupados. La información disponible no permite “ubicar” estadísticamente en la estructura de clases a quienes pertenecen a hogares con jefes inactivos (en general, jubilados y pensionados). En cualquier caso, este cuadro representa al 75% de la población urbana.

Dos elementos saltan como relevantes en este punto. Primero, casi el 40% de la población puede ser ubicada en el núcleo de la clase trabajadora: asalariados operativos, con ciertas calificaciones técnicas especializadas. Segundo, una porción no despreciable del conjunto de la población forma parte de la pequeña burguesía, lo que lo convierte en un sector social relevante en términos de peso cuantitativo. En la próxima nota avanzaremos en una más detallada caracterización del conjunto del pueblo trabajador y sus condiciones de existencia.

8.2. Clase contra clase.

Estructura de clases en Argentina. Parte 2

*Equipo de Economía Política.**

En la nota anterior presentamos un esquema que permite abordar algunos aspectos de la estructura de la clase trabajadora en Argentina. En esta segunda entrega intentaremos presentar algunos rasgos de la evolución de esa clase.

En primer lugar, mientras que a fines de 2009 los ingresos medios de la ocupación principal de los/as trabajadores/as era de \$1.955 por mes, un recorte más preciso muestra que el 29,9% de los/as trabajadores/as está por debajo de ese valor promedio. Si incluimos a la pequeña burguesía en la estimación, cerca de 40% está por debajo de ese ingreso medio. La distancia entre los ingresos por la ocupación principal de los trabajadores en posiciones contradictorias de clase (jefes asalariados y profesionales autónomos) y las fracciones más empobrecidas de los trabajadores (de servicio doméstico y autónomos sin medios de producción) es de algo más de 4 veces. En el caso de la burguesía –como señalamos antes– la encuesta de hogares no refleja adecuadamente sus niveles de ingreso que en su mayor parte provienen de la gran propiedad de formas de capital (productivo, financiero, mercantil); por ese motivo los excluimos de la discusión por el momento.

En segundo lugar, mientras que en promedio 38,3% de los asalariados/as se encontraba empleado “en negro”, la incidencia del empleo no formal se incrementa al 56,4% para la fracción de los “asalariados que realizan tareas de poca calificación” y al 85,7% entre las/os trabajadoras/as que realizan tareas de servicio doméstico. Por el contrario, los asalariados/as que ocupan el lugar de Jefes tienen el menor nivel de informalidad laboral (7,5%). A su vez, para los/as trabajadores/as con poca calificación, entre 2003 y 2009 la precarización del trabajo se reduce mucho menos que para el conjunto de la clase en condición asalariada.

Tercero, para el conjunto de la clase trabajadora, el 42,3% tiene ingresos laborales por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Este valor supera el 93% entre las/as trabajadoras/es de servicio doméstico, el 58,6% entre los/as trabajadores/as con poca calificación, el 56,9% entre los autónomos no profesionales con medios de producción y el 78,1% entre aquellos autónomos no profesionales sin medios de producción. Cabe señalar que entre los trabajadores ocupados el 17,6% se encuentra en situación de pobreza y, en el caso de la pequeña burguesía, la cifra se aproxima al 21,7%.

Cuando expandimos estos datos al conjunto de la población, encontramos que el 28,7% de quienes viven en hogares de clase trabajadora y el 32,5% de quienes habitan en hogares de la pequeña burguesía se encuentran en situación de pobreza por ingresos. Para las posiciones

* Nota aparecida en prensadefrente.org el 30 de noviembre de 2010.

contradictorias de clase estos valores caen por debajo del 5% de la población mientras que dentro de los/as trabajadores/as la incidencia de la pobreza alcanza el 39% entre la población en hogares de trabajadores autónomos sin medios de producción y el 36% de los hogares de trabajadores/as de servicio doméstico.

Por último, podemos señalar que mientras para el conjunto de los hogares analizados los ingresos medios han subido sustancialmente entre 2003 y 2009, hay una significativa dispersión entre clases y fracciones de clase. Mientras el conjunto de los/as trabajadores/as han visto mejorar los ingresos medios de sus hogares 14% por encima del promedio, al interior de la clase trabajadora los autónomos profesionales, los asalariados profesionales y las trabajadoras de servicio doméstico han sido quienes más han perdido en términos relativos (-37%, -28% y -16%, respectivamente). En el otro extremo, los asalariados con poca calificación y con calificación operativa aumentaron por encima de la media (29% y 28%, respectivamente). Esto responde en gran medida al re-surgimiento de la lucha en la esfera sindical, que había estado ausente o en segundo plano en los años previos de consolidación y crisis neoliberal. Además, da cuenta de que la presunta reducción de la desigualdad puede encontrarse, sobre todo, al interior del pueblo trabajador, y no entre la clase que vive del trabajo y quienes apropian el excedente (sobre todo grandes capitales). En la próxima nota detallaremos la dinámica de los ingresos de la burguesía.

Esta situación de evidente precarización en las condiciones de vida y trabajo del conjunto del pueblo trabajador se presenta a pesar de que el crecimiento económico en los últimos 7 años ha superado el 8% anual. Veremos en la próxima nota que la contracara –paradójica a la vez que necesaria en el marco del capitalismo periférico– es una creciente concentración del valor producido por el pueblo trabajador en manos de unos pocos grandes capitales. En el neodesarrollismo kichnerista en su voluntad de garantizar “un capitalismo en serio”, si bien se ha elevado la cola inferior de la distribución de los ingresos, no se ha desplazado un patrón de valorización capitalista basado en la precarización y superexplotación persistente del trabajo. En la próxima nota veremos como se ha estructurado el capital en esta etapa posneoliberal.

IX. Crisis en el capitalismo

9.1. Crisis en el centro ¿crisis en la periferia?

*Mariano Féliz y Emiliano López.**

Desde hace ya varios años los países del centro capitalista atraviesan una profunda crisis. Esa crisis manifiesta el intento de solución transitoria de las contradicciones del comienzo del fin de la etapa neoliberal. En la periferia, en particular en América del Sur, el impacto de la crisis ha pasado paradójicamente para muchos a la manera de un chaparrón de verano, breve pero intenso. La novedad de esta situación remite al lugar que Nuestra América ocupa hoy en día en la economía mundial. La historia de la inserción de nuestro continente en el ciclo internacional del capital nos ha ubicado históricamente en el lugar de pasivos receptores de los impactos de las turbulencias de las potencias hegemónicas.

Hasta la crisis del '30, la inserción de las naciones de América del Sur como economías capitalistas dependientes, proveedoras de materias primas, articuló un patrón de valorización/acumulación basado en la exportación de bienes agrícolas, con sus respectivos impactos sobre la distribución y realización de los ingresos. La gran crisis y el proceso de la Segunda Guerra Mundial representaron el nuevo marco histórico en el cual se desarrolló una industrialización sustitutiva forzada por las circunstancias y, por lo tanto, dependiente y subordinada a la dinámica de acumulación de los países centrales. Los trabajadores pudieron ganar espacios en la distribución del ingreso pero en el marco de un patrón desarrollista donde la gran burguesía, en particular transnacional, consolidó su peso estructural hacia fines de los años '60.

En los '70, la nueva crisis mundial en el capitalismo abrió una larga transición: el proyecto neoliberal. En la periferia, la reestructuración del capital local y su inserción en el ciclo internacional se sostuvieron en las más sangrientas dictaduras militares y los regímenes de democracia restringida que en los '80 y '90 concluyeron la tarea de consolidar nuevos patrones de desarrollo basados en el saqueo de las riquezas naturales (petróleo, gas, soja, oro, etc.) y la superexplotación del trabajo.

América del Sur atraviesa desde entonces la primera década de conformación de una nueva modalidad de desarrollo cuya impronta general puede llamarse neodesarrollismo. El proceso de ofensiva sobre los trabajadores del mundo que implicó el giro neoliberal se dio a la par del surgimiento de nuevos espacios de valorización en la periferia, que ganan peso en el ciclo global del capital, en particular China e India. Esto ha creado la aparente contradicción de una crisis profunda en el centro y una situación de bonanza relativa en América del Sur. Pese al fuerte impacto que tuvo el fin de la burbuja especulativa en commodities durante 2008, la sostenida acumulación de capital en el espacio asiático ha permitido a todos los países del subcontinente suramericano atravesar rápidamente y sin grandes sobresaltos el primer escalón de la crisis.

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 8 de noviembre de 2010.

Sobre la base de una demanda creciente de bienes ligados al agronegocio, necesarios para apuntalar el proceso de acumulación asiático, los términos de intercambio de los países de Nuestra región se han visto favorecidos, permitiendo sortear con cierta celeridad la crisis favoreciendo, a su vez, en gran parte de Nuestra América un patrón extractivo-rentista de desarrollo capitalista. De esa manera, en los últimos cuatro años el crecimiento en los países de América latina y el Caribe ha superado el 8 por ciento, mientras las economías centrales se han estancado literalmente.

La crisis actual del centro capitalista no es ni más ni menos que la crisis del neoliberalismo que comenzó en la periferia una década antes. En la periferia esta crisis condujo a resultados muy diferentes a los que hoy podemos ver en los países centrales. En primer lugar, las intervenciones de los Estados centrales responden todavía a los parámetros neoliberales (ajuste fiscal, reforma jubilatoria, etc.). En contraste, la crisis en América del Sur implicó cambios progresivos en la forma del Estado, llegando incluso a moldear proyectos anticapitalistas en algunos países. En segundo lugar, para comprender estas trayectorias divergentes en la etapa posneoliberal, ha sido clave el proceso de resistencia y reorganización popular que se gestó en los años de auge del neoliberalismo en Nuestra América. Los nuevos movimientos sociales, sumados a las prácticas políticas previas de los sectores populares, produjeron cambios en las políticas estatales y, con matices en los diferentes países, permitieron superar –parcialmente– la etapa neoliberal del capitalismo periférico. En el centro, el horizonte se ve más oscuro, cuando a pesar de la gran movilización popular de los últimos meses, los sectores dominantes continúan imponiendo la agenda neoliberal sin matices.

9.2. Corolario del neoliberalismo

*Mariano Félix.**

La actual crisis mundial tiene su origen aparente en una crisis financiera. Sin embargo, es el corolario del neoliberalismo -un proceso de reestructuración de la economía mundial- que avanzó con fuertes resistencias populares desde los años '70. Esta crisis golpeará a todos, pero en la periferia el impacto será mayor allí donde la tras-nacionalización de sus economías haya avanzado más. El capitalismo choca hoy en día contra una pared por su propia lógica: producir cada vez más, a un valor (costo privado) cada vez menor, para el consumo de una proporción decreciente de la población. Se produce más que nunca pero miles de millones en el mundo siguen pasando hambre. La presente crisis potencia los costos sociales del capitalismo (incluidos la destrucción del medio ambiente y el saqueo de las riquezas naturales). Estamos frente a una crisis ambiental y civilizatoria, además de económica; una crisis que pone en cuestión el conjunto del capitalismo como única forma de desarrollo, además del propio concepto de “desarrollo” y los parámetros para medirlo.

En este contexto, la crisis es un instrumento de los sectores dominantes para intentar consolidar su posición a costa de las mayorías. Mientras en la etapa de crecimiento el capital avanzó precarizando nuestras vidas, a través de la crisis profundiza esas tendencias como medio para superar sus límites. Por eso arremete primero con suspensiones y despidos, rebajas salariales y el cese de contratos; luego le siguen los cierres de empresas en perfectas condiciones técnicas para producir. Estos no son “efectos de la crisis” sino -más precisamente- acciones deliberadas de empresarios y gerentes para no perder dinero y trasladar el costo a quienes ninguna responsabilidad tienen (los trabajadores y trabajadoras). Atravesamos una crisis del capital, es decir de una forma de producir sólo aquello que es rentable sin atender a las necesidades sociales insatisfechas. Frente a la incertidumbre política y la agitación social, atravesamos -nuevamente- una crisis del pensamiento hegemónico que no puede dar las respuestas (teóricas y prácticas) necesarias. Cuando la “mano invisible” parece no alcanzar, los sectores empresariales más concentrados demandan mayores subsidios y nuevos apoyos de ese Estado que en “tiempos normales” prefieren negar. En tiempos difíciles olvidan sus prejuicios y diferencias sectoriales para crear un frente único contra el pueblo trabajador, exigiendo que se garanticen el orden, la “competitividad” y la “moderación” de los reclamos populares. Frente a la crisis de las ideologías del capital en tiempo de auge (el liberalismo) se fortalecen las posiciones desarrollistas que pretenden reubicar al viejo Estado (capitalista) en el centro del desarrollo (del capital); no hay novedad en esto.

El par liberalismo-keynesianismo es parte de la artillería ideológica de los sectores dominantes pues no propone nada que cambie -de fondo- la dinámica de la crisis (las relaciones sociales que la

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 16 de marzo de 2009.

sustentan y expanden) y proteja al conjunto del pueblo trabajador. Este presente re-actualiza la necesidad de proponer e impulsar alternativas que apuntalen un cambio social profundo frente a un sistema de producción social que siempre carga los costos de “su” desarrollo sobre el conjunto del pueblo. Estas opciones pueden resumirse en unos pocos ejes.

Por un lado, medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población de los “efectos” inmediatos de la crisis. Por ejemplo, la suspensión de los despidos por dos años, la creación de un ingreso universal equivalente a la canasta básica –comenzando por la elevación inmediata de los planes sociales (Jefes y Jefas, Familias)–, el aumento de emergencia en salarios y jubilaciones y la creación de tarifas sociales para los servicios y el transporte públicos. Debe agregarse la protección pública y promoción con créditos y subsidios de las experiencias de recuperación de empresas por sus trabajadores/as y los emprendimientos autogestivos y cooperativos.

En segundo lugar, un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones del hábitat de los barrios populares a través de un programa de obra pública dirigido a la provisión de servicios sociales básicos (agua, cloacas, luz y gas, servicios médicos, escuelas, hábitat comunitario).

Por último, un programa de socialización de la producción estratégica (empezando por energía, transporte, comercio exterior y banca) bajo propiedad pública con gestión de trabajadores y usuarios, acompañado por una reforma tributaria que rebaje el IVA a los productos básicos y acreciente la carga impositiva de los sectores de más ingresos. Este –incompleto, perfectible pero realizable– conjunto de medidas de emergencia permitiría no sólo proteger a los sectores más vulnerables del pueblo frente a la profundidad de la crisis y favorecer la recuperación económica, sino que posibilitaría avanzar por un camino de cambio social que transforme la organización de la producción y la distribución de la riqueza.

9.3. Riesgo de default

*Mariano Félix.**

La potencia hegemónica en el mundo (equivalente al 20 por ciento del PBI global) enfrenta una situación inédita: estuvo a horas de entrar en cesación de pagos sobre su deuda soberana. Con un volumen de deuda pública que ya supera el valor de su PBI y un déficit fiscal en torno del 10 por ciento, los EE.UU. pone al capitalismo –tal cual lo conocemos– al borde de un abismo insondeable. Esta situación es consecuencia inmediata del neoliberalismo y su crisis en los países centrales. Por un lado, el salto en la deuda en el último lustro es el resultado del salvataje al sistema financiero luego de la explosión de la última burbuja inmobiliaria, en 2007-2008. Ese proceso fue la más reciente etapa –antecedida por la avanzada imperialista en Irak, Afganistán– de la crisis transicional del neoliberalismo. Por otro lado, el pecado original del neoliberalismo estadounidense (la reducción en los impuestos a las corporaciones y los ricos) crea una situación fiscal explosiva que sólo contribuye a alimentar las dificultades de financiamiento del Estado norteamericano.

Frente a una situación que recientemente alcanzó ribetes tragicómicos, los sectores dominantes dentro y fuera de los Estados Unidos –bajo la presión de los sectores de la derecha radical– optaron por avanzar recortando el gasto público social (en particular el seguro médico para los más pobres y los jubilados). La alternativa de recuperar capacidad fiscal (gravando a los ricos y al gran capital) o recortar los gastos militares apenas si fue puesta en discusión. Al igual que la UE, en los Estados Unidos el neoliberalismo frente a la fatalidad de su hora final busca radicalizarse, bajo las formas políticas del ajuste, el conservadurismo y la xenofobia.

La salida elegida tendrá repercusiones importantes para la economía global y para los pueblos – en particular, en lo inmediato, en los EE.UU.–. La crisis neoliberal acrecentó la desigualdad de ingresos y riqueza entre clases sociales y al interior de los trabajadores, en desmedro de las minorías. Miles de familias perdieron sus casas y miles (millones) más sus empleos. El ajuste fiscal sobre los empleados públicos y los pobres sólo aumentará la penuria popular. El bajo ritmo de crecimiento de la economía norteamericana desde hace años se traduce en una pobre capacidad de creación de empleos. El ajuste acordado acentuará la crisis laboral y sus consecuencias sociales.

La posibilidad de un default abrió paso a la opción del recorte fiscal, que supone la paradoja de profundizar la brecha social, la conflictividad política y la crisis de crecimiento sin resolver –sino postergar– el problema de fondo: la tendencial pérdida de centralidad del capital con base en los Estados Unidos. El ascenso de China como nueva potencia económica acentúa el desplazamiento del capital norteamericano como dominante en las principales ramas industriales; hoy China es el principal importador, exportador y hasta productor de las principales manufacturas industriales. Esta

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 15 de agosto de 2011.

situación se manifiesta en la pérdida de la hegemonía del dólar como moneda mundial: los bancos centrales y las empresas dan pasos para relativizar el peso del dólar en sus transacciones y activos financieros. Si bien la diplomacia del dólar está en su peor momento, Estados Unidos conserva aún cierto liderazgo tecnológico y capacidad militar. Igualmente, el primero hoy no alcanza, pues la internacionalización del capital acelera la difusión de los nuevos saberes.

El mundo comienza una década definitoria. La hegemonía de los Estados Unidos se encuentra amenazada y la crisis del neoliberalismo en marcha sólo acelera su desplazamiento. El proyecto europeo hace agua frente al fracaso de la moneda única como disciplinador de los Estados nacionales. China se coloca cada vez más claramente como quien apuesta a convertirse en la potencia dominante luego del primer cuarto del siglo XXI. La periferia subordinada –Sudamérica incluida– se encuentra ante una disyuntiva. Sumarse como furgón de cola del proyecto imperialista de la nueva China (como parecen apostar Brasil y Argentina) o llevar adelante proyectos posneoliberales que promuevan las condiciones para la construcción de una alternativa global al desarrollo capitalista.

X. Discutiendo alternativas al neodesarrollismo

10.1. Socialismo del siglo XXI: contradicciones, barreras y posibilidades

*Mariano Félix y Melina Deledicque.**

Hasta fines de los años ochenta, Venezuela era conocida fundamentalmente por su petróleo, playas y *Miss Universo*. En 1989, en el estallido popular denominado *Caracazo*, el pueblo venezolano decidió comenzar a dar vuelta la historia. En 1992, el comandante Hugo Chávez encabezó un nuevo alzamiento contra el neoliberalismo y, si bien fracasó, abrió una esperanza. Veinte años después, Venezuela está a la vanguardia del cambio posneoliberal en la región.

Venezuela es un país basado en el rentismo petrolero y ejemplo de los costos de seguir ese camino. El proceso iniciado en 1998 intenta –trabajosamente y lejos de la perfección– avanzar en un cambio copernicano que aproveche los ingresos extraordinarios de la explotación petrolera (que representa casi la totalidad de las exportaciones) para otorgar a millones de venezolanos los derechos sociales básicos y, a su vez, pueda conformar las bases de un nuevo proyecto social-político, que desde 2006 se conoce como Socialismo del siglo XXI.

El primer gran paso en esta dirección fue la recuperación para el pueblo de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el año 2003, ciento por ciento estatal e instrumento clave en la redistribución social de la renta petrolera, equivalente a casi la mitad de la recaudación fiscal. Con la “siembra petrolera”, el gobierno bolivariano ha avanzado en la construcción de ciudadanía para los millones que habitan las barriadas populares de Caracas y más allá las cuales no existían para el Estado. Ese proceso involucró la promoción de la organización popular en el relevamiento de las necesidades barriales y en su solución a través de una multitud de misiones que permitieron conformar una red de mercados populares para luchar contra la especulación y la inflación, crear miles de salas médicas que desarrollan la salud preventiva, impulsar campañas que erradicaron el analfabetismo, entre otras. En menos de una década, millones de venezolanos/as accedieron a bienes y servicios que les fueron históricamente negados por las elites gobernantes.

Esa estrategia es acompañada de una política de desarrollo que busca garantizar la soberanía alimentaria y productiva del país. A través de convenios de cooperación e intercambio solidario con las naciones aliadas, el gobierno ha conseguido la construcción de decenas de emprendimientos para la producción de alimentos, bienes de consumo y maquinaria. Estos intercambios compensados buscan superar la lógica del comercio capitalista, apuntalando la posibilidad de sacar a Venezuela de años de dependencia importadora. La misión Gran Vivienda Venezuela, que concluirá sus primeros

* Nota aparecida en el diario *Página/12* el 1 de octubre de 2012.

dos años construyendo 300 mil casas nuevas, se apoya en el aporte material y humano de Rusia, Bielorrusia, China y otros socios, y en una multitud de emprendimientos autogestivos.

El proyecto de revolución del siglo XXI en Venezuela busca –con dificultades y limitaciones– construir un nuevo tipo de Estado en un nuevo tipo de sociedad. A través de las leyes del Poder Popular (aprobadas en 2010) se impulsa, financia y apoya la auto-organización popular por la vía de miles de consejos comunales y decenas de comunas socialistas en construcción. Si el pueblo logra aprovechar la oportunidad que estos instrumentos proporcionan, ellos podrán conformarse en experiencias embrionarias de formas de auto-gobierno popular que desplacen al Estado burgués que todavía prevalece. El principal riesgo es el uso clientelístico y burocrático que en muchos casos impera. A estas nuevas formas organizativas se las intenta complementar con la promoción de nuevas formas de propiedad comunitaria y cooperativa que impulsen otro estilo de desarrollo.

El camino del Socialismo del siglo XXI está plagado de barreras. Los propios aparatos del Estado existente suelen bloquear las iniciativas populares por el peso de viejas estructuras políticas. En una alianza de gobierno que lejos está de ser ejemplo de pureza ideológica o política, Chávez sigue siendo fundamental como factor de unidad pero también de radicalidad. La política macroeconómica enfrenta las barreras de una economía capitalista aún minada por grandes empresas que pretenden continuar imponiendo sus intereses al proyecto colectivo. Por sobre todas las cosas, enfrenta la dificultad de avanzar en un cambio trascendental en una región donde Argentina y Brasil buscan imponer proyectos neodesarrollistas de capitalismo periférico. La incorporación de Venezuela al Mercosur (estrategia de integración de raíz neoliberal) plantea el interrogante sobre las posibles contradicciones con la apuesta de una integración posneoliberal en el ALBA. Venezuela es hoy el faro que ilumina un posible horizonte de superación del desarrollo capitalista. La continuidad y profundización de ese proceso son la esperanza de los pueblos del mundo en esta etapa de crisis y cambios en el capitalismo a escala internacional.

10.2. Los límites del neodesarrollismo y el proyecto de país que podemos construir

*Equipo de Economía Política.**

A 10 años del 2001, se reactualiza el debate sobre el proyecto de país. La crisis del neoliberalismo abrió paso a una nueva etapa que –sin embargo– no cumplió con las expectativas de cambio social que el pueblo trabajador demanda en aquel momento. La recomposición de las clases dominantes en lo político tuvo su reflejo en la consolidación del país creado a través del proyecto neoliberal: el neodesarrollismo kirchnerista nació para reproducir de manera ampliada las bases excluyentes de un modelo de saqueo de las riquezas naturales y precarización extendida del trabajo y la vida.

Lo anterior no significa que no haya habido cambios en una década, o que el kirchnerismo sea simplemente más de lo mismo. Por el contrario, los grandes cambios en lo socio-económico y en las políticas del Estado, son expresión todo lo que cambió en Argentina a partir de la crisis de la Convertibilidad; pero también de lo que se consolidó a través del cambio.

El proyecto neodesarrollista del kirchnerismo terminó de conformar un país montado en la ola del auge de las *commodities*. La sojización del agro y la agroindustria, el saqueo de las riquezas naturales a través de la minería a cielo abierto y las megaobras energéticas son la base de un modelo económico lanzado a la producción de materias primas e insumos para alimentar el ciclo global del capital dominado por las grandes transnacionales. El peso creciente de la relación con Brasil y China (o –más precisamente– con sus empresas transnacionales) no altera la ecuación: el proyecto del kirchnerismo es insertar a la economía argentina como un eslabón periférico y subordinado en el capitalismo global posneoliberal.

Los límites de ese proyecto comienzan a ser cada vez más evidentes:

(1) El aumento del empleo no permite eliminar la pobreza y la exclusión de cerca de un tercio de la población. La precarización del empleo sigue extendida a más de la mitad de la fuerza de trabajo y ello conduce a bajos salarios y malas condiciones de empleo: el 40% de los trabajadores tiene remuneraciones por debajo del salario mínimo y 50% de los asalariados en el sector privado están en negro.

(2) La estrategia de industrialización –que es presentada como la panacea para terminar con todos los males del capitalismo argentino– encuentra rápidamente un límite: el PBI industrial no lograr superar el 20% del valor agregado total. En paralelo, a pesar de los subsidios, el dólar alto y la

* Nota aparecida en la revista Cambio Social de noviembre de 2011.

superexplotación de la fuerza laboral, las ramas manufactureras del capital son cada vez más deficitarias en su comercio exterior.

(3) La redistribución del ingreso choca contra el poder de las grandes corporaciones y la complicidad estatal. La inflación de 25% anual desde hace 4 años –toda la última gestión kirchnerista– impide el aumento en el poder de compra de los salarios y el aumento en la participación de los ingresos de los/as trabajadores/as. El *fifty-fifty* en el reparto se aleja cada vez más.

(4) La expansión de la renta agraria y minera alimenta la especulación inmobiliaria y los alimentos, aumentando artificialmente el precio de la tierra, desplazando a los pequeños productores y expulsando al pueblo trabajador de la vivienda digna. Simultáneamente, la soberanía alimentaria es puesta en riesgo.

(5) Las políticas sociales y previsionales mantienen un carácter puramente compensatorio, arbitrario, fragmentario y con el objetivo de contener –sin resolver plenamente– las demandas populares. El derecho universal a la seguridad social integral y los servicios sociales básicos (salud, educación, hábitat) está fuera del horizonte del neodesarrollismo.

(6) La política fiscal sigue sin gravar importantes fuentes de renta (minera y financiera), grava muy levemente otras rentas (agraria e inmobiliaria) al igual que los ingresos suntuarios. El superávit fiscal se mantiene como un objetivo primordial a los fines de sostener el pago de la deuda pública.

Estos límites se verifican aún frente a una coyuntura internacional favorable a los países periféricos. Es probable que en el marco de una crisis en los países centrales –que presenta tendencias a profundizarse– las restricciones al proyecto neodesarrollista se agudicen, aunque ello no implique grandes cambios a corto plazo.

La situación internacional abre un campo para plantear alternativas. Los sectores dominantes están buscando profundizar un modelo de desarrollo capitalista subordinado a las potencias subimperiales (Brasil, China) siendo el Unasur (Unión de Naciones del Sur) el marco institucional de ese proyecto. En ese camino se orientan la multiplicación de acuerdos con el gobierno chino –que en los hechos suponen un intercambio desigual de tierra/agua/soja argentina por inversiones directas chinas en nuestro país– o el avance del IIRSA (proyecto de infraestructura regional apoyado por el BID y el Banco Mundial) que busca garantizar la provisión de energía e infraestructura de transporte para el lanzamiento del Brasil como potencia económica global. Las nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, buscan consolidar un blindaje contra las turbulencias internacionales pero no cuestionan el rol de la región en el mundo como proveedor de riquezas naturales. El neodesarrollismo argentino es perfectamente compatible y complementario con el camino elegido: los proyectos oficiales de ley de tierras, la orientación de la mayor parte de las líneas de crédito y financiamiento de proyectos de ciencia y técnica a las grandes empresas, y los programas de desarrollo productivo de mediano plazo (como el recientemente anunciado “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial”), sólo pretenden consolidar la competitividad de la plataforma agro-industrial argentina.

La alternativa supone caminar una integración regional que coloque al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) como eje y que oriente la nueva arquitectura institucional (Banco del Sur, moneda regional Sucre, etc.) para estructurar una articulación regional de base solidaria y complementaria. Esto debería orientarse a permitir a todos los países de la región comenzar a

desandar la huella del neoliberalismo, avanzando en un proyecto posneoliberal con tendencia socialista. Una estrategia de integración regional en tal sentido permitirá encaminar un proyecto que supere los límites del neodesarrollismo y servir para iniciar una transición hacia un desarrollo no capitalista.

10.3. La autogestión como práctica y proyecto

*Melina Deledicque y Mariano Féliz.**

Las experiencias de autogestión obrera han tomado impulso en la Argentina en los últimos años. Fueron los trabajadores desocupados quienes retomaron los ideales autogestivos en su lucha por resignificar los planes sociales arrancados al Estado para crear emprendimientos colectivos autoorganizados. Su lucha no era sólo por la inclusión social (empleo asalariado), sino por el cambio social a través de la creación de espacios de trabajo digno. En paralelo, la historia argentina es rica en procesos de toma de fábricas y autogestión obrera, desde la batalla por el Frigorífico De la Torre llegando al proceso que comienza en los '80 y se multiplica en 2000/1, y que da cuenta de varios miles de trabajadores que han decidido apostar al autogobierno o autogestión: una práctica a través de la cual deciden impulsar un proceso por autoorganizar sus espacios de trabajo, sus comunidades y sus proyectos productivos.

La autogestión enfrenta la mediación del capital como actor social en la producción. La relación empleado-patrón desaparece y con ello el trabajo asalariado como forma de valorización del capital. Anulado el capital, empieza a recrearse una forma de trabajo digno, no alienado, una forma de asociación libre de trabajadores.

El capitalismo se organiza en torno de la explotación del trabajo y la primacía de la ganancia. La autogestión rechaza la acumulación por la acumulación misma. El proceso de producción ya no valoriza al capital sino valoriza a los propios trabajadores, cuyo trabajo concreto y su producción concreta pasan a tener prioridad.

Con esta forma de organizar la producción, las imposiciones "objetivas" del mercado se desnaturalizan. Los valores del capital (la ganancia como fin) comienzan a ser desplazados y entran a jugar otros valores. Se cuestionan las jerarquías impuestas por la forma de organización del proceso de trabajo capitalista ligadas a la necesidad que tienen los patrones de dominación política y división de los trabajadores. La gestión conjunta y solidaria torna al trabajo más productivo. Como todo el esfuerzo individual redundando en beneficios inmediatos a los productores directos aumenta la creatividad social y se multiplica la cooperación.

Además, permite reducir la división entre trabajo manual e intelectual, entre la concepción de las actividades y la ejecución de las mismas. La producción asociada permite no sólo la apropiación colectiva de los medios de producción sino que los trabajadores tienen la capacidad de apropiarse del conocimiento científico-técnico que da sentido a su trabajo. Pueden recuperar de esa forma el saber teórico y práctico de la totalidad del proceso de producción, jugando en esto un papel clave la rotación en los puestos de trabajo.

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 2 de noviembre de 2009, bajo el título de "Valoriza a los trabajadores".

La autogestión tiene profundas implicancias en la subjetividad de los trabajadores que encaran – con esperanza– ese proyecto. Estos espacios de gestión y producción de la vida cotidiana, más allá de la lógica del mercado, alteran la identidad de quienes participan pues cambia la forma que tienen de relacionarse entre sí (con sus compañeros) y con el resto del pueblo. La práctica cotidiana de reflexionar al hacer permite avanzar en formas de interacción más libres y justas.

En este proceso se va creando una nueva cultura del trabajo y una nueva cultura política. Cuando alguien se acostumbra a autodeterminarse en una esfera de su vida (el trabajo) ya no aceptará sin chistar el autoritarismo y la sumisión en las otras (su vida familiar, el sistema político). Si la autogestión obrera conlleva la reapropiación colectiva de la producción socializada, ella permite avanzar en el espacio de la política en un creciente rechazo a la mediación del Estado, cuestionando la privatización de la política y reclamando la constitución de una nueva forma de gestión social, de amplia participación popular y realmente democrática.

Las prácticas autogestivas enfrentan sus límites en el marco de una sociedad dominada por el capital. Encuentran la dificultad de desplazar al mercado como espacio de venta de su producción, la compra de sus insumos y (parcialmente) la reproducción de la vida de sus familias. La necesidad de enfrentar en el mercado a empresas capitalistas limita la autonomía en la toma de decisiones. Estos son límites reales –no meramente normativos (producto de la falta de conciencia “socialista”)– y requieren el desarrollo de estrategias de mayor cooperación y articulación entre los proyectos autogestivos y los movimientos sociales.

En tal sentido, el proceso de autogestión productiva deber ser –y lo es– parte de un proceso más global de cambio social. Es parte de una práctica de construcción cotidiana de poder popular sobre la base de la autoactividad de los trabajadores.

10.4. ¿Competitividad o cooperación?

*Mariano Félix.**

Las elecciones de junio marcaron el fin de la hegemonía política del kirchnerismo y el comienzo del “diálogo social”. A través de éste los sectores hegemónicos pretenden articular y canalizar sus diversas demandas a los fines de construir una transición ordenada hacia la próxima alianza dominante. En esta etapa el debate es el modelo económico y en particular la necesidad de recuperar la llamada “competitividad” de la economía. Desde el punto de vista del capital esto supone devaluar la moneda, reducir las retenciones a las exportaciones, contener las presiones salariales, sostener el superávit fiscal y mantener los subsidios a las grandes empresas. Es decir, profundizar la capacidad del país de competir internacionalmente sobre la base de la precarización. La búsqueda de competitividad como piedra de toque de las políticas económicas privilegia la ganancia empresaria y los valores del capital: la competencia como medio de desarrollo, la producción por la producción misma, los beneficios privados por sobre los intereses de la sociedad.

Desarrollarse sobre la base de promover la competitividad internacional significa que “el país” busca ganar en el mercado mundial a costa de otros países. Dentro de esta forma de desarrollo ganar es siempre “empobrecer al vecino”. La incapacidad de competir implicará la necesidad del “ajuste”: las empresas deberán reducir su personal, los trabajadores aumentar su rendimiento y postergar sus demandas de mejoras en las condiciones laborales. Todo esto so pena de mantenerse “ineficientes”, incapaces de honrar al Dios mercado. Cuando eso ocurre, fuga de capitales, despidos y suspensiones se convierten en la respuesta del capital.

En este marco el diálogo sobre las políticas públicas deja de lado un debate más de fondo. ¿Solo nos queda ser competitivos para “desarrollarnos”? ¿No hay otras alternativas? Por el contrario, a esta modalidad de desarrollo –que expresa la economía política del capital– se opone otra estrategia, otra posibilidad: la economía política del trabajo.

Esta economía política se basa en las experiencias de organización del pueblo trabajador y sus fundamentos. A la competencia que todo lo destruye, opone la cooperación. Desde la voluntad de organizarse colectivamente en sindicatos y comisiones internas al armado de agrupaciones de base y asambleas barriales, la historia del pueblo trabajador indica que la solidaridad y cooperación es la mejor estrategia para mejorar y defender sus condiciones de vida. La organización jerárquica de la producción capitalista es cuestionada por las modalidades de autogestión obrera. Desde Fasinpat (ex Zanon) hasta las cooperativas textiles de los movimientos territoriales autónomos, todas estas experiencias dan cuenta de la “improductividad” de los patrones y dan muestras de la potencial eficacia de la autoorganización de los trabajadores. Frente a la producción por la producción misma

* Nota aparecida en el diario Página/12 el 31 de agosto de 2009.

que privilegia sólo la ganancia privada, la economía política del trabajo presenta la necesidad de producir para la satisfacción de necesidades y privilegiando la protección del medio ambiente.

Las asambleas y movimientos que participan de la Unión de Asambleas Ciudadanas y los movimientos campesinos son hoy ejemplo de la posibilidad de comenzar a pensar un mundo que respete a la tierra y construir una modalidad de desarrollo que haga uso de las riquezas naturales –sin saquearlas y destruirlas–. Por fin, la expansión sin límites de los mercados capitalistas y la propiedad privada es cuestionada por una voluntad de ampliar el espacio común y la distribución de bienes y servicios sin la mediación del dinero y los precios. En ese camino encontramos la lucha por el software libre y la producción pública de medicamentos, la creación de bachilleratos populares y la lucha por la educación y salud pública. En síntesis, la economía política de los/as trabajadores/as enfrenta a los valores del capital, los sueños y necesidades vitales del pueblo. Privilegia la solidaridad sobre el egoísmo, la unidad de los pueblos a la centralización regional del capital, el tiempo vital sobre el tiempo de trabajo abstracto, el intercambio de culturas y experiencias frente al movimiento de mercancías.

Esa economía política puede orientar otro modelo de desarrollo poscapitalista a ser construido (prefigurado) a partir de hoy mismo. Un proyecto de desarrollo que fomente los emprendimientos asociativos con financiamiento y tecnología adecuada a modalidades cooperativas de gestión. Un programa que involucre la creación de espacios de intercambio no mercantilizados, que aseguren el derecho a los medios de vida, a la salud y la educación, a la información, al esparcimiento y al tiempo libre sin las restricciones de la propiedad privada. Un plan que suponga la socialización de los medios de producción estratégicos bajo el control del pueblo a través de formas de gestión democrática y participativa.

Los autores

Facundo Barrera

Licenciado en Economía (UNLP)/ Magister en Economía Política con mención en Economía Argentina (FLACSO - Sede Argentina). Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becario doctoral Tipo II en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). Docente de la Facultad de Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP).

Paula Belloni

Licenciada en Economía (UNLP). Becaria CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales en la FLACSO-Argentina. Investigadora del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. Docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Leandro M. Bona

Licenciado en Economía UNLP. Maestrando en Economía Política en FLACSO. Desempeñó y desempeña cargos de docencia en las Facultades de Ciencias Económicas, Trabajo Social y Humanidades (UNLP) y en el Liceo Víctor Mercante de la UNLP. Becario de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Miembro del Proyecto de “Tendencias, barreras y límites del proyecto neodesarrollista en Argentina”.

Melina Deledicque

Trabajadora no docente en la Facultad de Trabajo Social (UNLP). Estudiante avanzada de Sociología. Ha participado en diversos proyectos de investigación y publicaciones sobre movimientos sociales, empresas recuperadas, proceso de trabajo, pobreza y vulnerabilidad. Es coautora de La ruta de los piqueteros (2010) y Movimientos sociales y autonomía colectiva: La política de la esperanza en América Latina (2013).

Ismael Domian

Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.

Mariano Félix

Licenciado en Economía. Doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. Profesor del departamento de Sociología de la UNLP. Investigador del CONICET en el CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP.

Lisandro Fernández

Licenciado en Economía (UNLP). Becario doctoral del CONICET, Programa de Estudios Regionales y Territoriales, Instituto de Geografía, FFyL, UBA. Doctorando en Ciencias Sociales por la UNLP

Matías García

Ingeniero Agrónomo. Doctor en Ciencias Agrarias y Forestales. Profesor Adjunto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Docente de la Universidad Nacional de La Plata. Investigador Asistente del CONICET.

Emiliano López

Becario postdoctoral del CONICET. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales-UNLP/CONICET. Doctor en Ciencias Sociales por la UNLP. Magister en Ciencia Política y Sociología por la FLACSO. Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Pablo Ernesto Pérez

Licenciado en Economía (UNLP). Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y en Ciencias Económicas (Université de Paris-Est). Investigador Adjunto del CONICET. Profesor Titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.

Equipo de Economía Política

Integra el proyecto "Proyecto neodesarrollista. Proyectos de sociedad en disputa, barreras, límites y posibilidades" radicado en el Centro de Investigaciones Geográficas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Equipo de Hábitat Urbano

Integra el proyecto "Ciudad, mercado inmobiliario y conflicto. Una aproximación metodológica para la construcción de un observatorio urbano", el cual es desarrollado en el marco del Programa de Incentivos a la investigación del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.

Argentina neodesarrollista /

Mariano Feliz ... [et.al.] ; coordinado por Mariano Feliz. - 1a ed. -

La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 2014.

E-Book.

ISBN 978-950-34-1180-3

1. Economía Política. 2. Neoliberalismo - Políticas Sociales. I. Feliz, Mariano II. Feliz, Mariano, coord.

CDD 330.1

Diseño de tapa: Dirección de Comunicación Visual de la UNLP

Universidad Nacional de La Plata – Editorial de la Universidad de La Plata

47 N.º 380 / La Plata B1900AJP / Buenos Aires, Argentina

+54 221 427 3992 / 427 4898

edulp.editorial@gmail.com

www.editorial.unlp.edu.ar

Edulp integra la Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN)

Primera edición, 2015

ISBN 978-950-34-1208-4

© 2015 - Edulp

S
sociales



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA